



UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID UDIMA

ALUMNO: Luis Martín Fernández-Largo DNI 2536173D

MÁSTER DE PRÁCTICA ABOGACÍA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FIN DE MÁSTER

EL PROCESO DE NÚREMBERG. ORIGEN DEL CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD

TUTOR/DIRECTOR: Oscar Vos Benítez

Madrid, 30 de agosto de 2020

INDICE

PAG.

ABREVIATURAS	5
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	7
I- ANTECEDENTES DEL CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD	10
II- ORIGEN DEL PROCESO	15
1- Durante la Guerra	15
2 -El Estatuto o Carta de Londres	20
2.1- La Ley aplicable	20
2.2- Las acusaciones	22
2.2.1- Crímenes contra la paz	23
2.2.2- Crímenes de guerra	25
2.2.3- Crímenes contra la humanidad	26
2.2.4- La conspiración o complot	32
2.3- A quien acusar	33
III- EL PROCESO	36
1- Cuestiones procesales	36
2- Los acusados	40
2.1- Los individuos	41
2.2- Las organizaciones	44
3- Los cargos	45
3.1- Cargo de conspiración	45

3.2- Cargo de crímenes contra la paz	47
3.3- Cargo de crímenes de guerra	48
3.4- Cargo de crímenes contra la humanidad	48
4- Las pruebas	50
4.1- Régimen general	50
4.2- Las pruebas aportadas	51
5- Las alegaciones de la Defensa. Controversias jurídicas	57
5.1- Principio <i>nullum crimen nulla poena sine lege</i>	57
5.2- Principio de territorialidad (<i>lex loci</i>)	61
5.3- Principio de responsabilidad penal individual	62
5.4- Principio <i>tu quoque</i>	63
5.5.- Principio de imparcialidad judicial	64
6- La sentencia	65
 IV- LOS OTROS PROCESOS DE NÚREMBERG. EL PROCESO DE TOKIO	69
1- Los procesos en las zonas ocupadas	69
1.1- Tribunales norteamericanos	70
1.2- Tribunales alemanes	74
2- El proceso de Tokio	75
 V- CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE NÚREMBERG	80
1- Los Principios de Núremberg	80
2- Nueva normativa. El Código de Ofensas Internacionales contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad	84
3- Nueva Jurisdicción	86
3.1- El Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia	86
3.2- El Tribunal Penal Internacional para Ruanda	89
3.3- La Corte Penal Internacional	91

VI- CONCLUSIONES	97
NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA CITADA	105
BIBLIOGRAFÍA	107
DOCUMENTOS	110

ABREVIATURAS

AGNU	Asamblea General de las Naciones Unidas
CIMTFE	<i>Charter of International Military Tribunal for the Far East</i>
CPI	Corte Penal Internacional
DAF	<i>Deutsche Arbeitsfront</i>
ETMI	Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg
GESTAPO	<i>Geheimstaatspolizei</i>
ILC	<i>International Law Commission</i>
IMT	<i>International Military Tribunal</i>
IMTFE	<i>International Military Tribunal for the Far East</i>
LCA	Ley del Control Aliado
NSDAP	<i>Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei</i>
OKW	<i>Oberkommando der Deutschen Wehrmacht</i>
ONU	Organización de Naciones Unidas
RSHA	<i>Reichssicherheitshauptamt</i>
SA	<i>Sturmabteilungen</i>
SD	<i>Sicherheitsdienst</i>
SS	<i>Schutzstaffel</i>
TIPR	Tribunal Internacional Penal para Ruanda
TIPY	Tribunal Internacional Penal para Yugoslavia
TMI	Tribunal Militar Internacional
TMIT	Tribunal Militar Internacional de Tokio
UNWCC	<i>United Nations War Crimes Commission</i>

The Trial which is now about to begin is unique in the history of the jurisprudence of the world and it is of supreme importance to millions of people all over the globe.

(El juicio que está a punto de comenzar es único en la historia de la jurisprudencia del mundo y es de suprema importancia para millones de personas en todo el planeta).

Lord Geoffrey Lawrence, presidente del tribunal de Núremberg, en la sesión inaugural del proceso, el martes 20 de noviembre de 1945

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El llamado proceso principal de Núremberg, celebrado entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946, fue el primer juicio en la Historia en el que apareció tipificado como delito el crimen contra la humanidad. En dicho proceso se enjuició a los principales responsables vivos del régimen alemán nazi por diferentes crímenes acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el más conocido de los juicios llevados a cabo tras dicha contienda, pero no fue el único. Paralelamente, tuvo lugar en Tokio el proceso contra los máximos responsables del Japón por hechos similares. Y también en Alemania se desarrollaron con posterioridad diferentes procesos contra otros ciudadanos alemanes, como dirigentes políticos de menor entidad, empresarios, médicos, o jueces, por hechos vinculados al régimen nazi.

Los criterios normativos de este proceso se establecieron en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, también conocido como Estatuto o Carta de Londres, por ser la ciudad donde se aprobó, y fueron la base de la que partió toda una normativa internacional inmediatamente posterior destinada a la protección de los derechos humanos, prácticamente inédita hasta ese momento en la historia de la humanidad. Así, el 11 de diciembre de 1946, un mes después de que se leyeran las sentencias de los acusados por el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, la Asamblea General de las Naciones Unidas¹ declaró como Principios de Ley Internacional los criterios reconocidos en el Estatuto de Londres y en la jurisprudencia emanada del tribunal. Y en 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio para la prevención y sanción del Genocidio.

Que el proceso de Núremberg haya servido de inspiración para el desarrollo posterior del crimen contra la humanidad como tal figura delictiva reconocida internacionalmente, no ha impedido que también haya sido objeto de diferentes críticas. Parte de la doctrina jurídica lo ha tachado de “juicio de los vencedores” (*Siegerjustiz*)², donde los acusados

1- Organización plurinacional inaugurada con la llamada Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 28 de junio de 1945.

2- Entre la doctrina crítica con el proceso de Núremberg, se pueden citar, entre otros, CEREZO MIR, J., *Curso de Derecho penal español, Parte General*, I, Introducción, 5.ª Edición, Tecnos, Madrid, 1996, pág. 210; JIMÉNEZ DE ASÚA, L., *Tratado de Derecho Penal*, t. II, Losada, Buenos Aires, 1964 pág. 1271 y ss.; JAEN VALLEJO, M., *Legalidad y extraterritorialidad en el Derecho Penal Internacional*. Atelier, Barcelona, 2006, págs. 47-48; MIGLIOLI, C., *Lineamenti di giustizia internazionale penale*, Società Editrice Tirrena, Livorno, 1957, pág. 73 y ss., y 93 ss.; LOMBOIS, C., *Droit pénal international*, ob. cit., pág. 157; BENTON, W./GRIMM, G., *El juicio de Nuremberg desde el punto de vista alemán*, Tr. J.M. Ochoa, Editorial Constancia, México D.F.

prácticamente estaban condenados de antemano. Esta postura se fundamenta en las posibles vulneraciones de principios jurídicos, tanto sustantivos como procesales, que pudieron haberse producido en el devenir del proceso. El enjuiciamiento de los acusados mediante la incorporación de una nueva figura delictiva como la del crimen contra la humanidad, que no tenía una entidad jurídico-positiva autónoma en el momento en que se cometieron los hechos enjuiciados, así como la inexistencia previa tanto del tribunal juzgador como de su regulación procesal, creados *ad hoc* para la ocasión, son algunos de los argumentos en que se basan dichas críticas para negar la bondad del proceso de Núremberg.

Los objetivos del presente trabajo se centran así en:

1º- Dilucidar, atendiendo tanto al análisis del periodo histórico en que se desarrolló como a los elementos normativos que lo conformaron, si el proceso de Núremberg admite una valoración favorable como paradigma de aplicación de justicia, o si, por el contrario, se trató de un mero artificio creado por las potencias vencedoras con el único objetivo de castigar a los vencidos de la contienda mundial.

2º- Determinar la importancia jurídica e histórica del juicio desarrollado en la ciudad alemana en atención a su consideración de primer proceso en la Historia en que aparecen configurados los elementos del crimen contra la humanidad.

Conforme a tales objetivos, el trabajo se estructura de la siguiente manera:

- En el capítulo primero, se analizan los antecedentes históricos del crimen contra la humanidad hasta su configuración en el proceso.
- El capítulo segundo, relativo al origen del proceso, se divide en dos partes: la primera alude a la forma en que a lo largo de la contienda mundial se urdió por parte de las futuras potencias vencedoras la creación de un tribunal para enjuiciar a los responsables de las actuaciones cometidas por el bando del Eje; y la segunda hace referencia, una vez finalizada la guerra, al propio proceso de creación de la normativa por la que se rigió el

Entre quienes defienden la legalidad e importancia del proceso se encuentran, entre otros, TAYLOR, T., *Die Nürnberger Prozesse*. Zurich:Europa, 1950, págs. 22-43; SPRECHER, D., *Inside the Nuremberg Trial*, Boston: University Press of America, 1999; GLUECK, S., *The Nuremberg Trial and Agressive War*, Nueva York: A. Knopf, 1946; MENTHON, F., *Gerechtigkeit in Namen der Menschlichkeit*. Neustadt: Imprimire Nationale, 1946.

Entre los autores que no se posicionan como detractores ni como defensores de Núremberg, cabe citar a WECHSLER, H., *The Issues of the Nuremberg Trial*. Political Science Quaterly, Vol. 62, N.º 1, 1947, págs. 11-26; HEYDECKER, J./LEE, J., *Der Nürnberger Prozess*, Colonia: Kiepenheuer & Witsch, 2ª Ed., 1979; BIDDLE, F., *The Nuremberg Trial*, Virginia Law Rewiew, Vol. 33, N.º 6, 1947, págs. 679-696; Kelsen, H., *Peace through Law*, Garland Publishing Inc., Nueva York, 1973, págs. 87-88 y 110-115, y “*The Rule against Ex Post Facto Laws and the Prosecution of Axis War Criminals*”, *Judge Advocate Journal*, Núm. 2, 1945, pág. 11.

juicio en Núremberg, analizando el carácter de ley aplicable del Estatuto de Londres, en el que se establecía la competencia del tribunal, los delitos imputados (incidiendo en el del crimen contra la humanidad) y los criterios adoptados para definir a los encausados.

- El capítulo tercero se centra en el desarrollo del proceso. Se analiza la constitución del tribunal, el enfoque procesal adoptado, quienes fueron los encausados, los cargos y las pruebas aportadas, las alegaciones de las defensas y las controversias jurídicas surgidas a partir de aquellas; y, finalmente, la sentencia.

- En el capítulo cuarto se examinan aquellos procesos contemporáneos al de Núremberg, como son los desarrollados en Alemania contra otros ciudadanos alemanes de menor entidad, así como el celebrado en Tokio contra la cúpula dirigente japonesa, analizando como se iba configurando en todos ellos los perfiles de la nueva figura jurídica.

- Y en el capítulo quinto se analiza el desarrollo normativo y jurisprudencial del crimen contra la humanidad desde la finalización del proceso hasta nuestros días. Así, en primer lugar, se estudian los principios surgidos a partir de Núremberg y los intentos posteriores de codificación de la nueva figura criminal; a continuación, la jurisprudencia emanada de los Tribunales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda; y se finaliza con el tratamiento del crimen contra la humanidad en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

I- ANTECEDENTES DEL CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD

Hechos susceptibles de ser considerados como crímenes contra la humanidad han existido a lo largo de la Historia. Pero es en el Proceso de Núremberg contra los jerarcas nazis celebrado tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde por primera vez aparece el crimen contra la humanidad como delito tipificado penalmente.

Durante la Edad Media, constan enjuiciamientos de actuaciones que tenían rasgos propios de lo que actualmente se considera como crimen contra la humanidad, ya fuera por los propios hechos en sí o por el barniz de atrocidades contra el ser humano que los juzgadores dieron de manera interesada a tales hechos con el objeto de ser enjuiciados. Así, podría citarse el juicio en Nápoles en 1268 contra el duque de Suabia, Konradin von Hohenstaufen, por haber iniciado una guerra injusta; el llevado a cabo contra el líder independentista escocés William Wallace celebrado en Londres el 21 de agosto de 1305, en el que se le acusó, entre otros delitos, de la comisión de atrocidades contra la población civil; o el proceso contra el gobernador de Breisach Peter von Hagenbach en 1474, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, donde se le acusó de haber "pisoteado las leyes de Dios y del hombre" al imponer un reino de terror a los habitantes de dicha localidad.

En los casos referidos arriba, los juicios llevados a cabo se limitaban a hechos cometidos en el ámbito geográfico perteneciente al del propio Estado o gobierno que se encargaba de juzgar. No es hasta el siglo XIX cuando ya se pueden apreciar ejemplos en los que se vislumbra una conciencia internacional con el fin de evitar actos atentatorios contra bienes jurídicos inherentes a la condición humana, que se manifiestan en forma de protestas diplomáticas, demostraciones de fuerza e intimidaciones militares, llevadas a cabo con el fin de persuadir en sus actuaciones al país que estaba cometiéndolas. Ejemplos de ello son la protesta del gobierno de los Estados Unidos en 1840 contra el Estado turco por la persecución de judíos en Damasco y Rodas, o la expedición militar que Francia envió en 1860 a Turquía presentando al mismo tiempo una protesta contra el gobierno turco por las masacres cometidas contra los cristianos en Siria. En todas estas intervenciones se refleja la pulsión entre la obligación moral de los Estados de intervenir ante la violación grave de derechos inalienables de las personas y el principio de soberanía de los Estados que rechazaba la intervención en sus asuntos internos.³

3- LIÑÁN LAFUENTE, A., *El crimen contra la humanidad*. Editorial Dykinson, 2015, pág. 26.

En la Conferencia de la Haya celebrada el 29 de julio de 1899, relativa a las leyes y costumbres de las guerras terrestres, aparece el término "leyes de humanidad", que supone el germen terminológico del futuro crimen contra la humanidad. Fue introducido como cláusula dentro del preámbulo, a iniciativa del jurista ruso Fiódor Fiódorovich Martens, miembro de la delegación rusa en dicha conferencia, por lo que es conocida como "Cláusula Martens". Con dicha expresión, más que a un delito nuevo y autónomo, se aludía a un reforzamiento de la idea de Derecho de Gentes (*Ius cogens*), el Derecho Consuetudinario Internacional.⁴ Tal cláusula rezaba así:

*Hasta que un Código más completo de las Leyes de guerra se emita, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no incluidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del Derecho de Gentes, tal como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pública.*⁵

El crimen contra la humanidad con tal denominación aparece por primera vez en un texto internacional en la declaración conjunta realizada el 24 de mayo de 1915 por los gobiernos británico, francés y ruso, como respuesta a las deportaciones de la población armenia realizadas por Turquía a partir de abril del mismo año. En ella denunciaban públicamente *la connivencia y frecuente apoyo de las autoridades otomanas de cara a los nuevos delitos de Turquía contra la humanidad y la civilización*. Y continuaba la declaración: *los gobernantes de los países aliados anuncian públicamente (...) que serán considerados personalmente responsables (...) todos los miembros del gobierno otomano y todos sus agentes que hayan estado implicados en la masacre.*⁶

4- QUINTANO RIPOLLÉS, A., *Tratado de Derecho Internacional, e Internacional Penal*, Madrid: Instituto "Francisco de Vitoria", Consejo Superior de Investigaciones Científicas., Vol. II., 1957, pág. 6.

5- http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1851920/II_convenio_de_la_haya_de_1899.pdf

6- https://www.armenian-genocide.org/popup/affirmation_window.html?Affirmation=160



Fiódor Fiódorovich Martens.

En dicha declaración ya se vislumbraban elementos propios de la futura persecución de los crímenes contra la humanidad. Así, aparecía la advertencia de castigo de los crímenes perpetrados no solo a los ejecutores *de facto*, sino también a los responsables políticos, del rango que fueran, así como la negación de la legitimidad del gobierno otomano en dichas actuaciones amparándose en su soberanía nacional.

El exterminio del pueblo armenio fue considerado en años posteriores como el precedente moderno del holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, siéndole atribuido un término creado por un jurista polaco, cuya contribución sería relevante en el futuro Proceso de Núremberg. Su nombre era Raphael Lemkin y el término, genocidio.

El antecedente más cercano a Núremberg, aunque sin referencia explícita al crimen contra la humanidad, es el intento, tras la finalización la Primera Guerra Mundial y por primera vez en la historia, del enjuiciamiento formal a un Estado por ser culpable del inicio de la guerra, así como a los responsables por los posibles crímenes cometidos en nombre de aquel. Dentro del Tratado de Versalles, firmado en la Conferencia de Paz de París el 28 de junio de 1919, y que supuso oficialmente el fin del estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los Estados aliados, en los artículos 227 a 230, bajo el título "Sanciones", se establecían las acusaciones a los responsables del Estado alemán.

Si bien en dicho articulado no se hacía mención a los crímenes contra la humanidad⁷, sí se creó un precedente posteriormente manejado en el Proceso de Núremberg, como es el de la responsabilidad penal individual por actos vinculados al propio acontecimiento de la guerra. Por un lado, se personalizaba en la figura del emperador alemán Guillermo II la acusación de ser el causante de la contienda mundial, *por un delito supremo contra la moral internacional y la santidad de los tratados*.⁸ Y por otro, se aludía a los responsables directos de los posibles crímenes ejecutados en el transcurso del conflicto armado, por *actos en violación de las leyes y costumbres de la guerra*.⁹ En ambos casos, se establecía la creación de futuros tribunales, uno especial para Guillermo II, y tribunales militares formados por las potencias aliadas para el resto de responsables.

El juicio a Guillermo II no fue posible, ya que éste se refugió en los Países Bajos y su entrega fue rechazada a los Estados aliados, alegando que la demanda de extradición era contraria a su Constitución, así como que la propia Holanda no había ratificado nunca el Tratado de Versalles. En cuanto a los posibles criminales de guerra, las potencias vencedoras exigieron la entrega de 900 personas. Finalmente, el número se redujo a 45 nombres, los cuales fueron juzgados ante el *Reichsgericht* (Tribunal Supremo del Imperio alemán) en Leipzig, entre el 2 de mayo y el 16 de julio de 1921, los conocidos como Procesos de Leipzig. A pesar de que gran parte de los acusados fueron absueltos, con sentencias de cárcel como pena más elevada, dichos procesos crearon un precedente para el futuro proceso de Núremberg, según el cual aquellos miembros del ejército que pudieran cometer algún delito no podían ampararse en la obediencia debida a un superior para justificar sus actos. De esta manera, no se daba una amnistía general como la

7- En el marco de las negociaciones de la Conferencia de Paris, se nombró el 25 de enero de 1919 una *Comisión sobre la responsabilidad de los autores de la guerra y sobre la aplicación de las penas por la violación de las leyes y las costumbres de la guerra*. Conocida como la Comisión de los 15, al estar integrada por 15 miembros, además de investigar e interpretar la quiebra de las leyes y de las costumbres de la guerra, se ocupó del análisis de la posible violación de leyes de la humanidad. La incorporación de esta referencia al informe presentado el 29 de marzo de 1919 provocó la redacción por parte de los representantes de los Estados Unidos de un memorando en el que se oponían frontalmente a la incorporación de dicho término.

La base de dicho rechazo se encontraba en la diferenciación de dos tipos de responsabilidades, que, según los norteamericanos, habían sido fundidas en una sola en el informe presentado por la Comisión. Según la delegación estadounidense, existían dos tipos de responsabilidades, una de naturaleza legal y otra de naturaleza moral. Las primeras debían tener una respuesta judicial, mientras que para las segundas, por terribles que fueran las consecuencias ocasionadas, la sanción soportada debería ser solamente moral. Según esta interpretación, las violaciones de las leyes de la humanidad se situaban en el plano de la sanción moral, ya que no se encontraban recogidas previamente como una conducta prohibida en ningún texto legal. Para apoyar esta tesis de sanción *ex post facto*, citaron la sentencia del Tribunal Supremo *United States v. Hudson*, en la que se reconocía la prohibición de aplicar las leyes punitivas de un modo retroactivo.

8- Tratado de Paz de Versalles, artículo 227.

[https://es.wikisource.org/wiki/Tratado_de_Versalles_\(1919\)](https://es.wikisource.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919))

9- *Idem.*, artículo 228.

establecida antaño en los tratados de paz de Osnabrück y Münster (la llamada Paz de Westfalia), firmados el 24 de octubre de 1648 tras la conclusión de la Guerra de los Treinta Años. Asimismo, se dejaba sin efecto el artículo 3 de la Convención de la Haya de 1907 relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, que atribuía al Estado la responsabilidad de los actos cometidos por sus soldados:

*La parte beligerante (...) será responsable de todos los actos cometidos por las personas que hagan parte de su fuerza armada.*¹⁰

Durante las negociaciones en la Conferencia de Paz de París se incluyó en la Parte I del Tratado de Versalles la creación de la Sociedad de las Naciones, organismo internacional por el que se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. A pesar de ciertos logros, el objetivo por el que fue creada no se alcanzó en la mayoría de los casos. Uno de los motivos principales de ello fue la no adhesión de los Estados Unidos a tal organización plurinacional. Aunque su origen y creación se debió en gran medida al impulso aportado por los llamados Catorce Puntos del presidente norteamericano Thomas Woodrow Wilson,¹¹ cuando llegó el momento de refrendar la aceptación, el Congreso de los Estados Unidos no la aprobó, por lo que la Sociedad de Naciones se quedó sin su principal valedor.

10- http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1851920/Convenio_IV_de_la_Haya_de_1907.pdf/816306c0-6008-4959-972b-c07d84ea51b1

11- Los Catorce Puntos fueron una serie de propuestas realizadas por el presidente estadounidense Woodrow Wilson en un discurso ante el congreso de los Estados Unidos el 8 de enero de 1918, con la idea de alcanzar unos objetivos bélicos moralmente defendibles para la Triple Entente tras la finalización de la Primera Guerra Mundial.

II- ORIGEN DEL PROCESO

1- Durante la Guerra

Ya durante la Segunda Guerra Mundial, iniciada el 1 de septiembre de 1939, ante las noticias que se iban recabando de actuaciones del régimen nazi que excedían de las admisibles en un estado de guerra, las potencias aliadas comenzaron a plantearse el posible castigo de los responsables por tales hechos.

A comienzos de 1942, nueve gobiernos pertenecientes al bando aliado en la contienda, se reunieron en el Palacio de St. James, en Londres, para coordinar su respuesta ante las noticias que llegaban sobre "el régimen del terror" creado por la Alemania nazi. Ello propició la Declaración del 13 de enero de 1942, en la que dichos gobiernos establecieron *como uno de sus principales objetivos de guerra el castigo de los responsables de los crímenes, y ya en sentido jurídico, si los afectados eran únicos culpables o corresponsables de esos crímenes, si habían actuado por orden o por su propia responsabilidad o si habían participado sólo en ellos.*¹² Telford Taylord, uno de los fiscales americanos en el Juicio de Núremberg, considera esta Declaración como el nacimiento de la idea de persecución penal internacional por la comisión de actos inhumanos.¹³

Los nueve gobiernos crearon una comisión de crímenes de guerra destinada a recabar información sobre las atrocidades y sus autores, organismo que posteriormente, en octubre de 1943, se convertiría en la Comisión de Crímenes de Guerra de Naciones Unidas (*United Nations War Crimes Commission* o UNWCC) constituida ya por diecisiete países. Los resultados obtenidos por esta comisión supondrían una de las principales fuentes probatorias para las acusaciones en el futuro proceso en Núremberg.

Siguió la Declaración de Moscú de 30 de octubre de 1943, en la que las grandes potencias aliadas empezaron a resolver las dudas acerca de su jurisdicción. En dicha declaración, se determinó que los criminales de guerra quedarían sometidos a la jurisdicción y enjuiciamiento de los tribunales de los Estados en los que se hubieran cometido los crímenes, aplicándose su legislación penal interna. Pero se les distinguió de aquellos otros criminales de guerra que hubieran perpetrado delitos que afectaban a diversos Estados, de tal manera que el enjuiciamiento de estos últimos quedaría en

12- *Punishment for war crimes. A document issued by the Inter-Allied Information Committee London. The Inter-Allied declaration signed at St. James's Palace London on 13th january 1942, and relative documents.*

<https://nla.obj-648522001/view?partId=nla.obj-648522082>.

13- LIÑÁN LAFUENTE, A., *El Crimen ...*, op.cit., pág. 45.

manos de la justicia penal internacional. Con tal diferenciación de los posibles encausados atendiendo al ámbito territorial del delito perpetrado, se ofrecía la posibilidad de la aparición de un tribunal internacional con capacidad para juzgar dichos delitos. Así quedó establecido en el apartado "Declaración en relación a las atrocidades":

*La Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Unión Soviética tienen evidencia, procedente de múltiples fuentes, de los crímenes horrendos, ejecuciones colectivas y demás atrocidades cometidas por las fuerzas de Hitler en muchos de los países que éstas han invadido y de los cuales comienzan a ser expulsadas (...) Por lo tanto, las tres potencias antes mencionadas, en nombre de las treinta y dos Naciones Unidas, advierten y declaran solemnemente lo siguiente: cuando llegue a concederse un armisticio a cualquier gobierno que pueda haberse establecido en Alemania, los funcionarios y subalternos alemanes y afiliados al partido nazi que sean responsables de las atrocidades, asesinatos en masa y ejecuciones antes mencionados, o que hayan asentido a los mismo, serán entregados a los países en donde cometieron sus abominables actos, para ser juzgados y castigados de acuerdo con las leyes de dicho países liberados y de los gobiernos libres que sean en ellos establecidos. (...) La declaración anterior no afecta de modo alguno el caso de todos los criminales alemanes cuyos delitos y culpas carecen de localización geográfica, los que serán juzgados y castigados en conjunto por los gobiernos aliados.*¹⁴

Si bien todas estas declaraciones parecían vislumbrar que el enjuiciamiento era sin duda la solución acordada para castigar a los responsables, ello no estaba tan claro en las verdaderas voluntades de las potencias aliadas. La postura británica no tendía precisamente a un juicio formal. El 10 de noviembre de 1943, el ministro de Justicia británico, Lord Simon, apoyándose en una propuesta del primer ministro Winston Churchill, redactó un documento en el que se pedía que se tratara a los principales responsables del Eje como "proscritos del mundo".¹⁵ Dicha postura se basaba en una figura cuyo origen se remontaba a la Edad Media, la proscripción. En la Inglaterra de aquella época, un jurado previamente establecido tenía la capacidad de declarar proscrito a un delincuente por no presentarse para dar cuenta de los actos que se le imputaban. A partir de ese momento, cualquier persona estaba legalmente autorizada para darle

14- <https://www.dipublico.org/8699/conferencia-de-moscu-octubre-de-1943-declaracion-conjunta-de-las-4-potencias>.

15- OVERY, R., *Interrogatorios. El Tercer Reich en el banquillo*, Tusquets 2003, pág 27-28. Fuente original: Public Record Office, Kew, Londres, Prime Minister Papers 4/100/13, comunicado de Lord Simon, 10 de noviembre de 1943.

muerte. Durante el reinado de Eduardo III, en el siglo XIV, se revocó este derecho público y en lo sucesivo sólo el *sheriff* (oficial de justicia o alguacil) estuvo autorizado para ejecutarlo. Así, la delegación británica entendía que los gobiernos de la coalición internacional aliada equivalían a una especie de gran jurado y que los altos mandos militares de dichas potencias que se encargaran de la ejecución inmediata de los criminales de guerra serían la versión moderna del *sheriff*.

Esta postura estaba en cierta medida amparada por la sólida incertidumbre que existía sobre la posibilidad de castigar a los máximos responsables del Eje debido a la ausencia de una legalidad existente sobre los crímenes que pudieran imputarse. Como reconocería el propio Ministro de Asuntos Exteriores Británico, Anthony Eden, en un comunicado fechado en junio de 1942:

*La culpa de esos individuos es tan sobrecogedora que escapa a la acción de cualquier trámite jurídico. Y aseveraba que la única solución posible pasaba por una decisión política rápida y efectiva pues otros criminales de guerra de menor entidad podían ser juzgados dentro de los límites que establecía la legislación, pero para juzgar a Hitler habría que crear leyes nuevas que abarcaran los delitos cometidos y la medida no solo era jurídicamente discutible, sino que daría a la defensa innatas oportunidades para impugnarla.*¹⁶

Estados Unidos, aun existiendo discrepancias internas,¹⁷ se decantaba de modo oficial por el enjuiciamiento, así como la Unión Soviética. Para los soviéticos, como ya había sucedido durante las purgas políticas de los años treinta, lejos de entender el proceso como un acto de justicia objetiva, aquel suponía un mero trámite previo a una condena ya predeterminada, es decir, una especie de juicio espectáculo que sirviera de humillación pública para los responsables nazis.

16- OVERY, R., *Interrogatorios*, ... *op.cit.*, pág. 28. Fuente original: Public Record Office, Prime Minister Papers 4/100/10, comunicado del ministro de Asuntos Exteriores, "*Treatment of war criminals*", 22 de junio de 1942, págs. 2-3.

17- Dentro de la posición contraria el enjuiciamiento estaba Henry Morgenthau, Secretario del Tesoro. En septiembre de 1944 presentó al presidente Roosevelt un memorando sobre las medidas que deberían adoptarse en la Alemania de la posguerra, en el que compartía la idea británica de que los principales criminales debían ser detenidos, identificados y ejecutados. Frente a dicha postura se encontraba el Secretario de defensa, Henry Stimson, coherente con los principios recogidos en la Enmienda VI de la Declaración de Derechos de los Estados Unidos (*Bill of rights*), es decir, notificación del cargo al acusado, derecho a ser escuchado, así como la posibilidad de emplazar testigos para su defensa. En enero de 1945, el Departamento de Defensa, bajo los auspicios de su subsecretario, John J. McCloy, y con el apoyo del de Asuntos Exteriores y por el Fiscal General del Estado, presentó a Roosevelt una propuesta en firme para constituir un tribunal internacional que procesara a los criminales de guerra alemanes. Dicha propuesta fue finalmente aceptada por Morgenthau, lo que supuso, ya sin oposiciones, la aceptación definitiva del juicio por parte estadounidense. Ver OVERY, R., *Interrogatorios*, ... *op.cit.*, págs. 30-31.

En la Conferencia de Teherán, celebrada entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943, la primera en la que se reunieron los tres líderes de las tres principales potencias aliadas, y en la que se definió definitivamente la apertura de un frente occidental a través de la llamada operación *Overlord* (el futuro Día D), dichas divergencias siguieron existiendo. Sirva de ejemplo la siguiente anécdota. En la sobremesa posterior a una de las cenas, Stalin, el líder soviético, propuso, medio en serio medio en broma, la ejecución de 50.000 a 100.000 oficiales alemanes para que Alemania no pudiera planear otra guerra. Elliott Roosevelt, hijo del presidente estadounidense, que formaba parte de la delegación norteamericana, posiblemente tampoco demasiado en serio, jaleó el comentario de Stalin, afirmando que tal vez 49.000 sería suficiente. Churchill, enojado ante esos comentarios, se levantó de la mesa comentando que nunca permitiría tales ejecuciones en masa. Stalin le siguió y para calmarle le dijo que no se preocupara, que no estaba hablando en serio.¹⁸

Esta dicotomía existió hasta casi el final de la guerra. Aunque en la Conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, la idea de la creación del tribunal internacional fue asentándose, el tira y afloja quedó definitivamente resuelto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, más conocida como la Conferencia de San Francisco, convención de delegados de 50 naciones aliadas que tuvo lugar del 25 de abril al 26 de junio de 1945 en San Francisco, y que supuso la conferencia fundacional de la futura Organización de Naciones Unidas (ONU). La delegación norteamericana presentó el 30 de abril de 1945 un memorando, denominado *Memorandum of Proposals for Prosecutions and Punishments of Certain War Criminals and Other Offences*, el cual determinaba la necesidad de que los líderes de los Estados del Eje fueran juzgados ante un tribunal militar compuesto por oficiales de las cuatro potencias aliadas, advirtiendo de esta manera que la culpabilidad y el castigo de aquellos no debía derivarse de la acción política de los aliados.¹⁹

En el transcurso de la conferencia, Los británicos, posiblemente ante la decidida postura de los Estados Unidos, que es quien realmente llevaba las riendas sobre este asunto, y el riesgo de manifestar un enfrentamiento con los norteamericanos y los rusos en el acta

18- BULLOCK, A., *Hitler y Stalin*. Editorial Plaza y Janes 1991, pág. 1.339

19- LIÑÁN LAFUENTE, A., *El Crimen... op.cit.* pág. 47.

fundacional ante el mundo entero, terminaron por aceptar las posturas de ambos, abandonando así la idea de la proscripción²⁰.

El 2 de mayo de 1945, mediante el decreto presidencial 9547, el presidente norteamericano Harry S. Truman, que sucedió a Roosevelt tras su fallecimiento el 12 de abril de 1945, y sin esperar a la decisión final adoptada en la Conferencia de San Francisco, nombró oficialmente como fiscal jefe para el enjuiciamiento de los posibles criminales a Robert Houghwout Jackson, juez del Tribunal Supremo, el cual tenía tras de sí una larga lista de causas contra los monopolios y que había sido fiscal general del Estado con Roosevelt. Seis días después, el 8 de mayo de 1945, se producía la rendición del Tercer Reich tras la firma de la capitulación alemana en Berlín, entre los mariscales Keitel y Zhúkov.



El juez Robert H. Jackson, fiscal jefe del proceso de Núremberg.

20- OVERY, R., *Interrogatorios, ... op.cit*, pág. 36.

2- El Estatuto o Carta de Londres

2.1- La Ley aplicable

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras comenzaron los preparativos para la creación del tribunal en el que se juzgaría a los máximos responsables de los crímenes perpetrados por los Estados europeos del Eje durante la contienda. Aunque resultaban claramente reconocibles las atrocidades cometidas por el régimen nazi, el problema surgió a la hora de encuadrar tales hechos en unos delitos que ya tuvieran unos elementos jurídico-positivos suficientes para poder ser enjuiciados. Igualmente resultaban complejas la identificación de los acusados y la configuración procesal del tribunal.

El 8 de agosto de 1945, tras largas deliberaciones iniciadas en junio, las delegaciones de las cuatro principales potencias vencedoras, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia, firmaron en Londres un acuerdo formal para organizar un tribunal militar internacional (*Agreement for the Persecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis*), con un estatuto que estableciera la constitución de la Corte, su jurisdicción y los principios generales aplicables, la composición y la competencia de la fiscalía, la determinación de los acusados y sus derechos, la definición de las acusaciones y el procedimiento a seguir. Es el denominado Estatuto del Tribunal Militar Internacional (ETMI), también conocido como el Estatuto o Carta de Londres.²¹

Con la redacción del Estatuto sus autores pretendieron que éste fuera considerado como la ley aplicable al juicio, actuando como reflejo del Derecho Internacional reconocido por todas las naciones civilizadas, y no como una ley exclusiva de los países vencedores en la que su único objetivo fuera el castigo a los vencidos. Esta naturaleza legal atribuida al Estatuto por sus redactores, tanto sustantiva como procesal, fue refutada por las defensas durante el juicio, así como por parte de la doctrina. Se criticó que el acuerdo creara al mismo tiempo una ley criminal sustantiva y procesal aplicable exclusivamente al caso. E igualmente se rechazó que el Estatuto pudiera considerarse como una ley internacional, ya que ésta se originó en un único acuerdo con fuerza vinculante solamente sobre las

21- Estatuto del Tribunal Militar Internacional.

http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1852538/estatuto_del_tribunal_de_nuremberg.pdf/20090fa2-e5bf-447a-aa96-612403df2a66

cuatro naciones firmantes, y no como resultado de la costumbre internacional, que sí vincula a la comunidad de las naciones y que es como debe ser creada la ley universal.²²

El fiscal jefe Robert H. Jackson defendió la ley surgida del Estatuto en la sesión inaugural del proceso de la siguiente manera:

*La validez de lo previsto en el Estatuto es definitiva para todos nosotros, sea que hayamos aceptado la tarea de juzgar o la de acusar, así como para los acusados, que no pueden ampararse en ninguna otra ley que les dé derecho a ser escuchados (...) Aunque esta declaración del Estatuto como ley es definitiva, puede alegarse que los prisioneros juzgados tienen derecho a que se les aplique de la forma más caritativa. Se puede decir que es una ley nueva, no declarada con autoridad en el momento en el que cometieron los actos que la ley condena, y que esta declaración de ley les ha cogido por sorpresa. No puedo, por supuesto, negar que estos hombres estén sorprendidos de que esta es la ley; realmente están sorprendidos de que haya alguna ley. Estos acusados no se basaron en ninguna ley en absoluto. Su programa ignoró y desafió toda ley (...).*²³

La ley ignorada por los acusados a la que se refería Jackson no era una ley concreta en sentido formal, norma positiva, sino que en realidad aludía a aquella norma superior de justicia que debía regir el Derecho entre las naciones y que resultaba inherente a la condición humana. Porque en realidad la actuación de los acusados sí había sido en la mayoría de los casos en cumplimiento de normas jurídicas positivas y válidas dictadas por un Estado soberano como era el alemán, es decir, se podía decir que en muchos de los casos habían actuado "conforme a Derecho". Ante el nudo gordiano que se le presentó a las acusaciones, la solución más satisfactoria fue invocar a la moral y al Derecho natural, es decir, acogerse a una postura iusnaturalista frente a una interpretación positivista estricta o voluntarista que ponía trabas difíciles de solventar. Es decir, fue a través del iusnaturalismo jurídico como se pretendió condenar a los encausados, rechazando así la ley *como es* frente a la ley *como debe ser*. En ese sentido se refiere la profesora Sévane Garibian:

22- ERHARD, H., *The Nuremberg Trial against the Major War Criminals and International Law*, AJUL, 1949, pág. 226.

23- International Military Tribunal (IMT), *The Trial of German Major War Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany*, Vol. II, págs. 143-144.
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-II.pdf

El Tribunal encargado de la represión debe por ende tomar un camino que, si se entienden «soberanía» y «legalidad» de manera estricta, como lo hace el positivismo jurídico clásico (teoría implícitamente presupuesta en el discurso de la defensa en Núremberg), lleva a un impasse. ¿Como salirse de este impasse sin hacer el sacrificio de la tesis positivista de la separación entre derecho y moral, o bien del ideal de justicia al cual la primera jurisdicción penal internacional debe su nacimiento?»²⁴

2.2- Las Acusaciones

Las acusaciones estaban recogidas en el artículo 6 del Estatuto:

El Tribunal establecido por el Acuerdo aludido en el Artículo 1 del presente para el enjuiciamiento y condena de los principales criminales de guerra del Eje Europeo estará facultado para juzgar y condenar a aquellas personas que, actuando en defensa de los intereses de los países del Eje Europeo, cometieron los delitos que constan a continuación, ya fuera individualmente o como miembros de organizaciones:

Cualesquiera de los actos que constan a continuación son crímenes que recaen bajo la competencia del Tribunal respecto de los cuales habrá responsabilidad personal:

a) Crímenes contra la paz: A saber, planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o participar en planes comunes o en una conspiración para lograr alguno de los objetivos anteriormente indicados;

b) Crímenes de guerra: A saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. En dichas violaciones se incluye el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra o a personas en alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos, o la

24- GARIBIAN, S., *Le crime contre l'humanité au regard des principes fondateurs de l'Etat moderne. Naissance et consécration d'un concept*, Schultless-Lgdj- Bruylant, Ginebra, París, Bruselas, 2009, pág. 24.

devastación no justificada por la necesidad militar, sin quedar las mismas limitadas a estos crímenes;

c) Crímenes contra la humanidad: A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma, o la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron.

Aquellos que lideren, organicen, inciten a la formulación de un plan común o conspiración para la ejecución de los delitos anteriormente mencionados, así como los cómplices que participen en dicha formulación o ejecución, serán responsables de todos los actos realizados por las personas que sea en ejecución de dicho plan.

Como se puede observar, los crímenes imputados eran tres. Pero al final del artículo, así como dentro de la redacción del apartado relativo al crimen contra la paz, se incluyó una referencia a un plan común o conspiración, que con el paso del tiempo terminaría convirtiéndose en el cuarto cargo en las acusaciones presentadas ante el Tribunal Militar Internacional. Es por ello que, aun no siendo considerada *stricto sensu* como una acusación en el texto del Estatuto, se analiza también la conspiración en este apartado por la importancia que tuvo en el proceso como elemento de unión con el resto de los crímenes de la acusación general. Y eso independientemente de su correspondiente estudio en el capítulo tercero referente al desarrollo fáctico del proceso.

2.2.1.- Crímenes contra la paz

Aunque para las potencias vencedoras estaba claro que Alemania era quien había iniciado la contienda mundial (a pesar de que la declaración formal corrió a cargo de Gran Bretaña y Francia, como consecuencia de la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939), desde el punto de vista jurídico existían problemas a la hora de incriminar la actuación alemana ya que en ese momento no existía ninguna norma jurídica en el Derecho Internacional en la que apareciera un delito con dicha denominación.

Sí es cierto que existían, siendo la base de la imputación del crimen contra la paz en que se sustentaba la acusación, una serie de tratados internacionales, a los cuales estaba adherida Alemania, que proscribían el uso de la fuerza para la resolución de conflictos entre los Estados firmantes. Así, entre dichos instrumentos internacionales en cuyo incumplimiento se argumentaba la responsabilidad de Alemania se podrían nombrar el Tratado de Paz de Versalles de 1919, el Pacto de la Sociedad de Naciones que prohibía la guerra de agresión (artículo 10), el Protocolo para la Solución Pacífica de Controversias Internacionales de 1924 aprobado en Ginebra por la Sociedad de Naciones, los Acuerdos de Locarno de 1925 y, sobre todo, el Tratado de Renuncia a la Guerra o Pacto de Briand-Kellog²⁵ de 1928, cuya prohibición sobre el uso de la fuerza había sido aceptada por Alemania de manera expresa mediante el pacto de no agresión a Polonia firmado con ésta en 1934.

El problema radicaba, algo que fue invocado posteriormente por las defensas en sus alegaciones, en que dichos tratados carecían de un mecanismo sancionador efectivo sobre el Estado que iniciase una guerra en violación de sus disposiciones, las cuales propiciaban más una responsabilidad de tipo moral que una de naturaleza jurídica derivada de la infracción de un tipo penal.

Muestra de que el cumplimiento de lo previsto en dichos acuerdos internacionales se dejaba en manos de la buena voluntad de los Estados, se reflejaba en lo dispuesto en dos de ellos: el Tratado de Versalles de 1919 y el Tratado de Renuncia a la Guerra de 1928.

En el Tratado de Versalles, firmado por la potencias vencedoras y Alemania tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, el artículo 227 contemplaba la acusación contra el emperador Guillermo II, como culpable de haber iniciado la guerra por *ofensa suprema contra la moral internacional y la autoridad sagrada de los tratados*. Y continuaba el artículo que se establecería un tribunal interaliado, especialmente constituido, que *juzgará sobre motivos inspirados en los más elevados principios de la política entre las naciones con el fin de asegurar el respeto a los compromisos internacionales y a la moral internacional*.

25- El Tratado de Renuncia a la Guerra fue firmado en París por los representantes de 15 gobiernos (aunque llegó a estar en vigor en más de 60 Estados, incluyendo a las grandes potencias) el 27 de agosto de 1928 a iniciativa de Estados Unidos y Francia, siendo más conocido con el nombre de Pacto de Briand-Kellog, en honor a los apellidos del Ministro de asuntos exteriores francés, Aristide Briand, y del Secretario de Estado norteamericano, Frank B. Kellog.
<https://www.dipublico.org/3584/tratado-de-renuncia-a-la-guerra-pacto-briand-kellog-1928/>

Y en el Tratado de Renuncia a la Guerra, su artículo 1º, sin alusión alguna a las posibles sanciones por su incumplimiento, establecía que:

Las altas partes contratantes declaran de modo solemne, en nombre de sus respectivos pueblos, que condenan la guerra como medio de solución de las controversias internacionales y que renuncian a ella como instrumento de política nacional en sus relaciones recíprocas.



Aristide Briand, Ministro de Asuntos Exteriores de Francia (izquierda) y Frank B. Kellogg, Secretario de Estado de Estados Unidos (derecha), reunidos en París con el objeto de la firma del Pacto cuyos apellidos le darían nombre.

2.2.2.- Crímenes de guerra

Los crímenes de guerra hacían alusión a todos aquellos actos cometidos dentro de la dinámica de un conflicto bélico que contravenían las reglas que rigen éste. Eran los actos en contra del denominado *ius in bello*. Eran fácilmente identificables, con un sustento tanto doctrinal como normativo dentro del Derecho Consuetudinario Internacional o *ius cogens*. Ya los fundadores de la ciencia del Derecho Internacional, los autores de la

escuela española del siglo XVI, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, habían señalado en el "principio de la necesidad" el postulado inspirador de los límites que debían establecerse en el ejercicio de la violencia bélica contra las personas y los bienes del adversario. Así, según Vitoria, *es lícito en la guerra hacer todo lo necesario para la defensa del bien público (In bello licet omnia facere quae necessaria sunt ad defensionem boni publici)*.²⁶ Posteriormente, en un sentido similar, el jurista holandés del siglo XVII, Hugo Grocio, afirma que *es lícito en la guerra hacer todo lo necesario para alcanzar el fin*.²⁷

Dentro del ámbito normativo internacional, la acusación en Núremberg se acogió a lo establecido en las conferencias de la Haya de 1899 y 1907 sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, concretamente en el preámbulo de la segunda, que establecía que las partes contratantes reconocían haberse inspirado en el deseo de disminuir los males de la guerra *hasta donde las necesidades militares lo permitan*. De esta manera, no podían quedar impunes en tiempos de guerra delitos que se considerarían fácilmente imputables en tiempo de paz, porque, tal como recogían las dos conferencias referidas, *las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la salvaguardia y bajo el imperio de los principios del Derecho de gentes*.²⁸

Sin embargo, de la redacción del artículo 6.b del Estatuto de Londres se desprendía una extensión del concepto de crímenes de guerra a actuaciones que sobrepasaban el marco atribuido tradicionalmente a dicho delito. Ello llevó a confundir los actos imputados en este crimen con aquellos atribuidos en el del crimen contra la humanidad, debido a la similitud en la redacción de los dos apartados del artículo.

2.2.3.- Crímenes contra la humanidad

La creación *ex novo* de esta figura criminal se debió no a lo novedoso de los hechos que englobaba, que ya habían sido perpetrados con características similares en algún momento a lo largo de la Historia, sino porque el método y la escala en la que los mismos

26- PASTOR RIDRUEJO, J. ANTONIO, *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, Editorial Tecnos, 1989, pág. 613. Fuente original: FRANCISCO DE VITORIA, *Relecciones sobre los indios y el Derecho a la guerra*, Espasa Calpe, Buenos aires, 1946, pág. 136.

27- PASTOR RIDRUEJO, J. ANTONIO, *Curso de Derecho ...*, *op.cit.*, pág. 613. Fuente original: HUGO GROCIO, *De Iure Belli ac Pacis*, caps. I y II.

28- FERNÁNDEZ GARCÍA, A. y RODRÍGUEZ GIMÉNEZ, J.L., *El juicio de Nuremberg cincuenta años después*. Arco/Libros, S.L, Cuadernos de Historia 16, 1996, pág. 15.

fueron cometidos resultaron en ese momento desconocidos para la humanidad.²⁹ Así, hechos que en épocas anteriores posiblemente se hubieran asimilado dentro de los crímenes de guerra, tales rasgos propiciaron que fueran objeto de su inclusión en una nueva categoría penal. Precisamente, esa similitud del objeto material del crimen de la humanidad con el del crimen contra la guerra propició que, con la redacción final del artículo 6.c del Estatuto, esta nueva figura criminal fuera interpretada por gran parte de la jurisprudencia y la doctrina del momento como una ampliación o extensión del crimen de guerra.³⁰ Quintano Ripollés va más allá, afirmando que este paralelismo atentaba contra el principio *non bis in idem*.³¹

El elemento diferenciador principal con los crímenes de guerra fue el sujeto pasivo del tipo penal, identificado en el crimen contra la humanidad en la expresión *contra la población civil*, frente a la de *población de los territorios ocupados* presente en el crimen de guerra. Aunque tal término no identificaba qué población civil era el sujeto pasivo de los hechos imputables, por contraposición a la población referida en los crímenes de guerra se entendió que se refería al enjuiciamiento de aquellos delitos cometidos por los encausados contra la población civil de su misma nacionalidad, ya fuera en tiempos de guerra o anteriormente a ésta. La protección de la población civil de los Estados adversarios a los países del Eje ya estaba materializada en los crímenes de guerra del artículo 6.b: *violaciones de las leyes o usos de la guerra (...) en relación con la población civil de un territorio ocupado*. Así, se consideró la nacionalidad o ascendencia del sujeto pasivo como el elemento diferenciador de los dos crímenes cuando se solaparan entre sí. La novedad radicaba en la posibilidad de incriminar a un Estado por actos cometidos en su nombre y derivados de su soberanía y legitimidad contra una parte de sus propios nacionales. De esta manera, con la inclusión de esta categoría criminal nueva se posibilitaba la incriminación de la persecución y exterminio que llevó a cabo el régimen nazi contra la oposición política (centrada en los comunistas), los judíos, los homosexuales y los gitanos, ya fueran de nacionalidad alemana o de la de los Estados ocupados.

29- BASSIOUNI, Ch, *Crimes Against Humanity Historical Evolution and Contemporary Application*. Cambridge 2011, pág. 139.

30- LIÑÁN LAFUENTE, A., *El Crimen... op.cit*, pág. 48.

31- QUINTANO RIPOLLÉS A., *Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal*, Tomo I. Editorial Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Francisco Vitoria. Madrid. 1955, págs. 428-429.

Respecto a su estructura, en el artículo 6.c se distinguen dos bloques, denominados por Schwelb respectivamente cada uno como *murder type* y *persecution type*.³² Los asesinatos, el exterminio, la esclavitud y las deportaciones configurarían los hechos comprendidos como *murder type*. Estos lesionan los bienes jurídicos de la vida y la libertad de las personas, y ya estaban reconocidos como conductas prohibidas por las legislaciones penales de la mayoría de los Estados. Los actos de persecución forman el segundo grupo de conductas criminales, *persecution type*, y para su perfección se exige un elemento subjetivo teleológico, deben ser realizados por "*motivos políticos, raciales o religiosos*".

Según Liñán Lafuente, del tenor del artículo 6.c se desprende la interpretación de que dicho elemento subjetivo sólo podía ser exigido en los tipos de persecución, no siendo necesario en los tipos de asesinato. Así, se posibilitaría que el exterminio de una población civil sin un objetivo o plan concreto predeterminado pudiera imputarse también sin dificultad como crimen contra la humanidad, mientras que para considerar los actos de persecución como crímenes contra la humanidad sí debería ser probada su conexión con un plan para perseguir a un determinado colectivo por razones de tipo político, racial o religioso.³³

Esta segunda categoría criminal del artículo 6.c, la persecución a un colectivo o población por los motivos referidos, enlazaba en su esencia con el contenido del actual delito de genocidio.³⁴ En el escrito de acusación final presentado por la Fiscalía el 18 de octubre, en el cargo de los crímenes de guerra, en referencia al maltrato y el asesinato de civiles en territorios ocupados, se argumentaba que los acusados *habían llevado a cabo un genocidio deliberado y sistemático*. El término genocidio, que era la primera vez que se

32- SCHWELB, E., "*Crimes Against Humanity*," 23 *The British Yearbook of International Law* 1946, pág. 189.

33- LIÑÁN LAFUENTE, A., *El Crimen...* op.cit, pág. 55.

34- El término genocidio se debe al jurista polaco Raphael Lemkin, fiscal y abogado en su Polonia natal, y huido a Estados Unidos en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial debido a las persecuciones nazis por su condición de judío. Dicho término aparece definido por primera vez en su obra *El dominio del Eje en la Europa Ocupada (axis Rule in Occupied Europe)*, publicado en Estados Unidos en 1944. Lemkin acuñó el término a partir del sustantivo griego *genos* ('raza', 'pueblo') y del sufijo latino *cide* (de *cadere*, 'matar'). En dicha obra hacía un repaso de todas las políticas nazis dirigidas al exterminio de pueblos o colectivos atendiendo a sus elementos nacionales, religiosos o étnicos. Para Lemkin, el genocidio iba más allá de la eliminación física en masa. Consistía, más bien, en una multiplicidad de acciones destinadas a destruir las bases de la supervivencia de un grupo en cuanto tal. Era una síntesis de los diferentes actos de persecución y destrucción. Lemkin no deseaba designar un fenómeno nuevo, sino más bien estigmatizar una práctica secular de la humanidad designándola como crimen en *virtud del Derecho Internacional*". De esta manera, conforme a esta acepción amplia de genocidio propuesta por Lemkin, la muerte era la consecuencia y no el fin perseguido necesariamente. Así, él veía las prácticas nazis como síntesis de todas aquellas realizadas en épocas anteriores (el exterminio del pueblo armenio en 1915 era su referente más actual), donde se jaramizaba a los grupos con miras a su aniquilación, ya fuera directamente física (los judíos y los gitanos) o sociocultural (los eslavos).

utilizaba en un instrumento jurídico internacional, se definía en el escrito de acusación como *el exterminio de grupos raciales y religiosos, de las poblaciones civiles de ciertos territorios ocupados para destruir determinadas razas y clases de personas y grupos nacionales, raciales o religiosos, en particular judíos, polacos, gitanos y otros.*

En el momento de la redacción del Estatuto de Londres la figura del genocidio era casi desconocida, y no se incluyó como tal delito autónomo ni en las acusaciones del artículo 6 ni en los cargos presentados durante el proceso en Núremberg. Su exclusión como delito imputable dentro del proceso se debió a las dudas de los acusadores sobre su posibilidad de triunfo en las condenas finales a los jerarcas nazis, teniendo en cuenta lo novedoso de su articulación. Con posterioridad a Núremberg, y bajo el empuje de los principios instaurados por el ETMI, el genocidio ya entraría por derecho propio en el campo de las figuras delictivas a partir de la aprobación en 1948 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.



Raphael Lemkin, creador del término genocidio.

La separación en la redacción del artículo de esas dos variantes del crimen contra la humanidad, y en relación a la conexión que se exigía en el Estatuto entre todos los crímenes imputados para que el tribunal pudiera ejercer su jurisdicción y competencia,

provocó un debate lingüístico que afectaba a la concepción misma del crimen contra la humanidad, el conocido como el "punto y coma". En el mismo momento de la firma del Estatuto el 8 de agosto de 1945, los textos de la Carta fueron presentados en tres idiomas: ruso, francés e inglés. En las versiones inglesa y francesa, la separación entre los *murder type* y los *persecution type* se realizó con un punto y coma, mientras que en la rusa a través de una coma. Esta diferencia, aparentemente insignificante, representaba dos puntos de vista diferentes en la interpretación del crimen contra la humanidad. Si se mantenía el punto y coma, se daba a entender que solamente los *persecution type* podían ser imputables *en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos*, así como que *constituyeran o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron*. Es decir, se excluía así a los *murder type* de la necesaria conexión con los otros crímenes del artículo 6, los crímenes contra la paz y los crímenes de guerra, e igualmente no les afectaba la irrelevancia de que los actos estuvieran penados o no por la ley del territorio o *lex loci*.

Esta discusión (Según Clark, la confusión no fue intencionada, sino que se debió a un error en las transcripciones³⁵) fue resuelta con la adopción del protocolo de Berlín de 6 de octubre de 1945, incluido en la redacción final del Estatuto y en el que se sustituía el punto y coma por sólo la coma en todos los textos. El texto francés, para que no hubiera duda alguna, incluyó en la parte final del documento un texto (*protocolo*) en el que se especificaba que las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, fueran o no constitutivos de violaciones de la ley interna del país donde fueran cometidos, estarían dentro de la competencia del Tribunal Internacional:

*PROTOCOLO DE RECTIFICACIÓN DE UNA DISCREPANCIA EN LA CARTA*³⁶

Considerando que el 8 de agosto de 1945 se firmó en Londres un Acuerdo y una Carta en relación con el Enjuiciamiento de Criminales de Guerra en inglés, francés y ruso. Y considerando que se ha constatado la existencia de una discrepancia entre el artículo 6, párrafo (c) del texto original de la Carta en ruso, por un lado, y los textos originales de la Carta en inglés y francés, por otro, constando un punto y coma en el artículo 6, párrafo (c) entre las palabras "guerra" y "o" en los textos

35- CLARK, R., "Crimes against humanity and the Rome Statute", en Clark, Feldbrugge, Pomorski (eds.). *Essays in Honour of George Ginsburgs*, 2001, pág. 190-192.

36- Estatuto del Tribunal Militar Internacional.

francés e inglés, y una coma en el texto ruso. Y considerando que se quiere rectificar esta discrepancia:

POR CONSIGUIENTE, los infrascritos, signatarios del citado acuerdo en representación de sus respectivos Gobiernos, y estando debidamente autorizados a tales efectos, han acordado que el artículo 6, párrafo (c) del texto ruso de la Carta es correcto, y que el sentido y la intención del Acuerdo y de la Carta exigen que el citado punto y coma del texto inglés se cambie por una coma, y el texto francés se modificará y será del tenor literal siguiente:

d) LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE- c'est a dire l'assassinat, l'extermination, la reduction en esclavage, la deportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persecutions pour des motifs politiques, raciaux, ou religieux, lorsque ces acte ou persecution, qu'ils aient constitute ou non une violation du droit interne du pays ou ils on ete perpetres, ont ete commi a la fuite de tout crime rentrant dans la competence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.³⁷

Tal corrección del texto definitivo tuvo además como consecuencia que aquellos hechos susceptibles de ser considerados crímenes contra la humanidad acontecidos antes de la guerra no pudieran ser imputados, debido a la vinculación definitiva establecida con los crímenes contra la paz y de guerra, y ello a pesar del *antes o después de la guerra* incluido en la redacción referente a los *murder type* (el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos). En un intento de solucionar tal contradicción, Whitney Harris, uno de los fiscales del equipo de Robert H. Jackson en Núremberg, en referencia a la restricción a los actos cometidos en relación con una guerra de agresión, comentó lo siguiente:

Esta restricción fue adecuada en vista del estatus del Tribunal como organismo militar encargado de determinar responsabilidad por la guerra y los crímenes relacionados con ella. Si el Tribunal hubiera asumido la competencia de enjuiciar a

37- Traducción al castellano: *Delitos contra la humanidad- es decir, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano cometido contra todos poblaciones civiles, antes o durante la guerra, o persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando estos han sido o perseguidos, ya sea que hayan constituido o no una violación de la ley interna del país donde fueron perpetrados, se comprometieron a huir de cualquier delito que caiga dentro de la jurisdicción del Tribunal, o en relación con este delito.*

*individuos, según el derecho internacional, por crímenes cometidos por ellos pero no relacionados con la guerra, habría desconocido por completo el concepto de soberanía y sometido a enjuiciamiento penal bajo el derecho internacional a individuos cuya conducta era legal según la ley interna aplicable en tiempos de paz. Una competencia tal no debe ser jamás asumida por un tribunal militar ad hoc establecido para juzgar crímenes de guerra.*³⁸

2.2.4.- La conspiración o complot.

En el artículo 6 del Estatuto solo constaban como acusaciones las tres referidas anteriormente. Sin embargo, en el último párrafo de dicho artículo, así como dentro de la redacción del apartado relativo a los crímenes contra la paz, se incluyó un elemento novedoso, que no aparecía como crimen autónomo pero que resultó una de las principales bazas de los acusadores y la llave en la imputación a los acusados de los otros tres crímenes: la conspiración o complot.

Imputar la autoría de ciertos crímenes a los ejecutores directos de los hechos delictivos, como en el caso de los crímenes de guerra y los de lesa humanidad, no resultaba demasiado difícil, además de estar previsto en el Estatuto, los cuales deberían ser enjuiciados por los tribunales de los Estados en cuyo territorio se cometieron. El problema surgía a la hora de establecer la responsabilidad penal de aquellos que estaban al mando por los actos criminales que habían llevado a cabo sus subordinados, cometidos en la gran mayoría de los casos a mucha distancia de los centros políticos o militares decisorios.

La solución fue la idea de la conspiración. Introducida por los norteamericanos en el proceso, habiendo sido puesta ya en práctica en Estados Unidos por abogados en casos bursátiles y contra el crimen organizado, ofrecía la ventaja de criminalizar unos actos por sí solos legales, siempre y cuando se ejecutaran con el objetivo final de la comisión de una infracción de la ley. Así, al máximo responsable, ya fuera político o militar, cuando emitía una orden, en principio conforme con la legalidad existente, se le podría inculpar de los actos criminales que realizaran los ejecutores directos por haber sido llevados a cabo en cumplimiento de dicho plan preconcebido. Debido a la amplitud del cargo, permitía

38- HARRIS, WHITNEY R., *Tyranny on Trial. The Evidence at Nuremberg*, Dallas, 1954, pág. 512.

además incluir en él toda serie de agravios, no solamente los crímenes relacionados en el artículo 6, es decir, los responsables lo serían de *todos los actos realizados por las personas que sean en ejecución de dicho plan*.

Todo ello, además de criminalizar de manera implícita a la ideología política del régimen nazi, permitía la posibilidad de incriminar a cualquiera que hubiera participado, aunque no fuera de manera directa, en las actuaciones de aquel, no solamente a personas físicas individuales, sino también a aquellas organizaciones y grupos vinculados a su estructura. En definitiva, mediante la idea de la conspiración lo que se buscaba era eliminar cualquier posibilidad que impidiera culpabilizar a todos los acusados, personas físicas u organizaciones, de todos y cada uno de los hechos delictivos incluidos en la acusación general.

En las acusaciones finales presentadas por los fiscales el 18 de octubre de 1945, la idea de la conspiración se transformó en un cargo con derecho propio y el único aplicado a todos los acusados, siendo el "crimen" que servía de nexo de unión con los otros crímenes imputados y que daba coherencia a la acusación general. La sentencia final terminaría "bajando los humos" a la ambición de dicho cargo.

2.3- A quién acusar

Si bien eran fácilmente identificables los hechos incriminatorios por los que se creaba el tribunal, lo que no estaba tan claro era exactamente a quien había que atribuir las acusaciones establecidas en el Estatuto. A lo largo de la guerra ya existía entre las potencias aliadas la convicción de que había que diferenciar entre los criminales por actos concretos y aquellos entendidos como de máxima entidad, es decir, los responsables principales de las decisiones que llevaron a la ejecución material de aquellos crímenes, los *major war criminals*. Como dijo el Ministro de Asuntos Exteriores británico Anthony Eden, éstos serían aquellos que por su posición o por su celebridad encarnan *los rasgos peores y más extremos del nazismo y el fascismo*.³⁹ Tal diferenciación ya fue plasmada en la Conferencia de Moscú de 1943, siendo confirmada en el preámbulo introductorio del Estatuto, donde se determinó, sin una identificación personal concreta

39- OVERY, R., *Interrogatorios*, ..., *op.cit.*, pag. 49. Fuente original: NA, RG 107 documentos McCloy, archivador 1, memorando de la UNWCC, 6 de octubre de 1944, anexo A.

(ello se establecería en el escrito de acusación final), quienes debían ser aquellos que el tribunal iba a enjuiciar:

Y considerando que en la Declaración de Moscú de 30 de octubre de 1943 sobre las atrocidades cometidas por los alemanes en la Europa ocupada se hacía constar que aquellos funcionarios alemanes y los hombres y miembros del partido Nazi que hayan sido responsables de crímenes y atrocidades o hayan participado en los mismos con su consentimiento serán devueltos a los países en los que cometieron sus abominables actos para que puedan ser juzgados y condenados con arreglo a las leyes de esos países liberados y de los gobiernos libres que se crearán en dichos países; (...) sin perjuicio de que pudiera haber casos de destacados criminales cuyos delitos no tengan una ubicación geográfica determinada y que sean castigados por decisión conjunta de los gobiernos aliados.

Una vez establecido quienes podían ser enjuiciados por el tribunal en atención al ámbito geográfico de los hechos imputados, el Estatuto establecía en el artículo 6 que la competencia de la Corte se ejercería sobre aquellos que, actuando en interés de los países del Eje, de una manera individual o como miembros de organizaciones, hubieran cometido alguno de los crímenes imputados en la acusación. Dicha responsabilidad abarcaría a los líderes, organizadores, instigadores y cómplices en la planificación y ejecución de un plan común o conspiración para cometer alguno de los crímenes imputados, no sólo por los actos que hubieran llevado a cabo, sino también por los actos realizados por las personas que actuaron en ejecución de dicho plan (Artículo 6. *in fine*).

Así, finalmente, tocaba concretar los nombres y apellidos de los que finalmente debían sentarse en el banquillo. En cuanto a su nacionalidad, el artículo 1 del Estatuto lo limitaba los responsables europeos: *Se creará un Tribunal Militar Internacional (...) para, aplicando los principios de justicia e inmediatez, enjuiciar y condenar a los principales criminales de guerra del Eje Europeo.* Aunque en listas previas a la creación del Estatuto se incluyó a dirigentes italianos, como el *Duce* Benito Mussolini o el mariscal Rodolfo Graziani, finalmente las acusaciones se ceñirían al Estado alemán. El hecho de que Italia se hubiera rendido en 1943 y que en la zona Norte ocupada por los alemanes las represalias contra la población fueran tales que se asemejaran en su brutalidad a las ejecutadas en los otros territorios de Europa, hizo que a ojos de los aliados los italianos se colocaran al

mismo nivel que las demás víctimas de las actuaciones alemanas. Así, la expresión “criminalidad del Eje” se convirtió en la realidad en “criminalidad alemana”.⁴⁰

Además de las personas físicas, en la acusación final se incluyó también como encausados a organizaciones. Ya el artículo 9 del Estatuto lo preveía:

En el juicio de aquella persona o personas miembros de algún grupo u organización, el Tribunal podrá declarar (en relación con cualquier acto por el que dicha persona o personas puedan ser castigados) que el grupo u organización a la que pertenecía la citada persona o personas era una organización criminal.

La idea de la conspiración fue la clave para tal imputación. Así, atendiendo a la premisa del plan general que presumiblemente estaba detrás de todas las actuaciones del régimen alemán, una vez que se acusaba a una persona integrante de una organización de dicha conspiración, aquella de la que formaba parte también lo sería. Y no sólo a la organización como tal entidad, sino también a otros miembros integrantes de la misma, aun cuando hubieran tenido poco que ver en las decisiones o actuaciones por las que se pretendía incriminar.

40- OVERY, R., *Interrogatorios...*, op cit., pág. 50.

III- EL PROCESO

1- Cuestiones procesales

La ciudad alemana de Núremberg fue la designada para establecer la sede del juicio. Su elección se debió principalmente por motivos logísticos. En un principio, parecía que Berlín, al ser la capital del Reich, tendría que haber sido la localización más natural. Pero debido a que fue arrasada por la guerra, carecía de instalaciones necesarias para albergar un juicio de la envergadura que se presumía. Por el contrario, Núremberg contaba con el mayor juzgado que aún se tenía en pie en Alemania, el Palacio de Justicia, el *Ladesgrericht*, que había sobrevivido intacto a los bombardeos de los Aliados. Además, tras el ala izquierda del edificio se mantenía igualmente operativa una prisión de gran tamaño, una rotonda con bloques radiales de tres niveles, que facilitaba el alojamiento de los acusados y testigos en un espacio cercano al de la Corte. Resultaba paradójico que se enjuiciara a los máximos responsables del régimen nazi en la misma ciudad en que fueron promulgadas por aquel las leyes raciales antisemitas de 1935⁴¹ y donde tuvieron lugar las grandes manifestaciones de exaltación del nazismo.

A las 10 horas del 20 de noviembre de 1945 se produjo la sesión de apertura del Tribunal Internacional Militar. Realmente, la inauguración del juicio tuvo lugar en Berlín un mes antes, el 18 de octubre, en la gran sala de sesiones del edificio del Consejo de Control Aliado⁴², donde se leyó por parte de la delegación soviética el Acta Oficial del Juicio, en la que se establecía la formación del tribunal, así como la comunicación definitiva a los acusados de su encausamiento. A pesar de la voluntad soviética de que fuera Berlín la sede final del proceso, el estado ruinoso de la ciudad obligó a decidirse por Núremberg en atención a los motivos arriba mencionados.

El juicio se desarrolló durante casi un año. El Tribunal realizó 403 sesiones y los sumarios ocuparon 16.000 páginas, 22 volúmenes de los debates, más 20 de anexos con la

41- Las llamadas Leyes de Núremberg (*Nürnberger Gesetze*) fueron una serie de leyes de carácter racista y antisemita aprobadas el 15 de septiembre de 1935 durante el séptimo congreso anual del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (*Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei* o NSDAP) celebrado en dicha ciudad alemana. Fueron redactadas por el jurista y político Wilhelm Frick en su cargo de Ministro de Interior del Reich (1933-1943), bajo la anuencia de Adolf Hitler y Julius Streicher como coautor.

El cuerpo legal más destacado fue el comprendido por la Ley de la Ciudadanía del Reich y la Ley para la protección de la sangre y el honor alemanes. De breve redacción, dejaban a futuros decretos su desarrollo reglamentario. Así, disposiciones de diverso rango fueron estableciendo un sistema complejo de discriminación racial, lo que suponía expulsar a los judíos de la comunidad del pueblo alemán con el objetivo fundamental de preservar la supuesta esencia aria de éste.

42- *Allierte Kontrollrat*, institución creada en 1945 para el gobierno de Alemania, y en funcionamiento hasta 1948.

documentación procesal reunida. La acusación presentó sus argumentos definitivos durante los últimos días de julio de 1946. Los acusados realizaron sus declaraciones finales el último día de agosto. Y el Tribunal leyó la sentencia el 1 de octubre de 1946.

Tal como se había establecido en el artículo 2 del Estatuto de Londres, el tribunal estaría formado por un juez y un suplente por cada uno de los cuatro Estados signatarios. Por Gran Bretaña figuraba Lord Geoffrey Lawrence, elegido asimismo para presidir el Tribunal, figurando como su sustituto Sir Norman Birkett. Por Estados Unidos el designado fue Francis Biddle, y John J. Parker su suplente. El general Iona Nikitchenko fue el representante de la Unión Soviética, siendo el teniente coronel A.F. Volchov su sustituto. Y por Francia, el elegido fue el profesor Donnedieu de Vabres, con Robert Falco de suplente.

A las tres acusaciones establecidas en el artículo 6 del ETMI, que suponían los tres cargos que se presentarían en el juicio, se sumó como cuarto cargo la conspiración indicada en el último párrafo de dicho artículo, siendo utilizada por la acusación para vincular los otros cargos entre sí. La exposición en el juicio de cada uno de ellos le correspondió a los equipos de los fiscales de cada uno de los cuatro Estados en este orden:

1º- El complot o conspiración para cometer guerras de agresión, a los Estados Unidos, en la figura del juez Robert H. Jackson, siendo éste además el encargado de abrir la acusación general.

2º- Los crímenes contra la paz (planeamiento, preparación, iniciación o comisión de una guerra de agresión), a Gran Bretaña, con el fiscal Sir Hartley Shawcross.

3º- Los crímenes en violación de las leyes y costumbres de la guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos en el Oeste de Europa, a Francois de Menthon en representación de Francia.

4º- Los mismos que los asignados a la delegación francesa, pero cometidos en el Este del continente europeo, al general Rudenko por la Unión Soviética.



Vista panorámica de la sala 600 del Palacio de Justicia de Nuremberg: a la izquierda, sentados en las dos filas superiores, los acusados; debajo de ellos, los abogados defensores; a la derecha, en la parte superior los miembros del tribunal; y al pie de la imagen, los cuatro equipos de los fiscales.

En cuanto al enfoque procesal por el cual debía regirse el juicio, su adopción se logró después de no pocas discusiones. Por un lado, defendido por Estados Unidos y Gran Bretaña, se encontraba el sistema acusatorio característico de los países anglosajones (*Common law*), y por el otro el procedimiento inquisitivo propio de los Estados de la Europa continental (*Civil law*), con Francia al frente; la Unión Soviética, por su parte, adoptaba un sistema socialista propio. Mientras que en el procedimiento inquisitivo es al juez a quien correspondía la dirección del proceso, actuando como inquisidor activo, en el procedimiento consuetudinario del *Common law* aquel se presentaba más como un árbitro, siendo la actuación del ministerio fiscal la que proporciona la fuerza impulsora al proceso.

El Fiscal Jefe Robert H. Jackson manifestó:

Según lo acordado por los aliados, el proceso internacional no podía ser llevado a cabo bajo el propio sistema judicial de un país en concreto, por lo que debía diseñarse un proceso que conjugara elementos de los sistemas judiciales de las

*potencias vencedoras en aras de conseguir un procedimiento amalgamado que resultara viable, expedito y justo.*⁴³

Bajo esta premisa, en el acuerdo alcanzado, aunque presentaba una apariencia híbrida, el sistema acusatorio prevalecía sobre el inquisitivo. Así, por ejemplo, en el artículo 24.g del Estatuto se preveía que *la Acusación y la Defensa interrogarán a aquellos testigos y al Acusado que preste declaración, y la parte contraria podrá contrainterrogar*, lo que se podía considerar como un elemento característico esencial del sistema acusatorio, el denominado “contrainterrogatorio” o *cross-examination*.⁴⁴

Como el Estatuto no preveía supervisión judicial previa al juicio, los fiscales tenían el control total de la investigación. En este sentido, no existía una fase de instrucción en la forma prevista por los sistemas inquisitivos. El artículo 15.a del Estatuto establecía que eran los fiscales-jefe quienes debían investigar, recabar y presentar todas las pruebas y los testimonios necesarios, es decir, las pruebas y testimonios que la Fiscalía necesitara para probar la culpabilidad de los sospechosos. En la línea del enfoque del *Common law*, los fiscales se concentraban, por lo tanto, en las pruebas y testimonios incriminatorios.

En definitiva, la posición del tribunal desde un punto de vista procesal resultaba más débil que en el sistema inquisitorio. Aun así, había concesiones a éste. Por ejemplo, el artículo 24.d le otorgaba al tribunal la potestad de decidir sobre la admisibilidad de las pruebas y testimonios. A diferencia de lo que sucedía en el sistema acusatorio, el Estatuto no establecía normas técnicas en cuanto a la admisibilidad y pertinencia de las pruebas y testimonios. En su lugar, el tribunal era libre de considerar cualquier tipo de prueba que pudiera ser remotamente admisible, incluido el testimonio de referencia.

Analizando el Estatuto, se observaba, por otro lado, que se trataba de un proceso *sui generis* y creado ex profeso para la ocasión:

- Ni el tribunal ni sus miembros ni sus sustitutos podían ser recusados por la acusación, por los acusados o por sus Letrados (artículo 3).
- Era el tribunal quien se declaraba competente para establecer las normas procedimentales (artículo 13). Así, era la fiscalía quien debía redactar y presentar a aquel

43- JACKSON, R. H., “Nuremberg in Retrospect: Legal Answer to International Lawlessness,” en American Bar Association Journal, Vol. 35, 1949, pág. 815.

44- GÓMEZ ROBLEDÓ, A., “Los procesos de Nuremberg y Tokio: Precedentes de la Corte Penal Internacional”. En Derecho Internacional, Temas selectos (5ª Edición). Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM. México. 2008, Nota 9, pág. 761.

un borrador de reglas de procedimiento para su aprobación, quedando el tribunal facultado para aceptar las reglas presentadas con o sin enmiendas, y también para rechazarlas (artículo 14.e).

- El tribunal no se encontraba vinculado por las normas técnicas relacionadas con las pruebas, debiendo adoptar y aplicar el procedimiento más rápido y menos técnico posible (artículo 19).

- La sentencia no podía ser recurrida (artículo 26). El artículo 29 del Estatuto, sin embargo, daba potestad al Consejo de Control para reducir o modificar las condenas. Y si el Consejo de Control descubría nuevas pruebas tras el pronunciamiento de la sentencia que pudiera dar lugar a nuevos cargos contra la persona ya condenada, podía informar de ello al Comité de Fiscales-jefe que decidía cómo proceder *teniendo en cuenta el interés de la justicia*. Para el caso contrario, es decir, una revisión a favor del condenado, el Estatuto sin embargo no preveía procedimiento alguno.

- En caso de dictar una sentencia condenatoria, el tribunal podía imponer la pena de muerte o la que estimara conveniente (artículo 27). Tal potestad le otorgaba al tribunal una discrecionalidad alejada de los parámetros de taxatividad que se presumen en la norma penal.

2- Los acusados

Tal como había quedado establecido en el Estatuto, y en atención al criterio de la conspiración, los acusados ante el tribunal lo formarían tanto personas físicas individuales como grupos u organizaciones. Así, la lista definitiva incluyó a 24 individuos y 7 organizaciones. De los primeros, finalmente fueron 21 los que se sentaron en el banquillo. Respecto a los tres restantes:

- Martin Bormann, jefe de la Cancillería del *NSDAP*, el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, fue enjuiciado *in absentia*, ya que se desconocía su paradero tras intentar huir en 1945 del Berlín sitiado. A pesar de ello, estuvo representado por abogado con arreglo al artículo 16 del ETMI.

- Gustav Krupp von Bohlen, propietario de la corporación Krupp AG y miembro del Consejo de Economía del Reich, así como presidente de la Cámara de Industria Alemana,

se descartó su procesamiento por su senilidad evidente, así como por graves problemas de salud como consecuencia de una parálisis sufrida en 1941.

- Robert Ley, máximo dirigente del Frente Alemán del Trabajo, la organización sindical vertical en el Reich (*Deutsche Arbeitsfront*, DAF), se suicidó mientras se encontraba preso en la prisión de Núremberg a la espera de ser enjuiciado, ahorcándose con una toalla húmeda atada a la cisterna del retrete.

2.1 – Los individuos



Hermann Wilhelm Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe y presidente del *Reichstag*, el Parlamento alemán.



Rudolf Hess, miembro del Consejo de Ministros para la Defensa del Reich y lugarteniente de Hitler hasta mayo de 1941, fecha en la que voló secretamente hasta Gran Bretaña con la intención de llegar a un acuerdo de paz.⁴⁵



Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores a partir de 1938, tras sustituir a Von Neurath.



Wilhelm Keitel, mariscal y jefe del Alto Mando de la *Wehrmacht*.



Ernst Kaltenbrunner, general de las SS (*Schutzstaffeln*), secretario de Estado para la Seguridad de Austria y sucesor de Reinold Heidrich (fallecido en Praga en 1943 tras un atentado) como Jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich (RSHA).

45- A bordo de un caza Messerschmitt Bf 110 de la Fuerza Aérea Alemana (*Luftwaffe*), Hess se estrelló en Escocia el 10 de mayo de 1941 cuando se dirigía a Gran Bretaña, a espaldas de Hitler, con el objetivo de negociar con el Duque de Hamilton una salida negociada a la Segunda Guerra Mundial. El plan fracasó ya que fue hecho prisionero por las autoridades británicas, siendo el único líder nacionalsocialista capturado al inicio de la contienda.



Alfred Rosenberg, principal ideólogo del nazismo junto a Hitler y ministro del Reich para los Territorios Ocupados del Este.



Hans Frank, Gobernador General de la Polonia ocupada y director del servicio jurídico del Reich.



Wilhelm Frick, ministro del Interior, quien autorizó las Leyes raciales de Nuremberg de 1935 en contra de los judíos.



Julius Streicher, redactor jefe del periódico antisemita *Der Stürmer* y *Gauletier* de Francia.



Walter Funk, ministro de Economía y presidente del *Reichsbank*.



Hjalmar Schacht, ministro de Economía del Gobierno Central y de Prusia entre julio de 1934 y noviembre de 1937, y presidente del *Reichsbank* entre 1933 y 1939.



Karl Dönitz, comandante en jefe de la Marina de Guerra desde 1943 y a partir del 1 de mayo de 1945 designado por Hitler como sucesor suyo en la jefatura del gobierno alemán.



Erich Raeder, comandante en jefe de la Marina de Guerra (*Kriegsmarine*) hasta 1943.



Baldur von Schirach, jefe de las Juventudes Hitlerianas hasta 1940 y *Gauleiter* de Viena.



Fritz Sauckel, *Gauleiter* y gobernador general de Turingia y director del Trabajo Esclavo.



Alfred Jodl, jefe de Operaciones de la *Wehrmacht*.



Franz von Papen, miembro del conservador Partido de Centro, ocupó el cargo de vicescanciller en el gobierno de coalición con el *NSDAP* hasta 1934.



Artur Seyss-Inquart, gobernador del territorio de los Países Bajos.



Albert Speer, ministro de Armamento desde 1942, considerado el “arquitecto” del Reich por ser obra suya algunos de los edificios más representativos del nazismo, así como ser el escenógrafo de los fastos de las concentraciones nazis.



Constantin von Neurath, ministro de Asuntos Exteriores hasta 1938 y protector para Bohemia y Moravia hasta 1941.



Hans Fritzsche, jefe de Radiodifusión y de la Sección de Prensa del Ministerio de Propaganda del Reich.

2.2 - Las organizaciones

- El Gobierno del Reich, formado por el Gabinete del Consejo de ministros para la Defensa del Reich y el Consejo de Ministros Secreto (*Die Reichsregierung*).
- Cuerpo de Dirección del Partido Nazi (*Das Korps der Politischen Leiter der Nazionalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei*).
- Las SS o Escuadras de Seguridad del Partido Nazi (*Die der Nazionalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei*)
- Las SD o servicio de inteligencia de las SS(*Die Sicherheitsdienst*).
- La Gestapo o policía secreta del Estado (*Die Geheimestaatsspolizei*).
- Las SA o Escuadras de Asalto (*Die Sturmabteilungen der NSDAP*).
- El Estado Mayor General del Ejército alemán.
- La OKW o Alto Mando de las Fuerzas Armadas alemanas (*Oberkomanddo der Deutschen Wehrmacht*).



Sentados, en las dos filas superiores los 21 encausados.

3- Los cargos

3.1- Cargo de conspiración

Como se ha referido anteriormente, los cargos expuestos en el proceso tenían su correlativo en las tres acusaciones reguladas en el artículo 6 del Estatuto de Londres, añadiéndose un cuarto, el de la conspiración o complot. Este aparecía mencionado, no como acusación autónoma, en la parte final del mencionado artículo y dentro del apartado a) en referencia a los crímenes contra la paz. Terminaría por convertirse en el cargo principal, pues era el único del que se acusaba a todos los encausados y permitía englobar el resto de los cargos.

Precisamente, este fue el primero de los cargos y el que abrió el juicio, de cuya exposición se ocupó el fiscal jefe Robert H. Jackson.⁴⁶ Fueron 22 los acusados de participar como líderes, organizadores, instigadores o cómplices en la formulación o ejecución de un plan común o conspiración para cometer, o que implicara la comisión, de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Dicha exposición comenzaba con un relato sobre el ascenso del partido nazi, su papel central en el plan común o conspiración, sus fines y objetivos, y las técnicas y métodos que empleó para llevar adelante aquel, obteniendo un control totalitario sobre el gobierno de Alemania con el objeto de llevar a cabo un rearme del país dirigido a la agresión externa de otros Estados.

Se señalaban los siguientes actos como parte de la ejecución del plan de abrogar el Tratado de Versalles y preparar el camino para posteriores medidas más agresivas:

- a) Rearmarse secretamente, inclusive mediante el entrenamiento de personal militar, la producción de municiones de guerra y la formación de una fuerza aérea.
- b) Retirarse de la Conferencia Internacional de Desarme y de la Sociedad de las Naciones.
- c) Promulgar leyes que imponían el servicio militar universal con un total de 500.000 hombres.

46- IMT, *The Trial ...*, Vol. I, págs. 29-41.

d) Anunciar falsamente, con la intención de engañar y disipar los temores de intenciones agresivas, que respetarían las limitaciones territoriales del Tratado de Versalles y cumplirían los Pactos de Locarno.

e) Volver a ocupar y fortificar la Renania en violación de los acuerdos mencionados y anunciar falsamente que no tenían exigencias territoriales que hacer en Europa.

Además, en el primer cargo se describían los siguientes actos agresivos cometidos contra 12 países entre 1936 y 1941:

a) La planificación y ejecución de la invasión de Austria y Checoslovaquia (1936-1939).

b) La preparación e iniciación de la guerra de agresión contra Polonia (1939).

c) La expansión de la guerra hasta convertirla en una guerra general de agresión con la planificación y ejecución de ataques contra Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia y Grecia (1939-1941).

d) La invasión de la Unión Soviética en violación del pacto de no agresión del 23 de agosto de 1939 (1941).

e) La colaboración con Italia y el Japón y la guerra de agresión contra los Estados Unidos de América (1936-1941).

La responsabilidad de los acusados por este cargo, así como por todos los demás, derivaba, tal como se preveía en el ETMI (artículos 6 a 12), ya fuera por la comisión de sus propios actos o por aquellos cometidos por cualquier persona en ejecución de ese plan o conspiración. Así, según la acusación, en primer lugar, dicho plan común implicó la comisión de crímenes contra la paz, atendiendo a que los acusados participaron en la planificación, preparación, inicio y ejecución de guerras de agresión. En segundo lugar, como consecuencia de esas guerras de agresión iniciadas bajo el auspicio de la conspiración, se llevaron a cabo crímenes de guerra debido al espíritu de exterminio del adversario en dichas agresiones contra países y poblaciones que impregnaba la ideología nazi, cometidos en violación de las reglas y costumbres de la guerra aceptadas internacionalmente. Y, en tercer lugar, derivados de dicho plan común se adoptaron de

manera lógica y sistemática actos que constituían crímenes atentatorios contra la dignidad del ser humano, los denominados *ex novo* crímenes contra la humanidad.

3.2- Cargo de crímenes contra la paz

El segundo cargo de la acusación contenía las imputaciones relacionadas con los crímenes contra la paz⁴⁷. Fueron 18 los acusados de haber participado en la planificación, la preparación, la iniciación y la ejecución de guerras de agresión, que también eran guerras en violación de tratados, acuerdos y garantías internacionales, iniciadas contra los 12 países siguientes en las fechas que se indicaban:

- Polonia (1939)
- El Reino Unido y Francia (1939)
- Dinamarca y Noruega (1940)
- Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo (1940)
- Yugoslavia y Grecia (1941)
- La Unión Soviética (1941)
- Los Estados Unidos de América (1941).

La responsabilidad de los encausados se engarzaba con la presentada en el primer cargo, en este caso como máximos depositarios de la soberanía del Estado alemán atendiendo al puesto que desempeñaba cada uno de ellos en el organigrama del régimen. Es decir, la presumible responsabilidad del Estado alemán como ente abstracto por un acto cometido en su nombre, como lo era una guerra de agresión, por el que se infringían tratados a los cuales Alemania estaba adherida (el principal que se argumentó fue el de Briand-Kellog, de 1928), la acusación la trasladaba a las personas físicas que ejercían la representación en nombre de aquel. Aunque ello suponía una novedad en el Derecho Internacional, ya existía el precedente en el intento de enjuiciamiento del emperador Guillermo II tras la Primera Guerra Mundial, aunque en ese caso sin el éxito perseguido.

47- IMT. *The Trial ... op.cit.*, Vol. I, pág. 42.

3.3- Cargo de crímenes de guerra

Fueron 19 los acusados de este cargo⁴⁸, cuya imputación y responsabilidad se derivaba del plan común o conspiración, por actos cometidos materialmente por otras personas que no hicieron sino ejecutarlos bajo el auspicio de aquel, cuya formulación y ejecución fue llevada a cabo por todos los acusados como líderes, organizadores, instigadores, o cómplices.

Aquí no se trataba de castigar a los autores materiales, que ya lo serían a través de los correspondientes procesos por los tribunales del territorio donde se cometieron los hechos o de la nacionalidad de los acusados, sino que el objetivo eran sus superiores máximos, bajo cuya urdimbre, tal como se especificaba en el cargo primero, se generaron las órdenes facilitadas a los superiores inmediatos de los autores *de facto*. En periodos históricos anteriores, conforme a la costumbre jurídica internacional, y tal como aparecía recogido en los diferentes códigos militares de la época, dicha responsabilidad se trasladaba a la figura abstracta del Estado bajo cuya soberanía se habían cometido los actos imputados. La acusación en Núremberg, conforme establecía el Estatuto en sus artículos 7 y 8, derivó tal responsabilidad del Estado como ente a las personas físicas que se encontraban al cargo de los órganos rectores de aquel en el momento en que fueron cometidas las actuaciones imputadas.

3.4- Cargo de crímenes contra la humanidad.

En la exposición de este cargo se afirmó que los 18 acusados, actuando conjuntamente con otras personas, y con el mismo esquema argumental que en el cargo tercero, prepararon y ejecutaron un plan común o conspiración para cometer crímenes contra la humanidad conforme a lo establecido en el artículo 6.c del ETMI.⁴⁹ Este plan implicaba, entre otras cosas, el asesinato y persecución de todos aquellos que fueran, o se sospechara que lo fueran, contrarios tanto al Partido Nacionalsocialista como al plan común alegado en el primer cargo.

Dichos métodos y crímenes constituyeron violaciones de tratados internacionales, de las leyes penales internas y de los principios generales del Derecho Penal de todas las

48- IMT. *The Trial* ... *op.cit.*, Vol. I, págs. 42-65.

49- *Idem.*, págs. 65-67.

naciones civilizadas, y ejecutados bajo un patrón sistemático de conducta durante el periodo temporal precedente al 8 de mayo de 1945, y en todos los países y territorios ocupados por las fuerzas armadas alemanas desde el 1 de septiembre de 1939, y en Austria, Checoslovaquia, Italia y en Alta mar. Y finalmente se recalcó que los hechos cometidos bajo el cargo de crímenes de guerra también constituían crímenes contra la humanidad.

Dos puntos llamaban la atención en la acusación presentada. Por un lado, la vinculación final con los crímenes de guerra, afirmando que éstos también eran considerados como crímenes contra la humanidad, lo que reflejaba la clara conexión entre ambos crímenes ya desde la redacción del Estatuto de Londres. Y por otro, la indefinición temporal de la comisión del crimen cuando, de una manera un tanto confusa, la acusación se refería a *un periodo temporal precedente al 8 de mayo*. Se fija una fecha final, la rendición alemana, pero no una inicial, de manera que podría interpretarse que en la intencionalidad de la acusación no existía un límite *ab initio*, que cualquier acto anterior al 8 de mayo considerado como crimen contra la humanidad era susceptible de ser imputado, incluso si se hubiera cometido antes del inicio de la guerra mundial. Ejemplo de ello es que en el acta de acusación se citaron las actuaciones de los campos de Dachau y Buchenwald, los cuales comenzaron a funcionar en 1933 y 1937 respectivamente.

Pero esa intención se contradecía con la famosa corrección del “punto y coma” del artículo 6.c del ETMI, que separaba los *murder type* de los *persecution type*, y por la que se establecía la comisión de las dos categorías del crimen contra la humanidad en conexión con las figuras del crimen de guerra o del crimen contra la paz, es decir, que sólo podrían imputarse hechos susceptibles de ser considerados como crímenes contra la humanidad si se habían cometido durante el periodo que comprendía la guerra, no con anterioridad. El tribunal se atuvo a esta última postura y zanjó la cuestión no aceptando tal ampliación temporal.



Sentados, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: Donitz, Von Neurath, Von Schirach, Sauckel, Göering, Hess, Von Ribbentrop, Keitel y Kaltenbrunner.

4- Las pruebas

4.1- Régimen general

El arsenal probatorio que se expuso durante el juicio fue amplísimo. La acusación presentó 12.360 documentos y citó 33 testimonios, frente a los 2.700 documentos y 80 testimonios de las defensas. Hasta 143 testigos se manifestaron por escrito a las respuestas de los interrogatorios y 1.809 presentaron sus declaraciones juradas. Además, el Tribunal escuchó a 22 testigos en referencia a la acusación de las organizaciones y encargó una comisión que escuchara a 100 testigos en relación a las organizaciones acusadas.⁵⁰

En lo concerniente a la recolección de pruebas y testimonios, los fiscales gozaron de una situación bastante cómoda. Podían acudir *inter alia* a los resultados de la Comisión de Naciones Unidas de Crímenes de Guerra creada en 1943 (UNWCC), con información recabada por los servicios de inteligencia de los aliados, así como a las pruebas y testimonios recogidos por los comités nacionales de investigación de crímenes de guerra y por los expedientes y conclusiones de tribunales militares o de otro tipo de cualquiera de las Naciones Unidas. (art. 21 ETMI). En este sentido, la documentación detallada de los crímenes que estaba en poder de los propios nazis resultó de vital importancia para la

50- WRIGHT, Q., *The Nuremberg Trial*. Annals of the American academy of Political and Social Science. Vol. 246. "Making the United Nations Work", 1946, pág.41.

acusación, ya que la gran mayoría de las pruebas que posteriormente se presentaron a juicio formaban parte de los propios registros escritos elaborados por aquellos.

Aunque el artículo 15.b del Estatuto del TMI obligaba a los fiscales-jefe a preparar el escrito de acusación que tenía que ser aprobado luego por el Comité (art. 14.c) y presentado a la Defensa (art. 16.a), la Fiscalía, sin embargo, no estaba obligada a otorgar a la Defensa el acceso a todas las pruebas y testimonios en su poder, sino únicamente a proporcionarles los documentos que se adjuntaban al escrito de acusación. Repetidas veces los defensores alemanes exigieron sin éxito determinados libros o documentos que el Ministerio Fiscal tenía a su disposición al ser considerados clasificados.

En este sentido, quedaba en entredicho la igualdad de las partes que cabía exigir en un juicio con las suficientes garantías a la hora de defender sus posiciones (principio *audiatur et altera pars*). Esta situación se acentuaba por la concepción acusatoria del proceso, en la que la Fiscalía se consideraba parte en aquel y sólo defendía el punto de vista de la acusación, no teniendo en consideración hechos o pruebas favorables para los acusados.

Si bien el tribunal no estaba obligado a participar en ningún proceso de averiguación de la verdad, tenía el derecho a interrogar a los testigos y a los acusados (art. 24.f). Sin embargo, en la práctica, el interrogatorio y contrainterrogatorio a los testigos era llevado a cabo sólo por las partes, Fiscalía y Defensa. A la vista de los testimonios y las pruebas, la Defensa y la Fiscalía se dirigían al Tribunal (art. 24.h, i) y los acusados tenían la última palabra (art. 24.j). Tras las deliberaciones, el tribunal emitía el juicio y pronunciaba la sentencia (arts. 24.k, 26, 27 y 28).

4.2- Las pruebas aportadas

En cuanto a los dos primeros cargos, si bien todos los hechos descritos en la acusación tenían un grado elevado de certeza, el problema estaba en probar que todas esas actuaciones fueron realizadas conforme a un plan predeterminado de antemano cuyo fin definitivo era la ocupación militar de otros Estados, aceptando como consecuencia plausible de estas agresiones militares la comisión de los otros dos crímenes imputados, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, a lo largo de la investigación previa al proceso ni siquiera en el

contenido de *Mein Kampf* (*Mi lucha*), la autobiografía de Hitler,⁵¹ se podían vislumbrar *planes nazis de conquista y dominio, ni plenamente ni de manera manifiesta*.⁵²

Una de las principales pruebas aportadas en la que se basó tanto la acusación de conspiración como la de crímenes contra la paz fue el llamado memorando Hossbach. Era un documento redactado por un adjunto a Hitler, el coronel Friedrich Hossbach, a partir de una reunión celebrada en la Cancillería del Reich el 5 de noviembre de 1937. Los asistentes a dicha reunión constituían la más alta representación militar del país, incluidos el propio Adolf Hitler y algunos de los acusados en el proceso, como Göering, von Neurath y Raeder. La reunión se desarrolló entre las 16.15 y las 20.30 horas, en el curso de la cual Hitler explicó a los presentes las posibilidades y las necesidades de expandir su política exterior, solicitando que estas declaraciones fueran consideradas como su testamento en el caso de su muerte, lo que certificaría la importancia y el carácter secreto de dicho encuentro. Las actas de la reunión revelaban que ya a finales de 1937 la política exterior del régimen nazi estaba bastante definida. Aunque se incluía a Francia como posible víctima de la expansión, las conversaciones se centraban en la futura ocupación de Checoslovaquia y Austria como los dos Estados que debían proporcionar a Alemania el espacio vital o *Lebensraum*⁵³ que se preconizaba en la ideología nazi, y que serviría de soporte para el futuro avance hacia el Este.

En cuanto a la planificación de la agresión, la acusación se refirió también a otras reuniones secretas de alto nivel celebradas los días 23 de mayo, 22 de agosto y 23 de noviembre de 1939, en las que Hitler expuso sus planes de agresión para el futuro y examinó los progresos realizados en la ejecución de sus políticas expansionistas hasta esos momentos. Destaca la del 23 de mayo, recogida documentalmente por el teniente

51- Escrita por Hitler durante su confinamiento en prisión tras su intento de Golpe de Estado en 1923, el conocido como *putsch* de la cervcería, por haberse ideado en una famosa cervcería de Munich.

52- OVERY, R., *Interrogatorios ... op.cit.*, Tusquets 2003, pág.73. Fuente original: PRO, LCO 2/2900, memorando del Departamento de Investigación del FO, “*Nazism as a conspiracy for the domination of Europe: the evidence of “Mein Kampf”*”, 22 de junio de 1945, págs. 1-2.

53- El *Lebensraum* o espacio vital era uno de los principios ideológicos del nazismo, y suponía la creencia de que para Alemania era imprescindible un territorio necesario (espacio vital) para su supervivencia, lo que le sirvió de justificación para su expansión en el Centro y el Este de Europa (el Plan General del Este –*Generalplan Ost*- nazi se basó en este principio). El uso del término por parte de los nazis tenía un claro tinte racial, y se justificaba en base al supuesto derecho místico de la superioridad de la raza de los pueblos germánicos (*herrenvolk*) para cumplir su destino cultural en detrimento de los pueblos racialmente inferiores (*untermenschen*), como eran los eslavos y los latinos del Sur de Europa. Basándose en la interpretación geopolítica del término de geografía humana elaborado a finales del siglo XIX por el etnógrafo y geógrafo Friedrich Ratzel, es incorporado al ideario nacionalsocialista a través de *Mein Kampf*, (la autobiografía de Hitler, y de *El mito del siglo XX*, obra magna de Alfred Rosenberg, el otro gran ideólogo del nazismo).

coronel Rudolf Schmundt,⁵⁴ en la que, reunida la plana mayor del Estado Mayor, incluidos los acusados Göering, Keitel y Raeder, el propio Hitler identifica a Polonia como el enemigo eterno de Alemania y, por su situación geográfica, un pobre amortiguador frente al bolchevismo de la rusia soviética. Ello, sumado a la necesidad del espacio vital inspirador de la ideología nazi, llevan a Hitler a la conclusión de que *Alemania debe atacar a Polonia en la primera oportunidad adecuada*.

Respecto a los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, los documentos y los testimonios aportados por las acusaciones valían en la mayoría de los casos para la incriminación de ambos delitos, lo que demostraba la línea tan débil que separaba a unos de los otros.

Referidos solamente a los primeros, se presentaron abundantes testimonios sobre la violación del *ius in bello* bajo la influencia de la política de exterminio total del enemigo de la que estaba imbuida la ideología nazi. Uno de ellos fue el de Erwin Lahousen, oficial de la inteligencia militar alemana (*Abwer*), que había trabajado para el que fue director de aquella, el almirante Wilhelm Canaris. En una reunión celebrada en el verano de 1941, al principio de la invasión de Rusia, en la que se discutió el tratamiento que debían recibir los comisarios rusos que habían caído prisioneros, declaró lo siguiente:

*Las órdenes se referían a los dos tipos de medidas que había que tomar. En primer lugar, el asesinato de los comisarios rusos; en segundo lugar, el asesinato de todos aquellos elementos de entre los prisioneros rusos que, según un programa de selección del SD pudieran ser identificados como totalmente bolchevizados o como representantes activos de la ideología bolchevique (...). El general Reinecke justificó así esas órdenes: la guerra entre Alemania y Rusia no es una guerra entre dos Estados o ejércitos, sino entre dos ideologías, la ideología nacionalsocialista y la ideología bolchevique. El soldado del Ejército Rojo no debe ser considerado como un soldado en el sentido que se aplica a nuestros enemigos occidentales, sino como un enemigo ideológico. Debe ser considerado como el archienemigo del nacionalsocialismo y tratado en consecuencia (...).*⁵⁵

54- Documento L-79.

http://nuremberg.law.harvard.edu/documents/2914-minutes-of-a-conference?q=*#p.4

55- Declaración de Erwin Lahousen ante las preguntas del Coronel John Amen, recogida en las actas del juicio el 30 de noviembre de 1945, en OWEN, J., Nuremberg, Crítica, 2007, pág. 67.

En cuanto a las pruebas que podían considerarse válidas para la imputación de ambos crímenes, se presentaron diversos testimonios de los asesinatos en masa en las poblaciones de los territorios ocupados, así como de las calamidades sufridas en los campos de concentración y de exterminio, estas últimas acompañadas de grabaciones audiovisuales realizadas por los contingentes aliados, que descubrieron los horrores que allí se cometieron conforme iban haciendo retroceder al ejército alemán. Fue llamativa la proyección poco después del inicio del juicio, el 28 de noviembre, en la que se mostraba las consecuencias de dichas actuaciones en diversos campos de concentración. La reacción por parte de los acusados fue recogida por Gustave Gilbert, psicólogo norteamericano al cargo de los presos durante el proceso:

Fritzsche palidece y se siente horrorizado cuando aparecen las escenas de los prisioneros quemados vivos en un granero (...) Funk llora amargamente, se tapa la boca con las manos mientras lanzan a un hoyo los cadáveres de mujeres desnudas(...) Keitel y Von Ribbentrop levantan la vista ante la mención de un tractor que recoge cadáveres, lo ven, después se cogen la cabeza con las manos (...) Hess y Streicher dicen “No me lo creo”. Fin de la película.⁵⁶

Dicha reacción coincide con las declaraciones de todos los acusados acerca de su desconocimiento sobre los exterminios y asesinatos imputados, negando su responsabilidad en tales actos. Solamente Hans Frank, el Gobernador General de la Polonia ocupada y la figura jurídica más destacable del régimen, y cuyos diarios incautados por las tropas soviéticas supusieron una importante prueba documental para la acusación, llegó a reconocer en el proceso parte de su culpa en la creación de los guetos y en las deportaciones de los judíos en los territorios de los que él era el máximo responsable. Si bien negó conocimiento alguno de la existencia de lo ocurrido en los campos de exterminio, reconoció de manera implícita su responsabilidad. En el transcurso del proceso, ante la pregunta de su abogado, el doctor Alfred Seidl, sobre si participó alguna vez en la aniquilación de los judíos, la respuesta de Frank fue la siguiente:

Digo que sí, y la razón por la que digo que sí, es porque, después de haber vivido los cinco meses de este juicio, y especialmente después de haber escuchado el

56- Impresiones del psicólogo Gustave Gilbert, tomadas de su diario (*Nuremberg Diary*, Nueva York, Signet, 1947), en OWEN, J., *Nuremberg*, ..., *op.cit.* págs. 62-64.

*testimonio del testigo Höss, mi conciencia no me permite descargar la responsabilidad únicamente en estas personas secundarias.*⁵⁷

El Höss al que se refería Hans Frank era Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz-Birkenau durante el periodo de 1940 a 1943, el mayor campo de exterminio nazi y paradigma del holocausto judío. Introducido en el proceso como testigo de Ernst Kaltenbrunner, con el objeto de exonerar a éste de cualquier responsabilidad, su testimonio resultó de gran valía para la acusación a la hora de probar la comisión de los crímenes contra la humanidad. Höss reconoció en el juicio la desaparición en las cámaras de gas de más de dos millones de judíos, la mayoría como consecuencia de la orden recibida de Heinrich Himmler⁵⁸ tras una reunión celebrada en Berlín en el verano de 1941, en la que éste le comunicaba que Hitler había ordenado poner en marcha la llamada “solución final a la cuestión judía”⁵⁹, que debía ser ejecutada por las SS, y que si no se hacía de inmediato los judíos destruirían más tarde al pueblo alemán.

Dicha “solución final” fue igualmente mencionada en la declaración ofrecida por Dieter Wisliceny, oficial de las SS, quien facilitó a la acusación en el proceso el esquema de la estructura de la Oficina Central de Seguridad del Reich (*RSHA*). Asesor del gobierno eslovaco sobre la cuestión judía durante la contienda, Wisliceny afirmó que en una reunión celebrada en el verano de 1942 con su superior Adolf Eichmann,⁶⁰ uno de los

57- Texto original de la declaración de Hans Frank ante las preguntas de su abogado, el doctor Alfred Seidl, del 18 de abril de 1946, recogida en SANDS, P., *Calle Este-Calle Oeste*, Anagrama, 2017, pág. 412.

58- Heinrich Luitpold Himmler (1900-1945) fue un oficial nazi de alto rango, *Reichsführer* de las *Schutzstaffe* (SS), y uno de los principales líderes del Partido Nazi (NSDAP) durante el régimen nacionalsocialista. Apartir de 1943 fue ministro del Interior del Reich y máximo supervisor de los organismos de seguridad del Estado, entre los que se incluían las SS y la Gestapo (Policía Secreta del Estado, dependiente de las SS). En nombre de Hitler, formó los llamados *Einsatzgruppen* (nombre que recibían un conjunto de escuadrones de ejecución itinerantes especiales formados por miembros de las SS, SD y otros miembros de la Policía Secreta), y se encargó de la construcción de los campos de exterminio. Poco después de la rendición alemana, fue detenido por las Fuerzas británicas, bajo cuya custodia se suicidó el 23 de mayo de 1945.

59- La “solución final”, conocida en la terminología nacionalsocialista como “solución final de la cuestión judía” (*Endlösung der Judenfrage*), es el nombre que recibió el plan del Tercer Reich para llevar a cabo la eliminación sistemática y programada de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial. Es *a posteriori* de ésta cuando se empieza a conocer tal “solución final” como el Holocausto o *Shoa* (en hebreo), es decir, el proceso que supuso la deportación y exterminio de toda persona clasificada como judía por los nazis independientemente de la religión que profesara.

El 31 de julio de 1941, Reinhard Heydrich, comandante de la Oficina Central de Seguridad del Reich (*Reichssicherheitshauptamt* o *RSHA*), recibió una orden de Herman Göring para preparar la “solución final de la cuestión judía”. Posteriormente, el 20 de enero de 1942, tuvo lugar en la localidad de Gross Wannsee (Berlín) la conocida como conferencia de Wannsee, en la cual, liderada por Heydrich, un grupo de funcionarios del gobierno nazi y jerarcas de las SS fijaron las pautas para coordinarse con las autoridades correspondiente en la puesta en marcha de dicha “solución final de la cuestión judía”.

60- Otto Adolf Eichmann (1906-1962) fue uno de los principales organizadores y responsable directo de la “solución final” de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Habiendo alcanzado el rango de *Obersturmannführer* de las SS, fue fichado por Reinhard Heydrich por su facilidad en el manejo de la logística de la deportación en masa de los judíos a los guetos y campos de concentración en los países del Este de Europa ocupados por los nazis durante la

dirigentes principales de las SS, le preguntó a este sobre el rumor que circulaba de que se estaba exterminando a los judíos en Polonia. Su respuesta fue que la mayoría de los judíos ya no estaban vivos, remitiéndose a una orden de Himmler. Según Wisliceny:

Le pedí entonces que me enseñase la orden, ya que no podía creer que hubiesen puesto algo así por escrito...Eichman cogió un pliego de papeles de su caja fuerte, lo hojeó y me enseñó una carta de Himmler dirigida al jefe de la Policía de Seguridad y del SD. La carta decía fundamentalmente que el Führer había ordenado la Solución Final al problema judío, encargo que debía ser acometido por el jefe de la Policía de Seguridad y del SD y por el inspector de los campos de concentración. Todos los hombres y mujeres judías que pudiesen trabajar serían excluidos temporalmente de dicha Solución Final y se usarían como mano de obra en los campos de concentración. La carta estaba firmada por Himmler, de lo que no tenía duda, ya que conocía bien su firma (...) Eichman me explicó que bajo el concepto de “solución final” se ocultaba la aniquilación biológica y sistemática de la raza judía en los territorios del Este.⁶¹

Además de las declaraciones de dichos responsables nazis, a lo largo del proceso se pudieron oír diferentes testimonios que atestiguaron *in personam* toda una serie de actuaciones que certificaban el carácter atentatorio contra la dignidad humana de la política llevada a cabo por el régimen nazi. Tales actos, que supusieron el asesinato y exterminio de millones de judíos, gitanos, homosexuales, comunistas y demás personas consideradas *non grata* por el régimen nazi, fueran alemanes o no, ofrecían a la acusación la justificación para poder ser considerados como crímenes autónomos, ya que presentaban unas características que permitían desligarlos de la concepción que se tenía hasta ese momento de los crímenes de guerra, a pesar de ser cometidos en el transcurso de ésta. Como explica Liñán Lafuente, *conforman una larga lista de crímenes contra la humanidad que escapan del manto del crimen de guerra, y que, de no haberse creado esta figura, hubieran tenido difícil encaje.*⁶²

guerra. Tras la finalización de la contienda, logró escapar a Argentina, donde residió con el nombre de Ricardo Klement desde el 15 de julio de 1950 hasta el 20 de mayo de 1960, fecha en la que fue secuestrado y trasladado a Israel por miembros del servicio secreto de este país, el *Mossad*, donde fue juzgado y encontrado culpable de crímenes contra la humanidad. Fue ejecutado por ahorcamiento en la madrugada del 31 de mayo, en la prisión de Ramla (Jerusalén).

61- Texto original de la declaración de Dieter Wisliceny ante las preguntas del Teniente coronel Smith Brookhart durante el juicio, el 3 de enero de 1946, y recogida en OWEN, J., *Nuremberg, ..., opus.cit.*, págs. 96-97.

62- LIÑÁN LAFUENTE, A., *El crimen ..., op.cit.*, pág. 71.

5- Las alegaciones de la Defensa. Controversias jurídicas

5.1- Principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Prohibición de retroactividad

La principal alegación que expusieron las defensas era que la ley surgida del Estatuto de Londres vulneraba el principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, es decir, el principio de legalidad de los delitos y las penas. Dicho principio, cuya formulación clásica se debe a Feurbach,⁶³ establece que ninguna conducta puede conceptuarse como delito, ni imponerse pena alguna si no hay ley que lo prescribe así en el momento de la comisión de dicha actuación. Asimismo, por estar íntimamente vinculado al principio de legalidad penal, se argumentó que igualmente se vulneraba el principio de irretroactividad de la ley penal, el cual supone la prohibición, derivada de la exigencia de una ley previa (*lex praevia*), de que la ley no puede actuar de forma retroactiva si la misma es más desfavorable o más grave que la ley que existía en el momento de la comisión del delito. Esta prohibición existe puesto que la ley sólo puede agravar o crear responsabilidad criminal si la misma ya recogía el delito cometido con anterioridad a que el mismo se efectuara.

Las defensas argumentaron tal vulneración en que se habían imputado unos delitos, acompañados de su correspondiente penalidad, que no existían configurados en ningún ordenamiento jurídico en el momento en que se cometieron, es decir, que los acusados no sabían que con sus actuaciones estaban cometiendo actos criminales penados al no estar tipificados como tales en ningún código legal. Así, se criticaba que el Estatuto creaba de esta manera una legislación *ex post facto*, es decir, en un momento posterior al de la ejecución material de los actos imputados.

El tribunal de Núremberg argumentó que el principio *nullum crimen sine lege* era un principio general de justicia aceptado por las naciones civilizadas, de manera que los acusados eran plenamente conscientes de que los actos por los que se les acusaba eran contrarios a la costumbre del Derecho Internacional, y que lo injusto no era castigar esos

63- Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach (Hainichen, Jena, 14 de noviembre de 1775 – Fráncfort del Meno, 29 de mayo de 1839), inspirado en las ideas de Hegel, fue uno de los máximos representantes de la teoría relativa de la pena o teoría de la prevención general negativa, es decir, que ésta debe tener una función más preventiva de delitos que correccional, ejerciendo una coacción tanto física como psicológica sobre el delincuente y, en un grado más elevado, la sociedad en general. Feurbach fue quien acuñó la fórmula latina del principio de legalidad, con una triple dimensión: *nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*.

hechos sino permitir su impunidad. Así, concluía el tribunal que los acusados tenían plena consciencia de la prohibición de los actos y de su posible castigo.⁶⁴

Frente a una tesis positivista estricta que hubiera dificultado las acusaciones, reduciendo sus probabilidades de éxito, se acudió a una argumentación iusnaturalista del Derecho, amparándose en las normas del Derecho Consuetudinario, cuya imperatividad se sostenía, según el tribunal, independientemente de su inclusión o no en Códigos escritos. De esta manera, podría entenderse que el tribunal se acogió a una acepción del principio más acorde con la expresión *nullum crimen sine iure*, según la cual, como afirma Bassiouni, permite que las prohibiciones legales y punibles deriven tanto del derecho convencional como del consuetudinario, siendo menos restrictiva que la de *nullum crimen sine lege*, la cual connota mayor rigidez y especificidad.⁶⁵

Respecto de si realmente se violó o no dicho principio, se han distinguido tres posturas:

- Aquella que afirma que el principio no fue vulnerado porque la costumbre internacional en la que se basaba el Derecho aplicado por el Tribunal ya había formulado anteriormente el carácter criminal de tales actos, y, por lo tanto, era conocido por los imputados. Dentro de esta posición se argumentaba también una reinterpretación y adaptación del principio de legalidad a las características del Derecho Internacional. En este sentido, para el profesor Liugi Condorelli:

*El autor de ciertas acciones u omisiones no podía ignorar en forma alguna su carácter delictivo, en atención a su clara definición como crímenes en el ordenamiento interno al cual estaba sometido en el momento de ser perpetrados. Para que el principio nullum crimen sea escrupulosamente observado, no es absolutamente necesario que la norma internacional, previendo y organizando la represión del crimen, defina hasta su último detalle la figura criminis y la pena aplicable. Es suficiente constatar que el autor del crimen en cuestión está sometido en el momento del tempus commissi delicti, a normas jurídicas claras y accesibles, ya sean internas o internacionales, estableciendo ante factum una definición de tal naturaleza.*⁶⁶

64- IMT. *The Trial ...*, op.cit., Vol. I, pág. 219.

65- BASSIOUNI, M.C., MANIKAS, P., *The Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, Transnational Publishers, Nueva York, 1996, pág. 268.

66- CONDORELLI, L., “*La définition des infractions internationales*”, en Ascensio, H., Decaux E, Pellet, A, *Droit International Penal*, A.Pedone, pág. 244.

En esta línea y en referencia a la posible retroactividad de la normativa del Estatuto de Londres, dentro mismo de las acusaciones en el proceso, el fiscal jefe británico, Sir Harley Shawcross, en su alegación final afirmó:

Por lo tanto, no existe una retroactividad sustancial en las Disposiciones de la Carta. Simplemente fija la responsabilidad de un delito ya claramente establecido como tal por la ley positiva sobre sus perpetradores reales. Llena un vacío en el proceso penal internacional. Existe toda la diferencia entre decirle a un hombre: “Ahora serás castigado por lo que no fue un delito en el momento en que lo cometiste” y decirle: “Ahora pagarás la pena por una conducta que fue contrariamente a la ley y a un delito cuando lo ejecutó, aunque, debido a la imperfección de la maquinaria internacional, no había en ese momento ningún tribunal competente para pronunciarse en su contra”. Es este último curso el que adoptamos, y si se trata de retroactividad, proclamamos que es totalmente coherente con esa justicia superior que, en la práctica de los Estados civilizados, ha establecido un límite definitivo para el funcionamiento retroactivo de las leyes.⁶⁷

- En segundo lugar, la que considera que posiblemente hubo una vulneración del mencionado principio, pero se justifica en virtud de la necesidad histórica de que semejantes aberraciones fueran penadas. En apoyo de esta posición, el más importante jurista alemán de la época, Hans Kelsen, según el cual las personas que cometieron esos crímenes no podían dejar de ser conscientes del tamaño de la inmoralidad que realizaban. Aunque Kelsen no aceptó que Núremberg pudiera ser considerado un antecedente válido para el futuro Derecho Internacional, principalmente por la creación *ad hoc* del tribunal y su composición exclusivamente por las potencias vencedoras, sí entendió que la retroactividad de las leyes a ellos aplicada puede difícilmente ser considerada como absolutamente incompatible con la justicia. Según Kelsen:

La justicia requiere el castigo de estos hombres, aunque para el Derecho positivo no pudieran ser sancionados (...) De acuerdo con la opinión pública del mundo civilizado, es más importante sentar a los criminales de guerra ante la justicia que respetar, en su juicio, la regla contra la ley ex post facto, que tiene meramente un valor relativo y que, por tanto, nunca ha sido reconocida sin restricciones.⁶⁸

67- SHAWCROSS, H., *Nuremberg Trials*, Vol. 3, pág. 106.

<https://avalon.law.yale.edu/imt/12-04-45.asp>

68- KELSEN, H., “The Rule against Ex Post Facto Laws and the Prosecution of Axis War Criminals”, *Judge Advocate Journal*, Núm. 2, 1945, pág. 11.

También a favor de la retroactividad en Núremberg, el otro gran jurista de Alemania, y antagonista de Kelsen, Carl Schmitt⁶⁹, que en el informe que redactó para la defensa del importante industrial alemán Friedrich Flick, quien fue condenado en uno de los procesos menores de Núremberg a siete años de prisión por suministrar armamento al ejército alemán, expresó lo siguiente:

Las atrocidades, en este particular sentido, que han sido cometidas antes de la última guerra mundial, y durante ésta, tienen que ser consideradas de hecho como «mala in se». Su inhumanidad es tan grande y tan evidente que basta constatar los hechos y el autor para fundamentar una punibilidad, sin tomar en consideración las leyes penales positivas hasta ahora vigentes. Aquí se juntan todos los argumentos del sentir humano, de la razón y de la justicia, de una forma aparentemente elemental, para justificar una condena, la cual no necesita de una norma positiva en algún sentido formal (...). Quien, a la vista de estos crímenes presenta la objeción del «nullum crimen», queriendo referirse de esta manera a las determinaciones jurídico positivas penales hasta ahora vigentes, se expondría él mismo a la luz de duda.⁷⁰

- Y una última postura que consideraba que se trató de una justicia de los vencedores, y que, al violarse la garantía establecida en el principio de legalidad del derecho penal, los juicios carecían de validez jurídica. En este sentido, Jaén Vallejo afirma que:

No ya sólo porque no representaban a la comunidad internacional, sino a las potencias vencedoras, porque al fin y al cabo se trataba de tribunales militares encargados de juzgar los crímenes cometidos por el enemigo vencido, sino sobre todo porque suponían una infracción del principio de legalidad. La razón es clara: muchas de las conductas que se establecieron como delito en el Estatuto de Londres de 1945, y por las que se condenó a los acusados, no constituían delito ni según el Derecho Internacional entonces vigente, ni según el Derecho penal interno alemán.⁷¹

69- El mismo Schmitt fue acusado de colaborar con el régimen nazi y llegó a comparecer como testigo en el undécimo de los procesos de Núremberg, en el que se juzgaron a los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque pronto fue excluido de la acusación. El cautiverio de Schmitt comprendió un año, entre 1945 y 1946 en un campo de concentración, y dos meses en la prisión de Núremberg en 1947.

70- SCHMITT, C., *El crimen de guerra de agresión en el Derecho Internacional y el principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”*, Hammurabi, Buenos Aires, 2006.

71- JAÉN VALLEJO, M., *Legalidad y extraterritorialidad en el Derecho Penal Internacional*. Atelier, Barcelona, 2006, págs. 47-48.

En el mismo sentido, y ampliando la crítica a la totalidad del proceso, el jurista brasileño Nelson Hungria mantiene que:

*El tribunal de Núremberg ha de quedar como una mancha de la civilización contemporánea: ha hecho tábula rasa del principio nullum crimen nulla poena sine lege. Con un improvisado plan de juzgamiento, de efecto retroactivo, incriminó hechos pretéritos e impuso a sus autores “obligaciones” y penas puramente arbitrarias; desatendió el principio de “territorialidad de la ley penal”, estableció la responsabilidad penal de individuos participantes de tales o cuales asociaciones, aun sin que guardaran relación con los hechos imputados; funcionó en nombre de los vencedores, que habían cometido los mismos hechos atribuidos a los acusados; sus sentencias eran inaplicables, incluso cuando decretaban la pena de muerte.*⁷²

5.2- Principio de territorialidad (*lex loci*)

Las defensas argumentaron que, conforme al principio penal de territorialidad (*lex loci*), los acusados debían ser juzgados por tribunales alemanes atendiendo a la nacionalidad de todos ellos, debiendo aplicarse la ley alemana al ser la competente territorialmente para juzgar a aquellos. Es decir, se alegaba que el tribunal, de creación *ad hoc* y *ex post facto* por parte de las potencias vencedoras, carecía de la competencia necesaria, tanto territorial como jurisdiccional, para poder enjuiciar a dichos ciudadanos alemanes.

Frente a esta argumentación, el tribunal defendió que la *lex loci* estaba anulada al haber quedado suspendida la soberanía de Alemania por el acta de rendición incondicional, asumiendo aquella los Estados aliados y ejerciendo así sobre su territorio sus antiguas atribuciones⁷³, tal como recogía la Declaración de rendición de Berlín, del 5 de junio de 1945: *(los aliados) asumen la suprema autoridad con respecto a Alemania, incluyendo todos los poderes del gobierno alemán, el Alto Mando y cualquier gobierno o autoridad estatal, municipal o local.*

Además, el tribunal sostuvo que la ley alemana no podía ser aplicada como ley territorial porque, por un lado, los hechos imputados carecían de localización geográfica precisa (la

72- HUNGRIA, N., *Comentários ao Código Penal*, T. I, V. I, 4ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1958, pág. 31.

73- IMT. *The Trial ...*, *op.cit.*, Vol. I, pág. 218.

mayoría fuera del Estado alemán), y por otro que las leyes dictadas bajo el paraguas del régimen nazi figuraban indirectamente como acusadas en el proceso por promover en sus disposiciones la comisión de los crímenes imputados en el Estatuto de Londres ⁷⁴.

5.3- Principio de responsabilidad penal individual

Otro de los argumentos esgrimidos por las defensas fue que al tratarse de supuestos crímenes que vulneraban el Derecho Internacional, no existía precedente en éste de que la responsabilidad pudiera recaer sobre personas individuales, sino que, en todo caso, aquella la debería asumir el Estado del que los acusados eran ciudadanos y no ellos. Para las defensas, las violaciones de los tratados, si las hubo, en todo caso suponían una infracción del Derecho Internacional pero no un acto punible, ya que no había previsto un sistema coercitivo que castigase dichas conductas. Y ante la posibilidad de que pudiera llegarse que declarar algún tipo de responsabilidad, ésta debería ser asumida por el Estado y no por individuos, debido a que el principio básico de organización entre Estados hasta ese momento era la soberanía de estos mismos. De esta manera, si se juzgaba a los individuos amparándose en que eran los que habían llevado a cabo los actos de Estado, se estaría vulnerando la propia soberanía del Estado en cuestión, algo desconocido hasta entonces.

En palabras de Hermann Jahreis, abogado defensor de Alfred Jodl:

*El castigo de individuos por la violación de la paz entre Estados puede así ser ordenado por la comunidad legal de las naciones, solamente si de antemano se abandonan los principios fundamentales del Derecho Internacional ahora en vigor y la escala de valores que por siglos han estado firmemente arraigados en el sentimiento de las naciones europeas, esa escala de valores de acuerdo con la cual el Estado, el propio Estado soberano, forma el fundamento indispensable para la libre personalidad.*⁷⁵

La acusación se amparaba en lo establecido el artículo 7 del ETMI, que dejaba claro que no cabía tal inmunidad bajo el amparo de la soberanía del Estado: *El cargo oficial de los acusados, ya sean Jefes de Estado o funcionarios a cargo de Departamentos del*

74- IMT. *The Trial ...*, op.cit., Vol. I, pág. 219.

75- Texto original del alegato del abogado de Alfred Jodl, Hermann Jahreis, según se recoge en BENTON, W.E. y GRIMM, G., *El juicio de Nuremberg desde el punto de vista alemán*, Tr. J.M. Ochoa, Editorial Constancia, México D.F., pág. 51.

*Gobierno no les exonerará de las responsabilidades ni servirá para atenuar la pena. El tribunal en su sentencia afirmó que nadie podía obtener impunidad porque actuara en función de la soberanía del Estado, cuando el Estado aprueba actos que se mueven fuera de los límites del Derecho Internacional.*⁷⁶ Y ante el argumento de que éste se circunscribía a regular las relaciones entre Estados, el tribunal contestó que *los crímenes contra el Derecho Internacional fueron cometidos por hombres y no por entidades abstractas.*⁷⁷

5.4- Principio o doctrina de *tu quoque*

El principio o doctrina de *tu quoque* (“tú también”) consiste en rechazar un argumento o razonamiento, o considerarlo falso, alegando la inconsistencia de quien lo propone. Se trata de una variante de la falacia *ad hominem*, o de la falacia *ad personam*, o ataque personal, mediante la cual se pretende demostrar que una crítica o una objeción se debe aplicar igualmente a la persona que la realiza, rechazándola sin entrar a analizarla. En este sentido, las defensas argumentaron en varias ocasiones que las potencias vencedoras habían realizado hechos que tenían la misma naturaleza que aquellos por los que se enjuiciaba a sus defendidos. La mayoría de los casos planteados fueron rechazados, como la acusación a la Unión soviética de la ocupación en 1939 de Finlandia y de parte de Polonia, los bombardeos masivos de ciudades alemanas, o la invasión británica de Islandia y Persia, amparándose en que la competencia del tribunal se limitaba a juzgar crímenes cometidos por los Estados del Eje europeos y no actos de las potencias vencedoras contrarios al Derecho de Gentes.

Sólo en un único caso consiguió aplicar la defensa dicho principio, en favor de los almirantes Raeder y Donitz, al situar una actuación alemana de la marina frente a la llevada a cabo por los Estados Unidos en la guerra submarina en el Pacífico, dictaminando el Tribunal que:

En consideración a estas pruebas y en particular a una orden del almirantazgo británico del 8 de mayo de 1940, que todos los barcos a la vista en el Skagerrak debían ser hundidos, y en consideración a la respuesta al cuestionario por el almirante Nimitz, de que en el océano Pacífico se había realizado por los Estados

76- IMT. *The Trial ...*, op.cit., Vol. I, pág. 223.

77- *Ibidem*.

*Unidos, desde el primer día de la entrada de esta nación en la guerra, la guerra submarina ilimitada, no está apoyada la pena solicitada para Donitz por sus infracciones contra las disposiciones internacionales por la guerra submarina.*⁷⁸

En ese supuesto el principio *tu quoque* actuó como eximente. En otros casos no hizo falta alegarlo, ya que se aplicó de manera preventiva por los fiscales al no recogerse en el escrito de acusación ni los ataques alemanes con V1 y V2, ni los bombardeos de Rotterdam, Coventry y Londres por la *Lutwaffe*, en contraposición y compensación al plan angloamericano relativo a los bombardeos aéreos de las ciudades alemanas.

5.5- Principio de imparcialidad judicial

La composición del tribunal fue otra de las críticas manifestadas por las defensas. Es un principio básico del Derecho Procesal que la imparcialidad y objetividad de quien ejerce la jurisdicción depende de que esté compuesto por elementos ajenos al conflicto que motiva tal ejercicio jurídico. En el caso de Núremberg, muchos se preguntaban cómo se podría garantizar la imparcialidad de un tribunal compuesto por jueces pertenecientes a las cuatro potencias vencedoras, cuando éstas a su vez ostentaban además la acusación en el proceso. Como afirma Palacio Sánchez Izquierdo:

*Pretender que un juez soviético pueda juzgar imparcialmente a los políticos y militares alemanes responsables de la muerte de millones de conciudadanos rusos, es simplemente quimérico.*⁷⁹

En sentido similar se expresó Hans Kelsen, para quien un tribunal internacional no debería serlo sólo por sus bases jurídicas, sino también por su composición, es decir, que deberían integrarlo tanto los Estados victoriosos como los vencidos. Así, dicho tribunal podría deslindar las responsabilidades y señalar los crímenes que tienen el carácter de Estado, sin que aparezcan en las sanciones aplicadas sospechas de represalia⁸⁰. Por contra, Vespasian Pella afirmó que después del sacrificio y los esfuerzos desplegados para lograr la imposición de la causa justa, hubiera sido un acto desprovisto de buen

78- Texto original de la sentencia (IMT. *The Trial* ..., *op.cit.*, Vol. XXII, pág. 636), según se recoge en DEMANDT, A., *Los grandes procesos de la historia*, Crítica, 2000, pág. 244.

79- PALACIO SÁNCHEZ IZQUIERDO, J. R., *Del juicio de Nuremberg al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*, en Estudios de Deusto: Revista de la Universidad de Deusto, Vol. 47, Nº 1, 1999, Nota 15, pág. 101.

80- KELSEN, H., *Peace through Law*, Garland Publishing Inc., Nueva York, 1973, págs. 87-88

sentido formar un tribunal por magistrados pertenecientes a países neutrales, como si no pudiera confiarse en la idoneidad e imparcialidad de los jueces que se escogieron ⁸¹.

6- La sentencia

Tal como se ha descrito en el capítulo anterior en referencia a las contestaciones ofrecidas a cada una de las alegaciones de las defensas, el Tribunal Militar Internacional adoptó en su sentencia, dictada el 1 de octubre de 1945, casi la totalidad de los razonamientos de la acusación.

En primer lugar, consideró que el Estatuto de Londres suponía una codificación del Derecho Internacional ya vigente en el momento de su promulgación, negando que fuera una muestra de la justicia de los vencedores que deciden crear unos delitos de nuevo cuño para castigar a través de ellos a sus enemigos derrotados. Y asimismo, que dicho Derecho Internacional debía interpretarse de acuerdo a los principios generales de la ley, que se encuentran en la costumbre y en la práctica habitual que haya alcanzado reconocimiento universal, así como en los principios de justicia, y que estos conceptos deben ser dinámicos y adaptarse a las constantes evoluciones de la realidad que aspiran a regular.⁸²

Ante el argumento de las defensas de que en el momento en que se cometieron los hechos ningún Estado soberano consideraba la guerra de agresión como un crimen internacional, el tribunal declaró que, desde la Conferencia de París de 1928, el Pacto Briand-Kellog, la guerra de agresión había sido rechazada por los países firmantes, y que aunque ese pacto no se considerara expresamente un crimen internacional si lo era de esa manera en otros tratados y resoluciones que había firmado Alemania al amparo de la costumbre y la ley internacional.⁸³

En cuanto a la negación por parte de las defensas de la responsabilidad individual de los acusados por actos en nombre del Estado, así como por los realizados en cumplimiento de ordenes de un superior, el tribunal respondió que los crímenes contra el Derecho Internacional eran cometidos por personas individuales y no por unidades abstractas, y que sólo castigando a estos responsables podía hacerse efectivo el Derecho

81- IRIGOYEN, J., *El proceso de Nuremberg y el Derecho Internacional*, Lima: Villanueva, 1955, pág. 123.

82- IMT. *The Trial ...*, *op.cit.*, Vol. I, pág. 218.

83- *Idem.*, págs. 220-221

Internacional.⁸⁴ Se concluía así que el Derecho Internacional imponía responsabilidades y obligaciones tanto sobre los Estados como sobre las personas individualmente consideradas.

En referencia a la vulneración del principio *nullum crimen sine lege* alegado por las defensas, el tribunal declaró que siendo considerado aquel un principio de justicia, sería injusto para los miembros del Tribunal dejar de castigar las atrocidades descritas en el proceso en base a que no existía explícitamente como tal un tipo delictivo que las condenase. En este sentido, apelaba a la propia conciencia humana, según la cual al dirigir la conducta del modo en que la dirigían los acusados, ellos mismos debían de saber que obraban mal, o al menos poder prever que sus actos les podrían acarrear consecuencias en el futuro.⁸⁵

Respecto al concepto de “conspiración”, el tribunal sólo aceptó su aplicación a la creación y dirección del plan para la guerra de agresión, rechazándolo para los supuestos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Afirmó que la conspiración no estaba definida claramente en el Estatuto y que no se podía interpretar la conspiración para cometer crímenes de guerra o contra la humanidad porque estos hechos se hubieran cometido en los 25 años de vida del partido nazi y coincidieran con algunos de los 25 puntos de su ideario o con los designios del *Mein Kampf*.⁸⁶ Concretamente en relación a los crímenes contra la humanidad, tal interpretación provocó que todas aquellas actuaciones cometidas antes de 1939, y que claramente aparecían identificadas en dicha figura criminal, quedaran sin castigo, ya que para ser considerados como crímenes contra la humanidad actos de dicha naturaleza perpetrados antes de la guerra tendrían que haber formado parte de la ejecución de un complot o plan concertado cuyo objetivo era desencadenar una guerra de agresión.

Para el tribunal, la conspiración sólo se podría aplicar como elemento de penalidad cuando el acusado hubiera tenido capacidad de decisión en el plan común y hubiera conocido las consecuencias que se derivaban de sus actos. En este sentido, la conspiración sólo era posible ser encajada en el cargo de crímenes contra la paz, ya que el plan de Hitler de las guerras de agresión no podría haberse llevado a cabo sin el apoyo de militares, políticos, diplomáticos o empresarios, radicando su culpabilidad en que ellos

84- *IMT. The Trial ...*, *op.cit.*, Vol. I, pág. 223.

85- *Idem.*, pág. 219.

86- *Idem.*, pág. 224.

apoyaron el plan a sabiendas de las consecuencias que se derivaban de sus actos. Así, el tribunal rechazaba el argumento de que Hitler los había utilizado para poder materializar su guerra de agresión, ya que ellos aceptaron su papel, no pudiendo eximirse así de su responsabilidad al haber contribuido activamente a que el plan tuviera éxito.⁸⁷

Frank, Frick, Jodl, Kaltenbrunner, Keitel, Ribbentrop, Rosenberg, Sauckel, Seyss-Inquart y Streicher fueron condenados a muerte y ejecutados en la horca la madrugada del 16 de Octubre. Göring consiguió evitar la ejecución suicidándose la noche anterior al día de la ejecución al ingerir una pastilla de cianuro. Hess, Funk y Raeder fueron condenados a cadena perpetua, mientras que Schirach y Speer fueron condenados a veinte años, Von Neurath a quince años y Dönitz a diez años. Fritzsche, Von Papen y Schacht fueron absueltos, con voto particular de Iona Nikitchenko, el representante soviético.

En cuanto a las organizaciones encausadas, resultaron declaradas criminales las SS, las SD, la Gestapo, y la cúpula directiva del NSDAP, no así el Gobierno del Reich, las SA y el Estado Mayor del Ejército alemán (OKW).

87- IMT. *The Trial ...*, *op.cit.*, Vol. I, pág. 44.

Cuadro 1. Los acusados y sus condenas en la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Núremberg

Nombre	Cargos/condenados (1)	Condena
Martin Borman	3, 4	Muerte en la horca (en ausencia)
Hans Frank	3, 4	Muerte en la horca
Wilhelm Fick	2, 3, 4	Muerte en la horca
Herman Göring	1, 2, 3, 4	Muerte en la horca. (Suicidado antes de cumplir la sentencia)
Alfred Jodl	1, 2, 3, 4	Muerte en la horca
Erns Kaltrenbrunner	3, 4	Muerte en la horca
Wilhelm Keitel	1, 2, 3, 4	Muerte en la horca
Joachim von Ribbentrop	1, 2, 3, 4	Muerte en la horca
Alfred Rosenberg	1, 2, 3, 4	Muerte en la horca
Fritz Sauckel	3, 4	Muerte en la horca
Arthur Seyss-Inquart	2, 3, 4	Muerte en la horca
Julius streicher	4	Muerte en la horca
Walter Funk	2, 3, 4	Cadena perpetua
Rudolf Hess	1, 2	Cadena perpetua
Erich Raeder	1, 2, 3	Cadena perpetua
Albert Speer	3, 4	20 años
Baldur von Schirach	4	20 años
Konstantin von Neurath	1, 2, 3, 4	15 años
Karl Donitz	2, 3	10 años
Hans Fitzsche		Absuelto
Franz von Papen		Absuelto
Hjalmar Schacht		Absuelto
Gustav Krupp		Sin condena
Robert Ley		Sin condena.

Fuente: elaboración propia

(1) Cargos por los que fueron condenados:

1. Conspiración contra la paz.
2. Crímenes contra la paz y actos de agresión.
3. Crímenes de guerra.

IV- LOS OTROS PROCESOS DE NÚREMBERG. EL PROCESO DE TOKIO

El juicio a los principales responsables del régimen nazi por sus actuaciones durante la Segunda Guerra Mundial, si bien fue el de mayor trascendencia y repercusión, no fue un caso aislado. Paralelamente y con posterioridad a él, se celebraron otros procesos en los que se intentó exigir responsabilidades por los crímenes cometidos antes y después de la guerra a todo aquel que pudiera ser considerado culpable de los mismos. Así, hubo juicios en la Alemania ocupada por las cuatro potencias contra ciudadanos alemanes atendiendo a su vinculación con las políticas del régimen nazi, con una configuración de los tribunales que variaba dependiendo de la zona en la que éstos se encontraban. Y fuera de Europa, se celebró en Tokio un juicio contra los máximos responsables del Japón por actuaciones antes y durante la Segunda Guerra Mundial, con características similares al celebrado en Núremberg.

1- Los procesos en las zonas ocupadas

El 20 de diciembre de 1945 se promulgó la Ley de Control Aliado n.º 10⁸⁸ (LCA n.º 10), la cual suponía para los procesos que se celebraran en las cuatro zonas de ocupación de Alemania el mismo carácter de fundamentación jurídica que el ETMI lo fue para el proceso de Núremberg. La influencia del Estatuto de Londres era evidente, de tal modo que en su artículo 1º se establecía que formaban parte de dicha ley tanto la Declaración de Moscú de 30 de octubre de 1943 como los Acuerdos de Londres de 8 de agosto de 1945.

En cuanto al crimen contra la humanidad, se encontraba tipificado en el artículo II.1º.c, con la siguiente redacción:

Atrocidades y ofensas, incluidas pero no limitadas, por el asesinato, exterminio, la esclavitud, la deportación, la detención, la tortura, el rapto y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, fueran o no consideradas como violaciones por las leyes nacionales del país donde fueron perpetradas.

88- Ley del Consejo de control n.º 10, relativa al castigo de personas culpables de crímenes de guerra, crímenes contra la paz y contra la humanidad.

<https://avalon.law.yale.edu/imt/imt10.asp>

Varias eran las diferencias que se podían apreciar con respecto al artículo 6.c del ETMI:

- La más importante, que desaparecía la exigencia de conexión con los crímenes de guerra y los crímenes contra la paz. De esta manera, la acusación por crimen contra la humanidad podría realizarse independientemente de que el hecho imputado se hubiera cometido dentro del periodo de la contienda mundial.
- Se ampliaban los actos típicos que pudieran conformar los *murder type*, al añadirse la detención, la violación y la tortura. Al incluirse estas tres figuras, podría entenderse que ello proporcionaba al juez una mayor seguridad jurídica a la hora de interpretar qué podría considerarse acto susceptible de encuadrarse como crimen contra la humanidad. Sin embargo, con las expresiones *otros actos inhumanos* (incluida también en el artículo 6.c del ETMI) e y *incluidas, pero no limitadas*, referida ésta última a las atrocidades y ofensas, se mantenía el carácter abierto de dichos actos a la hora de interpretar su consideración como crimen contra la humanidad. De este modo, como afirma Liñán Lafuente, tal técnica parecía desviarse del espíritu que el principio de taxatividad y seguridad jurídica debe impregnar toda norma penal.⁸⁹

1.1- Tribunales norteamericanos

En la zona de ocupación estadounidense, la LCA N.º 10 fue implementada por la Ordenanza número 7 de 18 de octubre de 1946 sobre la organización y poderes de los tribunales militares. Se llevaron a cabo 12 procesos contra 177 acusados, desde mayo de 1946 hasta noviembre de 1948. La lista de los llamados “Doce juicios de Núremberg” era la siguiente:

1- El “juicio de los doctores”, seguido contra 24 médicos acusados de conspiración, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluyendo casos de esterilización forzosa y masiva de enfermos, el asesinato de 300.000 enfermos, especialmente en hospitales psiquiátricos durante el programa de eutanasia *Aktion T-4*, colaboración o participación directa en el confinamiento, tortura y exterminio de miles de personas en los campos de concentración, así como la realización de investigaciones médicas coercitivas, nocivas y letales contra prisioneros de guerra y civiles y contra pacientes en hospitales y otras instituciones médicas.

89- LIÑÁN LAFUENTE, A., *El crimen ...*, op.cit., pág. 75.

- 2- El juicio contra Erhard Milch, oficial alemán acusado de graves crímenes en campos de concentración.
- 3- El “juicio de los jueces”, seguido contra 16 abogados y jueces responsables del aparato jurídico nacionalsocialista. Fueron acusados y encontrados culpables de conspiración criminal, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, por hechos entre los que destacan la aplicación de las leyes de higiene racial y las leyes y decretos contra la población judía (Las conocidas como “Leyes de Núremberg” de 1935 y sus posteriores decretos que las desarrollaron), que suponían, entre otras consecuencias, someter a los enfermos, mediante una orden judicial, a esterilización médica, o condenar a prisión o a pena de muerte a los judíos que pudieran haber tenido relaciones sexuales con ciudadanos alemanes puros, o condenar mediante orden judicial a miles de personas a confinamiento en los campos de concentración.
- 4- El “juicio Pohl”, seguido contra la oficina *Endlösung* (Solución final), encargada administrativa de los campos de concentración y de exterminio. El nombre es debido a su jefe principal, Oswald Pohl.
- 5- El “juicio Flick”, seguido contra el industrial alemán Friedrich Flick y otros cinco empresarios alemanes por la utilización de trabajo esclavo y crímenes contra la humanidad.
- 6- El “juicio Krupp”, seguido contra los dirigentes del grupo industrial Krupp por su participación en la preparación de la guerra y la utilización de trabajo esclavo durante la misma.
- 7- El “juicio IG Farben”, contra los dirigentes de la empresa química industrial IG Farben, también por la utilización de trabajo esclavo.
- 8- El “juicio de los rehenes” o “caso austral”, contra el Alto Mando alemán por las masacres y graves violaciones de las leyes de la guerra durante la campaña de los Balcanes.
- 9- El “juicio RuSHA”, contra los promotores de la idea de pureza racial y del programa *Lebensborn*.
- 10- El juicio a los *Einsatzgruppen*, grupos militares itinerantes de las SS que practicaban el exterminio de población enemiga del ideario nazi, judíos y eslavos, principalmente.

11- El “juicio de los ministros”, contra dirigentes del régimen nazi por su participación en los diferentes crímenes cometidos tanto en Alemania como en los territorios ocupados.

12- El “juicio del Alto Mando alemán”, contra generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Alemania por la comisión de crímenes de guerra.

La jurisprudencia fue bastante dispar en la interpretación y aplicación de la LCA n° 10, cediendo en algunos casos ante la establecida previamente por el Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Por ejemplo, en el primer proceso que se llevó a cabo, el conocido como *Ärztprozess* o “juicio de los doctores”⁹⁰, en el tercer cargo de la acusación referido a la comisión de crímenes contra la humanidad, la fiscalía se remontó a hechos anteriores al 1 de septiembre de 1939 para acusar de este crimen cometido por alemanes contra alemanes. La defensa alegó que la LCA n.º 10 era una adaptación del Estatuto de Londres, por lo que la imputación del crimen contra la humanidad debía ir vinculada a su comisión dentro del periodo bélico, adoptando así un carácter subsidiario respecto a los crímenes contra la paz y los crímenes de guerra. Acogiendo la tesis de la acusación, el tribunal interpretó en su sentencia que los crímenes contra la humanidad, bajo la definición del artículo II.1º.c de la LCA n.º 10, habían alcanzado la independencia y constituían un crimen *per se*. Esta misma línea jurisprudencial fue la adoptada en el llamado *Einsatzgruppen Prozess*, dirigido contra miembros de dichos grupos militares.⁹¹

Diferente interpretación se dio en el caso *Flick*.⁹² La fiscalía entendió que la acusación a los imputados por haberse apropiado de las empresas judías en el periodo comprendido entre enero de 1936 y abril de 1945, constituía un crimen contra la humanidad debido a que tales hechos podían ser englobados dentro de las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos. En cuanto a la cuestión de la jurisdicción del tribunal respecto de la comisión de los crímenes contra la humanidad imputados en un periodo anterior al 1 de septiembre de 1939, el tribunal aceptó la limitación de éste alegada por la defensa, de manera que entendió que no podía conocer los hechos anteriores a la fecha de inicio de la contienda mundial porque la regulación de la LCA n° 10 estaba estrechamente vinculada al artículo 6.c del ETMI y a la interpretación del mismo que el TMI había efectuado en su sentencia de 1 de octubre de 1945.

90- Caso USA v. Karl Brandt et. al., *Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals*. Washington 1952, Vol. I y II.

91- Caso USA v. Ohlendorf (*Einsatzgruppen Prozess*). *Trials ...*, op.cit., Vol. IV.

92- Caso USA v. Flick et. al. *Idem.*, Vol. VI.

La otra cuestión en dicho juicio era si las incautaciones de las propiedades de los judíos, por motivos raciales, podían ser consideradas como un crimen contra la humanidad. Atendiendo a las definiciones del crimen contra la humanidad recogidas en la sentencia del TMI, el tribunal consideró que no existía ninguna referencia a la confiscación de la propiedad. Y al analizar el artículo II de la LCA n.º 10, afirmó que las expresiones *otros actos inhumanos o persecuciones* debían circunscribirse solamente a actos que afectaran a la vida y a la libertad de las personas. Así, desde el punto de vista material también obtuvo rechazo por parte del tribunal el cargo de crimen contra la humanidad por interpretar que las referidas confiscaciones no cabían en el tipo del delito imputado.

Dos cuestiones aparecieron en el debate de varios de los juicios: la necesidad de que el Estado estuviera implicado en la comisión del crimen contra la humanidad, y que los hechos enjuiciados tuvieran un carácter masivo. Destaca en este sentido el *Juristenprozess* o “juicio de los jueces”,⁹³ en el que se acusaba a 16 representantes del ámbito jurídico del régimen nazi de haber creado un sistema legislativo de persecución con el objetivo de eliminar a la oposición política. El tribunal, al afirmar que su jurisdicción ante el cargo de crimen contra la humanidad tenía un alcance limitado, declaró que no podían condenar un crimen aislado cometido por una persona individual sin una conexión con el aparato gubernamental. En este sentido, según interpretó la Corte, para juzgar actos aislados la redacción de la Ley debería haber sido *contra cualquier individuo civil (against any civilian individual)*, y no *contra cualquier población civil (against any civilian population)*, que es como aparecía recogido en la LCA n.º 10. Igualmente afirmó que el elemento de la multiplicidad o sistematicidad no era suficiente para imputar el delito, sino que el sujeto activo además debía ser consciente de que estaba actuando (o apoyando) conforme a un plan con resultados atroces para determinado tipo de población perseguida por motivos políticos, raciales o religiosos.

En dicho juicio, además, el tribunal interpretó que el dolo eventual era suficiente para fundamentar la responsabilidad de los acusados, al entender que éstos “sabían” o “podrían haber sabido” que eran culpables de participar en una organización basada en un sistema de injusticia y persecución que lesionaba el sentido moral de la humanidad.

93- Caso USA v. Joseph Altstötter et.al. *Trials ... op.cit.* Vol. III.

1.2- Tribunales alemanes

En las zonas de ocupación británica y francesa también se llevaron a cabo juicios contra responsables por la comisión de crímenes contra la humanidad. En estos casos se aplicaron conjuntamente la LCA n.º 10 y la ley penal alemana.

En la zona británica, la implementación de la LCA n.º 10 se realizó a través de la ordenanza V.O. n.º 47 de 30 de agosto de 1946. En su artículo 1 se establecía que los jueces competentes serían los tribunales ordinarios alemanes, los cuales deberían aplicar el artículo II.1 de la LCA n.º 10 en los casos en que se hubieran cometido los crímenes internacionales contemplados entre los propios alemanes o contra aquellos que no tenían una determinada nacionalidad. En la zona francesa, los procesos se llevaron a cabo por el Tribunal Militar de Raastat, aplicándose la LCA n.º 10 implementada por la ordenanza del gobierno militar V.O. Nr 173 de 23 de septiembre de 1948.

En todos estos juicios, fueron los propios jueces alemanes quienes por primera vez aplicaron la figura del crimen contra la humanidad frente a sus propios nacionales, siendo la jurisprudencia resultante bastante heterogénea, debido posiblemente al intento de cohesionar la ley de ocupación y una nueva figura criminal con la propia normativa penal alemana.

De la jurisprudencia que resultó de los procesos realizados tanto por los tribunales americanos como por los alemanes, se pueden observar las siguientes pautas:⁹⁴

- De manera unánime se acepta que no cabe la imprudencia en la comisión del delito, es decir, el dolo, perfeccionado con la mera representación de las consecuencias inhumanas que el acto pudiera provocar, es *conditio sine qua non* para que el crimen pueda ser cometido e imputado. Es más dispar la interpretación del perfeccionamiento del delito, siendo suficiente en unos casos la tentativa mientras que en otros sólo cabe la punición del delito si este es consumado.
- Respecto a la participación en el delito, es común a los tribunales americanos y alemanes que debe existir en las actuaciones criminales una conexión con el aparato estatal para perseguir o eliminar a un determinado grupo de personas. Dicha conexión debe ser conocida por el autor, pero no exige que el sujeto activo forme parte del aparato estatal.

94- LIÑÁN LAFUENTE, A., *El crimen ...*, op.cit., págs. 89-90.

- En cuanto a la temporalidad de la jurisdicción de los tribunales, en los americanos es dispar, mientras que en los alemanes es norma su extensión hasta más allá del gobierno nazi de 1933.
- Respecto a la independencia del crimen contra la humanidad, mientras que en los tribunales americanos se mantiene en varios de ellos la superposición entre los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, en los tribunales alemanes dicha conexión desaparece. De esta manera, según Liñán Lafuente, *donde por primera vez el crimen contra la humanidad se aplica de una manera autónoma es en Alemania, en el marco de la LCA nº 10 y por los propios jueces germanos.*⁹⁵

2- El proceso de Tokio

Tras la firma de la rendición japonesa el 2 de septiembre de 1945 a bordo del acorazado *Missouri*, se puso en marcha, a semejanza del de Núremberg, la creación de un Tribunal Militar Internacional para enjuiciar a los máximos responsables de las actuaciones del Japón durante la contienda mundial. Ya en la Declaración del Cairo de 1 de diciembre de 1943, los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y China habían expresado su intención de castigar los crímenes cometidos por los japoneses durante la guerra. Para la identificación de los crímenes y sus autores, se aprobó el 10 de mayo de 1944 en el seno de la *United Nations War Criminals Commission* (UNWCC) una subcomisión encargada de investigar los hechos que estaban aconteciendo en relación a la participación japonesa durante la contienda. En agosto de 1945, dicha subcomisión dio una primera lista de posibles encausados, la cual se fue incrementando hasta llegar a establecerse 26 listas con 3.147 nombres.

El 19 de enero de 1946, el general estadounidense Mc Arthur, en su condición de Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas, emitió una proclama ordenando el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (*International Military Tribunal for the Far East*). El mismo día se aprobó el Estatuto del tribunal (*Charter of International Military Tribunal for the Far East*, CIMTFE), diseñado por el que sería el fiscal jefe en el proceso, el norteamericano Joseph B. Keenan. Los crímenes de la acusación aparecían en el artículo 5 del Estatuto, casi idénticos a los del artículo 6 del Estatuto de Londres. En cuanto al crimen contra la humanidad, sí existía una diferencia en

95- LIÑÁN LAFUENTE, A., *El crimen ...*, op.cit., pág. 90.

la redacción, al eliminarse de la Carta de Tokio las palabras *contra cualquier población civil (against any civilian population)* presentes en el artículo 6.c de la de Londres, lo que supuso un cambio respecto a la consideración del sujeto pasivo del tipo penal.

A las 9.30 horas del 3 de mayo de 1946, el Tribunal Militar Internacional de Tokio (TMIT), presidido por el juez australiano William Floyd Webb, abrió la sesión inaugural. Nueve jueces conformaban en un inicio el tribunal, representando a Australia, Canadá, China, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Nueva Zelanda, Estados Unidos y la Unión Soviética (más adelante se incorporarían los representantes de la India y Filipinas).

Finalmente, fueron 28 los acusados que se sentaron en el banquillo. Supuso una sorpresa generalizada que entre ellos no figurara el máximo dignatario japonés, el emperador HiroHito. Dicha decisión, liderada por el general McArthur, fue posiblemente motivada por razones políticas, ya que, a pesar del convencimiento de la responsabilidad del emperador en los hechos enjuiciados, su condena y posible ejecución le hubieran convertido en un mártir a ojos de su pueblo, creando un ambiente de ocupación militar prolongado que no interesaba a los Estados Unidos, ni desde el punto de vista político ni económico. Según Bix, el plan de acción, llamado “Operación Lista Negra”, consistía en separar a HiroHito de los militaristas, manteniéndole como elemento de legitimación de las fuerzas de ocupación aliadas, y usando su imagen con el objeto de llevar a cabo una transformación de las estructuras medievales del Japón hacia un Estado democrático al estilo de los países occidentales.⁹⁶

El proceso de Tokio presentó algunas diferencias respecto al de Núremberg:

- El número de jueces, 4 en Nuremberg por 11 en Tokio.
- Frente a los 4 fiscales de Nuremberg, Tokio presentó un jefe del consejo de fiscales (el norteamericano Keenan) y 10 acusadores asociados a cada una de las naciones presentes en el tribunal.
- A diferencia de Núremberg, la jurisdicción del Tribunal de Tokio abarcaba un periodo temporal mayor, desde el 1 de enero de 1928 hasta el 3 de septiembre de 1945, con el objeto de justificar la argumentación de la acusación de que con sus actuaciones los acusados habían contravenido lo dispuesto en el Pacto Briand-Kellog de 1928, según el cual se declaraba ilegítimo el recurso a la guerra como instrumento de política nacional.

96- BIX, HERBERT P., *Hirohito and the Making of Modern Japan*, Harper Perennial, 2001.

- En Tokio se acusó a personas con el único cargo de crímenes contra la paz y no se condenó a ninguna organización japonesa.

- Respecto a los crímenes contra la humanidad, la omisión en el Estatuto de Tokio de las palabras *contra cualquier población civil* suponía eliminar a la población civil como el sujeto pasivo del tipo penal, desapareciendo así el significado y la función con que nació esta nueva figura criminal en Núremberg: la protección de la población civil frente a los ataques de su propio estado o de otro con motivo de una invasión. De esta manera, al no existir una identificación concreta de dicho sujeto pasivo, ello permitía a la fiscalía un mayor margen en cuanto a la atribución del crimen contra la humanidad. Según uno de los miembros del tribunal, el juez Röling, lo que se perseguía con esta ampliación del sujeto pasivo era permitir al fiscal Keenan acusar, bajo la figura del crimen contra la humanidad, por las ofensas cometidas contra el personal militar enemigo.⁹⁷

Aunque tanto en Núremberg como en Tokio, el crimen contra la humanidad aparecía vinculado a los crímenes de guerra, en el segundo no se acusó únicamente por crimen contra la humanidad, cuando se hacía referencia a esta figura se adjuntaba la coletilla “y crímenes convencionales de guerra”.

La acusación presentó 55 cargos divididos en tres grupos. El primero, del 1 al 36, comprendía la acusación de conspiración en la preparación y ejecución para llevar a cabo guerra contra varios países, es decir, el crimen contra la paz. El segundo, del 37 al 52, englobaba los asesinatos y matanzas ejecutados en el transcurso de la guerra y en quebrantamiento de las leyes y costumbres de la misma. Por último, otros crímenes convencionales de guerra y los crímenes contra la humanidad se recogían en los cargos 53, 54 y 55.

Los cargos 53 y 54 manifestaban que los acusados habían conspirado para ordenar, autorizar o permitir que comandantes japoneses, oficiales del Ministerio de Guerra y las unidades oficiales locales de los campos de trabajo y de prisioneros, pudieran quebrantar las leyes y las costumbres de la guerra contra las fuerzas armadas, los prisioneros de guerra y los civiles internados. E igualmente se acusaba al gobierno de Japón de ser responsable por haberse abstenido de adoptar las medidas necesarias para que se respetaran y no se lesionaran las leyes y costumbres de la guerra.

97- CASSESE, A./RÖLING, B.V.A. , *The Tokio Trial an Beyond*. Cambridge: Polity Press. 1993, pág. 113.

Si en la LCA n.º 10 los crímenes contra la humanidad parecían adoptar la categoría de crimen autónomo e independiente, en Tokio, de la redacción de los cargos presentados se desprendía que los crímenes contra la humanidad volvían a subordinarse a la comisión de los crímenes contra la paz y, sobre todo, de los crímenes de guerra. Los diferentes actos probados a lo largo del proceso que presentaban los rasgos típicos del crimen contra la humanidad, fueron realizados en contravención de las leyes y costumbres de la guerra al llevarse a cabo contra miembros de las fuerzas armadas de los Estados enemigos, así como contra la población civil de los mismos, no recogiendo actos que como tales constituían por sí mismos crímenes contra la humanidad. Apartándose de esta línea de la acusación, hubo dos hechos que el tribunal los interpretó sólo como crímenes contra la humanidad, no vinculados al crimen de guerra convencional: la masacre de Nankin contra la población china y el llamado *Comfort Woman*, el caso de las mujeres utilizadas como esclavas sexuales por las tropas japonesas.⁹⁸

Otro tratamiento diferente de la figura del crimen contra la humanidad desarrollado en Tokio fue que en los hechos susceptibles de ser considerados como tales se contemplaba la responsabilidad de dicho crimen por no haber evitado o prevenido que se cometieran tales hechos, es decir, la negligencia podría ser suficiente para considerar a una persona responsable de la comisión de estos crímenes por omisión.

De los cargos relacionados con los crímenes contra la humanidad, los 53, 54 y 55, nueve acusados fueron encontrados culpables, aunque ninguno de ellos sólo por ese cargo, sino que todos lo fueron a su vez o de crímenes contra la paz o de guerra.

El 4 de noviembre de 1948 se dictó la sentencia, en la que 7 fueron condenados a morir en la horca, 16 a cadena perpetua, y 2 a prisión, a 20 y a 7 años. Dos de los acusados murieron durante el proceso y el ultranacionalista Okawa fue declarado incapaz durante el

98- Inscrita dentro de la segunda guerra chino-japonesa, iniciada el 7 de julio de 1937 y finalizada, ya dentro de la contienda mundial, el 9 de septiembre de 1945, la toma de la capital china de Nanking por las tropas japonesas tuvo lugar el 13 de diciembre de 1937. Los comandantes del ejército nacionalista chino habían huido de la ciudad antes de la entrada del ejército nipón, dejando atrás a miles de soldados chinos atrapados en la ciudad amurallada. Muchos de ellos se quitaron sus uniformes y escaparon a la Zona de Seguridad preparada por los residentes extranjeros de Nanking. Los crímenes cometidos incluyeron el pillaje, la violación y la matanza de civiles y prisioneros de guerra. Aunque las cifras de fallecidos han sido objeto de discusión, se estima que pudieron alcanzar los 300.000. La fiscalía interpretó que los hechos acaecidos en Nanking deberían ser penados bajo la acusación de conspiración para cometer convencionales crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, concretamente bajo los cargos 54 y 55 de la acusación.

En cuanto al caso de las *Comfort Woman* (mujeres de consuelo o mujeres de solaz), se estima que alrededor de 200.000 mujeres sufrieron esclavitud sexual por parte de las tropas japonesas. La mayoría provenían de Corea, China, Japón y las Filipinas, incluyendo también mujeres de Tailandia, Vietnam, Malasia, Taiwan, Indonesia y de otros territorios ocupados por las tropas imperiales japonesas.

juicio. El sentir de la sentencia no fue unánime en todos los jueces, presentando tres magistrados su voto particular:

- El juez Binod Pal, representante de la India, sostuvo que todos los acusados eran inocentes.⁹⁹ En su argumentación rechazó la ley aplicable a las categorías criminales, la responsabilidad penal individual, así como la jurisdicción necesaria para condenar a los acusados, afirmando que, *en ausencia de una definición internacionalmente admitida de la noción de agresión, todo proceso como el que venía de llevarse a cabo ante el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente no era más que el proceso del vencido por el vencedor.*¹⁰⁰

- Representando a Francia, el juez Henri Bernard, aunque convencido de la culpabilidad de algunos de los acusados, entendió que no podía ser considerado válido el veredicto de un tribunal con tantos defectos procedimentales.¹⁰¹

- El juez de los Países Bajos, Henri Röling, en unos casos solicitó reducir la pena de los acusados o incluso su absolución, mientras que en otros su petición era aumentarla.¹⁰² Y no estuvo de acuerdo en la idea de la conspiración o plan común como motor de la actuación japonesa en sus agresiones a otros países, al entender que la preparación militar en vista de un conflicto probable no implicaba necesariamente un complot con miras a llevar a cabo una agresión.

99- RÖLING, B.V.A. / RÜTER, C.F., *The Tokio Judgement. The International Military Tribunal for the Far East*. University Press Amsterdam. 1977. Vol.II, pág. 1035.

100- GÓMEZ ROBLEDO A., *Los procesos de Nuremberg y Tokio. Precedentes de la Corte Penal Internacional*, Ars Iuris n.º 29 (Universidad Panamericana. Facultad de Derecho. Instituto de documentación e investigación jurídicas), enero 2003, pág.142.

101- RÖLING, B.V.A. / Rüter, C.F., *The Tokio ...*, *op. Cit.*, págs. 495-496.

102- *Idem.*, págs. 1116-1117.

V- CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE NÚREMBERG

1- Los Principios de Núremberg

Nada más finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la intención de recuperar el espíritu de la Sociedad de Naciones, se constituyó como órgano plurinacional la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya Carta de constitución se firmó 28 de junio de 1945, entrando en vigor el 24 de octubre del mismo año. Bajo los parámetros establecidos en el proceso principal de Núremberg, la nueva organización comenzó a desarrollar un cuerpo legislativo con la intención de que los criterios marcados en la Carta de Londres y en la jurisprudencia del TMI funcionaran como los nuevos principios rectores del Derecho Internacional.

El 11 de diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), en su Resolución 95 (I) declaró como Principios de Ley Internacional los criterios establecidos en el Estatuto de Londres y en la jurisprudencia de Nuremberg.

El 21 de noviembre de 1947, la AGNU, a través de las Resoluciones 174 y 177 (II), creó la *Internacional Law Comission* (ILC), recibiendo el encargo de la formulación de los Principios de la Ley Internacional reconocidos por el Estatuto de Londres y la sentencia del TMI, así como la preparación de un borrador que contuviera un código de ofensas contra la paz y la seguridad de la humanidad.

Conforme al informe elaborado por el relator especial Jean Spiropoulos, la ILC aprobó en 1950 en su segunda sesión (5 de junio–29 de julio de 1950) el primero de los encargos que había recibido a través de la Resolución 177 (II) ¹⁰³. Se trataba de un documento con 7 principios deudores de lo establecido en el Estatuto de Londres con comentarios sobre su interpretación jurisprudencial del TMI. La ILC se limitó a formular los principios establecidos en Nuremberg, sin realizar una revisión crítica de los mismos, eliminando las referencias establecidas en el Estatuto de Londres a los acusados de la Alemania nazi para que pudieran ser aplicados a toda la comunidad internacional. Dichos principios aparecían formulados de la siguiente manera:

103- *Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg and in the Judgement of the Tribunal*. Report of the ILC. Coreing second session (5 junio-29 julio). U.N. Doc. A/1316.YBILC (segunda sesión. 1950). Vol. II, págs. 374-377.

<https://www.dipublico.org/109514/formulación-de-los-principios-de-nuremberg/>

- **Principio I:** *Toda persona que cometa un acto que constituya delito de Derecho Internacional es responsable del mismo y está sujeta a sanción.*

Este principio establece la responsabilidad individual de aquel que cometiera cualquiera de los crímenes contemplados en el artículo 6 del ETMI. La norma general que sirve de fundamento al principio es que el Derecho Internacional puede imponer deberes a los individuos directamente, sin interposición del Derecho nacional del acusado.

- **Principio II:** *El hecho de que el Derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de Derecho Internacional no exime de responsabilidad en Derecho Internacional a quien lo haya cometido.*

Supone un corolario del principio I. Una vez admitida la responsabilidad de los individuos por hechos cometidos en contra del Derecho Internacional, se deriva que aquellos no pueden eximirse de su responsabilidad ante dicho derecho internacional por el hecho de que tales actos no sean considerados delictivos en el Derecho nacional de aquel que los cometió.

El Estatuto de Londres establecía tal relación entre responsabilidad nacional e internacional únicamente con respecto a los delitos contra la humanidad (artículo 6.c ETMI). La Comisión formuló en términos generales dicho principio, extendiéndolo también a los crímenes contra la paz y de guerra.

- **Principio III:** *El hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituya delito de Derecho Internacional haya actuado como jefe de Estado o como autoridad del Estado, no la exime de responsabilidad conforme al Derecho Internacional.*

Este principio recoge lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Londres, y lo manifestado por el TMI: *Quién viola las leyes no puede obtener inmunidad por el hecho de actuar en cumplimiento de las órdenes del Estado, si éste, al ordenar un acto, se excede de su competencia en Derecho Internacional.*

En este principio se eliminan la expresión *ni servirá para atenuar la pena* del artículo 7 del Estatuto, referidas a la responsabilidad, entendiendo la Comisión que la cuestión de la

atenuación de la pena es competencia exclusiva del tribunal que juzgue cada caso concreto.

- **Principio IV:** *El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al Derecho Internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción.*

Este principio se basa en lo establecido en el artículo 8 del Estatuto de Londres y en la sentencia del TMI. Conforme a esta idea, el Tribunal rechazó el argumento de la Defensa de que no cabía responsabilidad alguna de los acusados debido a que la mayoría de ellos habían actuado siguiendo las órdenes de su superior máximo, Adolf Hitler.

Con el mismo razonamiento que en el Principio III, la última frase del artículo 8 del Estatuto, *pero puede ser tomado en consideración para atenuar la pena, si el Tribunal determina que la justicia así lo requiere*, no fue mantenida en la redacción final del Principio IV.

- **Principio V:** *Toda persona acusada de un delito de Derecho Internacional tiene derecho a un juicio imparcial sobre los hechos y sobre el derecho.*

Se ratifica lo preceptuado en el capítulo del Estatuto titulado “juicio imparcial para los acusados”. Según la Comisión, la expresión “juicio imparcial” deberá entenderse teniendo en cuenta lo dispuesto al respecto en el Estatuto de Londres.

- **Principio VI:** En este principio se enumeran los delitos que se declaran punibles en el derecho internacional, estableciéndose los mismos del artículo 6 del Estatuto, a saber, delitos contra la paz, delitos de guerra y delitos contra la humanidad. Estos últimos se recogen el apartado c), con la siguiente redacción:

El asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil, o la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, cuando dichos actos se cometan o dicha persecución se lleve a cabo

en ejecución de cualquier crimen contra la paz o cualquier crimen de guerra o en relación con los mismos.

La redacción era casi idéntica a la del artículo 6.c del Estatuto de Londres, con la importante diferencia de que ahora se habían eliminado las palabras *antes o después de la guerra* en referencia a los actos cometidos. En sus comentarios, la ILC explicó que esta supresión era necesaria para enunciar el crimen de manera general, ya que en la redacción del Estatuto de Londres dichas palabras iban referidas a un conflicto concreto, el iniciado en 1939. Y, asimismo, dejó claro que dicha omisión no significaba que la Comisión considerase que el crimen contra la humanidad tuviera que ser cometido sólo durante la guerra, sino que, por el contrario, semejantes crímenes podrían tener lugar también antes de la guerra en conexión con un crimen contra la paz.

Se mantuvo la distinción entre los dos grupos del crimen del artículo 6.c del Estatuto, los *murder type*, representados por el asesinato, el exterminio, la deportación y los otros actos inhumanos (aquí no se incluyeron la detención ilegal, violación y tortura de la LCA n.º 10), y los *persecution type*, manifestados en la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos.

- Principio VII: *La complicidad en la comisión de un delito contra la paz, de un delito de guerra o de un delito contra la humanidad, de los enunciados en el principio VI, constituye asimismo delito de Derecho Internacional.*

Este principio aludía a la idea de conspiración o plan común del último párrafo del artículo 6 del Estatuto y presentada dentro del cargo primero de la acusación en el juicio de Nuremberg.

2- Nueva normativa. El Código de Ofensas Internacionales contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad

En cuanto al segundo de los encargos establecidos en la Resolución 177 (II), el Código de Ofensas Internacionales contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, su elaboración se prolongó durante casi cincuenta años y en dos fases diferenciadas. La primera abarca desde el primer mandato recibido, en 1947, hasta la presentación del primer borrador en 1954. Y la segunda comienza en 1982 y llega hasta 1996. Ese abandono durante casi treinta años se debió a la polarización del mundo en los dos grandes grupos de influencia mundial, que propició que cualquier normativa de carácter internacional, presumiblemente, no sería cumplida por cada uno de los países si ello suponía un perjuicio al bloque al que pertenecían.

En la primera fase, tras nombrar en 1949 a Jean Spiropoulos como relator especial para la creación de dicho código, la Comisión aprobó en 1954 un primer borrador. Sin embargo, la Asamblea General alegó que no era posible su aprobación si no se establecía antes una definición del crimen de agresión, regulador del crimen contra la paz contenido en el artículo 6 del Estatuto de Londres. Así, solicitó la creación de un comité especial que se encargara de definir el concepto de crimen de agresión y posponer la aprobación hasta que la cuestión quedara solucionada. Debido a lo politizado del ambiente internacional por la disputa del control entre los dos grandes bloques mundiales, dicho comité nunca llegó a crearse.

En 1974, la Asamblea General aprobó la Resolución 3314 relativa a la *Definición del crimen de agresión*, lo que permitió reanudar las discusiones acerca de la redacción del Código de Ofensas contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad. En 1981, la Asamblea General encargó a la ILC un resumen del trabajo sobre el borrador del código de ofensas atendiendo a los logros conseguidos hasta ese momento en el desarrollo del Derecho Internacional. En 1982, la ILC, en su 34 periodo de sesiones, nombró a Doudou Thiam como relator especial de dicho borrador, con el objetivo de reformar y reelaborar el proyecto abandonado en 1954. Después de varios informes presentados y corregidos a lo largo de varios años, en 1995 Thiam presentó el 13º informe a la ILC, el cual, tras varias correcciones, presentó en 1996 el borrador que debería constituir el Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad. Los tipos penales incluidos eran los crímenes de agresión (art. 16), el genocidio (artículo 17), los crímenes contra la

humanidad (art. 18), los crímenes contra el personal de las Naciones Unidas (art. 19) y los crímenes de guerra (art. 20).

Respecto al crimen contra la humanidad, el artículo 18 del borrador de 1996 establecía que:

Un crimen contra la humanidad significará cualquiera de los siguientes actos, cuando sean cometidos de un modo sistemático o a gran escala, instigado o dirigido por un Gobierno o por cualquier organización o grupo:

a) Asesinato

b) Exterminio

c) Tortura

d) Esclavitud

e) Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos, que conlleven la violación de derechos fundamentales y libertades públicas que tengan como resultado una grave desventaja para una parte de la población.

f) Deportación arbitraria y traslado forzado de la población

g) Encarcelamiento arbitrario

h) Desaparición forzada de personas

i) Violación, prostitución forzada y otras formas de abusos sexuales

j) Otros actos inhumanos causantes de graves daños psíquicos o contra la integridad mental, salud, o dignidad humana, tales como mutilaciones o graves lesiones corporales.

Pese a la importancia de la aprobación del proyecto de Código de 1996, la definición del crimen contra la humanidad no fue universalmente aceptada, siendo objeto de posteriores debates y de proyectos de codificación, particularmente con motivo de la redacción de los estatutos de los tribunales *ad hoc* creados por el Consejo de Seguridad en los casos de Yugoslavia y de Ruanda.

3- Nueva Jurisdicción

A comienzos de la década de los 90, tuvieron lugar en los territorios de la República Federal de Yugoslavia y de Ruanda una serie de actos violentos teñidos de diferentes elementos religiosos, raciales y políticos, que llevaron a la creación de dos tribunales penales internacionales, creados *ad hoc* por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Si en Núremberg y Tokio el tratamiento que se dio al crimen contra la humanidad fue de un modo general, en estos dos tribunales los actos que conforman el tipo penal ya se analizan de manera separada, pudiendo encontrarse, por ejemplo, en la misma sentencia una condena por crimen contra la humanidad de asesinato y otra por esclavitud.

3.1- El Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia

Como consecuencia de la autoproclamación de independencia, a partir de junio de 1991, de varios de los territorios que formaban la República Federal Socialista de Yugoslavia, se originó un conflicto bélico entre aquellos y Serbia, integrante igualmente del Estado yugoslavo, que se negaba a dichos anhelos independentistas al propugnar la idea de una gran república bajo su liderazgo. Ante el conocimiento de las atrocidades que se iban cometiendo en la contienda, el Consejo de Seguridad decidió intervenir recopilando toda la información al respecto.

Después de diferentes informes y resoluciones por parte de la ONU, el 22 de febrero de 1993, el Consejo de Seguridad anunció en la Resolución 808 el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional para la persecución y enjuiciamiento de aquellas personas responsables de violaciones de la Ley Internacional Humanitaria cometidos en el territorio de la antigua Yugoslavia desde el 1 de enero de 1991 (TPIY).¹⁰⁴ Tres meses después, el 25 de mayo de 1993, el Consejo de Seguridad, al amparo del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, adoptó el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia en la Resolución 827.¹⁰⁵

El artículo 5 del TPIY configuró el crimen contra la humanidad de la siguiente manera:

El Tribunal Internacional está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de los siguientes crímenes cuando éstos han sido cometidos en el curso de un

104- U.N Doc. S/RES/808 (1993), 22 de febrero de 1993.

105- U.N Doc. S/RES/827 (1993), 25 de mayo de 1993.

conflicto armado, de carácter internacional o interno, y dirigidos contra cualquier población civil:

a) Asesinato

b) Exterminación

c) Reducción a la servidumbre

d) Expulsión

e) Encarcelamiento

f) Tortura

g) Violaciones

h) Persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos

i) Otros actos inhumanos

Son dos los ejes sobre los que giran los actos relacionados en el artículo: su comisión dentro un conflicto armado, internacional o nacional, y dirigidos contra una población civil. En cuanto a la conexión de nuevo del crimen contra la humanidad con un conflicto bélico, el tribunal, basándose en la sentencia surgida en el proceso contra Tadic,¹⁰⁶ sentó la jurisprudencia de que la conexión con un conflicto armado era calificada como una limitación de la jurisdicción del tribunal, siendo suficiente con que la ofensa se produjese durante, o en el curso de, un conflicto armado, con una determinada limitación geográfica y temporal, pero que no era necesario que los actos enjuiciados se tuvieran que producir en el fragor de la batalla, ni tampoco exigible que el autor persiguiera unos motivos similares a los que rodeaban el conflicto bélico. Según Liñán Lafuente, *aunque lo apropiado hubiera sido eliminar toda referencia al contexto bélico, una vez incluido, esta*

106- *International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991, Prosecutor v. Tadic, Jurisdiction, Case n. IT-94-I-T, Trial Chamber, 10 August 1995.*

Dusko Tadic, conocido como “el carnicero de Omarska”, era miembro desde 1991 del Partido Nacionalista Serbio (SDS), desde donde comenzó a colaborar estrechamente con las fuerzas de la JNA, el extinto Ejército Popular Yugoslavo, de fuerte inclinación nacionalista serbia y musulmana. El TPIY encontró a Tadic culpable de 12 de los 34 cargos formulados, siendo condenado a 20 años de prisión, con prohibición de ser liberado antes del 14 de julio de 2007, tras no mostrar señal alguna de arrepentimiento por sus actos y por no haber cooperado de manera relevante con el Fiscal del Tribunal. Fue encontrado responsable por los asesinatos, maltratos y posterior desplazamiento forzoso de la población, ya como autor principal o accesorio, en los ataques sobre la población de Kozarac en Opstina Prijedor, en el noroeste de Bosnia.

*es la interpretación que resulta más acorde con la costumbre internacional y la evolución doctrinal del crimen contra la humanidad.*¹⁰⁷

En cuanto a los elementos generales del crimen contra la humanidad, su identificación más clara aparece en la sentencia de primera instancia de 22 de febrero de 2001 referente al proceso contra Kunarac.¹⁰⁸ En dicha sentencia, el tribunal elaboró su clasificación basándose en el ataque como elemento diferenciador:

El artículo 5 del Estatuto del Tribunal contempla una lista de ofensas, las cuales deben ser cometidas en el contexto de un conflicto armado y como parte de “un ataque directo contra cualquier población civil” y ha de ser perpetrado junto con los siguiente cinco subelementos:

- Debe producirse un ataque.*
- Los actos del autor deben ser cometidos como parte de ese ataque.*
- El ataque debe ser “dirigido contra cualquier población civil”.*
- El ataque debe ser “generalizado o sistemático.*
- El autor debe ser consciente del contexto general en el cual sus actos ocurren y conocer que estos actos son parte del ataque.*

Así, el ataque aparece como el medio por el que los elementos recogidos en el artículo 5 del Estatuto del TPIY alcanzan la calificación de crimen contra la humanidad. Los actos criminales deben realizarse en el marco de un ataque, por lo que es necesario que exista un mínimo elemento organizativo para poder identificar aquel. Aunque ello no significa que tales actos deban ser cometidos en el momento del ataque, sino que es suficiente con que exista una conexión entre ambos para así no ser considerados como actos aislados o conductas individuales en las que el sujeto actúa solo, casos en los que el autor sería inimputable de la comisión del crimen contra la humanidad.

En esa misma sentencia, el tribunal establece que tal conexión consiste en la comisión de un acto que, por su naturaleza, o consecuencias, sea objetivamente parte del ataque, junto con el conocimiento por parte del acusado (*mens rea*) de que existe un ataque

107- LIÑÁN LAFUENTE, A., *El crimen ...*, op.cit., pág. 131.

108- *International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991, Prosecutor v Kunarac, Jurisdiction, Case n. IT-96-23 & 23/1, Trial Chamber, 22 february 2001.*

contra la población civil y que su acto es parte de éste. Y que ese conocimiento del ataque por el autor del acto criminal no tiene porqué ser exhaustivo, sino que basta con que se haya planteado el riesgo de que sus actos puedan considerarse como parte de un ataque contra la población civil. En este sentido, el dolo eventual¹⁰⁹ sería suficiente para que la conexión entre ataque y acto se perfeccione.

3.2- El Tribunal Penal Internacional para Ruanda

En abril de 1994 se produjo la muerte del presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, de etnia hutu, al estrellarse el avión en el que iba a bordo. Los hutus acusaron a los tutsis, la otra etnia que formaba la población en Ruanda, de que no se trató de un accidente, sino que fue realmente un atentado cometido por ellos, lo que dio lugar a toda una serie de actos de venganza que se extendieron hasta finales de octubre de 1994.

El Comité de Expertos designado por la ONU para investigarlos, nombrado el 1 de julio del mismo año, entendió que se estaban cometiendo actos de genocidio contra la etnia tutsi por parte de los hutus, violaciones sistemáticas y generalizadas de la Ley Internacional Humanitaria, y la comisión masiva de crímenes contra la humanidad. El 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 955 por la que se establecía un Tribunal Penal Internacional para la persecución de los responsables de dichos crímenes.¹¹⁰ A diferencia del caso yugoslavo, articulado en dos etapas, en Ruanda una sola resolución fue suficiente para la puesta en marcha del tribunal.

Mientras que en Yugoslavia se introdujo la conexión del conflicto armado con el crimen contra la humanidad, el carácter étnico presente en el caso de Ruanda llevó a exigir además razones discriminatorias para que la comisión del crimen pudiera perfeccionarse. La definición del crimen contra la humanidad aparecía en el artículo 3 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR):

El Tribunal Internacional para Ruanda está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de los siguientes crímenes cuando estos han sido cometidos en el curso de un ataque generalizado y sistemático, y dirigidos contra cualquier

109- Se habla de dolo eventual cuando el autor se representa como probables las consecuencias antijurídicas de su actuación y, pese a ello, actúa asumiéndolas. Así, en el dolo eventual “querido” es lo que el autor ha “asumido”. Ver COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T.S, *Derecho Penal. Parte General*. Tirant lo Blanch, 1990, pág. 463.

110- U.N Doc. S/Res/955 (1994), 8 de noviembre de 1994. El nombre completo fue *International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwanda Citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States between 1 January and 31 December 1994*.

población civil en razón de su nacionalidad o pertenencia a un grupo político, étnico, racial o religioso:

a) Asesinato.

b) Exterminación.

c) Reducción a la servidumbre.

d) Expulsión.

e) Encarcelamiento.

f) Tortura.

g) Violaciones.

h) Persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos.

i) Otros actos inhumanos.

Al igual que en Yugoslavia, en los elementos del crimen se exige que el acto criminal forme parte de un ataque, generalizado y sistemático, y que esté dirigido contra la población civil. Además, debido a las características del conflicto que se vivió en Ruanda, se incorpora la exigencia de que tal ataque sea cometido por un motivo discriminatorio, *en razón de su nacionalidad o pertenencia a un grupo político, étnico, racial o religioso*, para que el tribunal pudiera conocer del mismo. Ante la duda de qué es lo que debe ser cometido por motivos discriminatorios, si el ataque en sí o el acto que provoca la comisión de un delito subyacente (*actus reus*), tras varias discrepancias en las sentencias emitidas en los diferentes procesos, fue la sala de apelaciones del caso Akayesu la que estableció definitivamente el significado de dicho elemento del tipo.

Debido a lo específico de los sucesos acontecidos en Ruanda, la jurisdicción del tribunal sobre los crímenes contra la humanidad quedaba circunscrita a los casos en que se hubieran cometido por razones discriminatorias. De manera que ese elemento extraño en la parte general de la figura criminal, se debería interpretar como una mera limitación de la jurisdicción del tribunal, pero no como un elemento del tipo penal. Así, es el ataque el que debía llevarse a cabo por los motivos tasados y no el *actus reus*. De manera que el elemento subjetivo del tipo o *mens rea* se concreta en el conocimiento del acusado de que la comisión de su acto concreto estaba dentro de un ataque con motivos

discriminatorios contra la población civil, aun cuando no tuviera tal intención discriminatoria cuando cometió su actuación contra un víctima particular. Por lo tanto, lo requerido es una conexión del acto criminal con el ataque por motivos discriminatorios, no siendo necesario probar el elemento teleológico discriminatorio del autor en cada acto.¹¹¹

3.3- La Corte Penal Internacional

Con posterioridad al proceso de Núremberg, la posibilidad de una jurisdicción penal internacional apareció prevista en dos convenios internacionales, el Convenio para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948 (art. 6) y la Convención contra el Apartheid de 1973 (art.5). Pero la puesta en marcha efectiva para la creación de tal tribunal internacional, que finalmente fue la actual Corte Penal Internacional (CPI), surgió por una vía imprevista.

En 1989, durante una sesión especial de la Asamblea General de la ONU para tratar el problema del tráfico de drogas, Trinidad y Tobago propuso el establecimiento de un tribunal penal internacional especializado en ese tipo de actuaciones criminales. Ante dicha propuesta, la Asamblea General encargó a la *International Law Commission* un informe sobre la posibilidad de perseguir a personas acusadas de tráfico internacional de drogas a través de una Corte especializada. Después de varios informes presentados por la ILC, el emitido en 1995 se convirtió en la base sobre la que la Asamblea General estableció, mediante la Resolución de 11 de diciembre de 1995, el “Comité Preparatorio para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional”, que debería ser examinado por una conferencia internacional. En diciembre de 1997, la Asamblea General convocó una

111- Tribunal Penal Internacional para Ruanda Caso N° ICTR-96-4-T Fiscal vs. Jean Paul Akayesu Sentencia del 2 de septiembre de 1998.

https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/IV.%20Tribunal%20Penal%20Internacional%20para%20Ruanda_1.pdf

En su sentencia de 2 de septiembre de 1998, el TPIR declaró culpable a Jean Paul Akayesu del crimen de genocidio y de crímenes contra la humanidad, por participar y supervisar determinados actos mientras desempeñaba su cargo de alcalde de la ciudad ruandesa de Taba. Fue la primera vez en la historia que una Corte internacional condenó a alguien como responsable del crimen de genocidio. De esta manera, supuso la primera concreción de los principios recogidos en la Convención del Genocidio de 1948. La distinción del genocidio con el crimen contra la humanidad radica en el sujeto pasivo del delito. Mientras que en el crimen contra la humanidad la finalidad es proteger a la población civil de ciertos ataques, en el genocidio lo es la represión de actos que atenten contra la existencia de determinados grupos humanos en atención a criterios raciales, religiosos o políticos que conforman aquellos. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda lo explicó de la siguiente forma: *Los crímenes contemplados en el Estatuto –genocidio, crímenes de lesa humanidad (...)– tienen diferentes elementos y se proponen proteger diferentes intereses. El tipo criminal de genocidio aparece para proteger ciertos grupos del exterminio o intento de exterminio. El concepto de crímenes de lesa humanidad existe para proteger a la población civil de las persecuciones (...) Estos crímenes tienen diferentes propósitos y contemplan la protección de bienes jurídicos distintos.*

conferencia diplomática en Roma con vistas a adoptar la Convención para el establecimiento de una corte Penal Internacional. En la última sesión de dicha conferencia, celebrada del 15 de junio al 17 de julio de 1998, se aprobó el llamado Estatuto de Roma (ER), entrando en vigor cuatro años después, el 1 de julio de 2002.¹¹²

En el artículo 9 del Estatuto de Roma, se contempla la creación de los Elementos de los Crímenes, *que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto*, texto de apoyo al Estatuto que fue adoptado en septiembre del año 2002.

El crimen contra la humanidad en el ER aparece recogido en el artículo 7:

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

112- U.N Doc. A/CONF/.183/2/Add.1, de 14 de Abril de 1998.
[https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute\(s\).pdf](https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo 1:

a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;

b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;

c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;

d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;

e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;

f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;

g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;

i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la que antecede.

Al analizar los elementos del tipo del artículo 7, lo primero que se observa es que las conductas a las que se atribuye la comisión del crimen contra la humanidad deben realizarse en un contexto determinado, el de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. La exigencia de que se tenga que actuar en ese contexto, no impide que se pueda imputar como crimen contra la humanidad la comisión por el acusado de un único acto, siempre que el mismo se lleve a cabo como parte del ataque generalizado o sistemático. Dicho ataque no tiene por qué ejercerse dentro de un conflicto bélico, de manera que el crimen contra la humanidad se independiza definitivamente de la conexión con la guerra.

En cuanto a los requisitos del ataque, generalizado o sistemático, son alternativos. El primero es un elemento cuantitativo, es decir, implica que los actos se dirigen contra una multitud de víctimas. En este sentido, es suficiente que el ataque se dirija contra un grupo concreto dentro de la población civil, identificado por su etnia, religión u otra orientación, es decir, no es necesario que toda la población de un Estado deba ser objeto del ataque.

Asimismo, no se requiere que la nacionalidad de la población sea la misma que la del autor.

En cuanto al carácter sistemático, se trata de un requisito cualitativo, se exige la comisión repetida o continua de los actos conforme a un plan preconcebido. Así, el ataque supone una actuación bajo los parámetros de una política de un Estado o de una organización. Sobre este último elemento, la organización, se ha debatido sobre si cualquier tipo de organización criminal con capacidad de atentar de forma planificada u organizada contra un gran número de personas podría cometer un crimen contra la humanidad. La doctrina ha estado dividida en este punto. La CPI ha afirmado que tal planteamiento debe resolverse caso por caso. Además, menciona, sin carácter exhaustivo, una serie de criterios orientativos a la hora de tomar esta decisión:¹¹³

- Si el grupo se encuentra bajo la autoridad de un mando o ha establecido un tipo de autoridad jerárquica.
- Si el grupo posee los medios para llevar a cabo un ataque generalizado o sistemático contra una población civil
- Si el grupo ejerce su control sobre una parte del territorio o el Estado.
- Si el grupo tiene como propósito principal llevar a cabo actividades criminales contra la población civil.
- Si el grupo articula, explícita o implícitamente, la intención de tal ataque.
- Si el grupo forma parte de uno mayor, el cual cumpla alguno o todos de los criterios enunciados.

Según Liñán Lafuente:

El Estatuto lo único que exige es una política proveniente de un plan trazado por una estructura organizada, que tenga el potencial suficiente para desencadenar un ataque contra una población civil, lo suficientemente grave para calificarse como crimen contra la humanidad (...) Por lo tanto, el foco no ha de ponerse en la naturaleza de la organización, sino en el tipo de ataque, que sólo podría ser típico

113- ICC, PTC II, “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya”, cit., § 93; PTC III, “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d'Ivoire”, 3.10.2011, § 46; Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, PTC II, “Decision on the confirmation of charges” (ICC-01/09-01/11 1/139), 23.01.2012, § 185

si la organización que lo ejecuta cuenta con la estructura y el potencial suficiente para completar un ataque generalizado o sistemático en el que se cometan los delitos subyacentes específicos del crimen contra la humanidad. ¹¹⁴

Según el apartado 3 de la introducción al artículo 7 del Estatuto, recogida en el texto de los Elementos de los Crímenes, *la “política de cometer ese ataque” requiere que un Estado o una organización promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil*¹¹⁵. Sin embargo, en la nota a pie de página n.º 6 del mismo texto se añade que no se excluye que *en circunstancias excepcionales* tal política pudiera ser llevada a cabo mediante una omisión deliberada de actuar conscientemente a estimular el ataque, a pesar de lo cual se aclara que la simple ausencia de acción gubernamental o de la organización no es suficiente sin más para la afirmación de tal política.¹¹⁶ En opinión de Gil y Gil, esto debe interpretarse en el siguiente sentido:

*No basta una inactividad política debida a mera negligencia o incapacidad de un Estado o una organización, pero sí debe admitirse, en una interpretación teleológica y sistemática, la mera tolerancia dirigida conscientemente a posibilitar la comisión de los crímenes, tal y como han establecido algunas decisiones de los tribunales.*¹¹⁷

En cuanto al tipo subjetivo o *mens rea*, el que se exija que la actuación del autor del delito se enmarque en el contexto de un ataque generalizado o sistemático, conlleva que para tal comisión no cabe la imprudencia, debe ser realizado con dolo por parte del autor. Así lo señala expresamente el art. 7, cuando establece que los actos enumerados a continuación deben realizarse como parte del ataque y *con conocimiento de dicho ataque*. Respecto al grado de conocimiento exigible de dicho contexto, los propios Elementos de los Crímenes aclaran que no es necesario que el sujeto tenga que conocer todos los detalles del plan o política del Estado o de la organización. El autor de un crimen contra la humanidad debe ser consciente de la existencia de un ataque en general y de que su acto, al ser realizado en dicho contexto, está relacionado con el mismo, pero no se le puede exigir la consciencia de que existe un determinado plan o política.

114- LIÑÁN LAFUENTE, A., *El crimen ...*, op.cit, págs. 200-201.

115- La Corte Penal Internacional. Los Elementos de los Crímenes, U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000). <http://hrlibrary.umn.edu/instreet/S-iccelementsofcrime.html>

116- *Idem*.

117- GIL Y GIL, A., *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, N.º 10, abril – septiembre 2016, pág. 206. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/3059>

VI- CONCLUSIONES

El concepto actual de crimen contra la humanidad es producto, como se ha podido observar, de una larga evolución en la que la influencia de la normativa y la jurisprudencia creada en Núremberg se ha concretado en la formulación de los denominados Principios de Núremberg, el intento de los proyectos de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, y en la aparición de los estatutos y jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, todo ello cristalizado en el art. 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, completado por el documento Elementos de los Crímenes, que sirve para la interpretación del Estatuto.

Así, tal como hemos referido en el presente trabajo, aunque anteriormente a Núremberg hubo en diferentes momentos de la Historia intentos de enjuiciamiento de actos que revestían elementos propios del crimen contra la humanidad, se puede afirmar sin ambages que fue en el proceso celebrado en la ciudad alemana donde por primera vez apareció definida con más o menos precisión dicha figura jurídica tal como la conocemos hoy día. La imputación de tales hechos como delito surge en ese momento histórico.

A pesar de la relevancia histórica y jurídica del proceso como punto de partida en la configuración posterior del crimen contra la humanidad, ello no ha impedido la existencia de diferentes críticas a su creación y desarrollo. Juicio de vencedores contra vencidos, tribunal imparcial, vulneración de los principios de legalidad penal por la creación *ex post facto* de la legislación establecida para el proceso, son algunos de los principales ataques lanzados contra el juicio desarrollado en Núremberg.

Así, las conclusiones obtenidas del presente estudio serían las siguientes:

PRIMERA. - Entendemos correcta la postura que afirma que el proceso de Núremberg supuso un juicio de vencedores contra vencidos, en el sentido de que sólo fueron enjuiciados únicamente los hechos cometidos por la Alemania nazi, quedando impunes los llevados a cabo por las potencias vencedoras durante el conflicto.

Evidentemente, existieron unos hechos irrefutables y de una magnitud tal que sostenían la base para el enjuiciamiento de los responsables del régimen nazi. Pero a lo largo de la Segunda Guerra Mundial hubo igualmente actos llevados a cabo por las potencias vencedoras susceptibles de ser imputados como crímenes en un sentido similar por los que se acusaba a los dirigentes alemanes. Ejemplos hay varios:

- Se podrían interpretar como crímenes de guerra los bombardeos masivos de ciudades alemanas con un dudoso valor militar o estratégico que los justificara, siendo su aparente objetivo el quebrantamiento de la moral del pueblo alemán. Semejante valoración cabría en el lanzamiento por parte de los Estados Unidos de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, provocando una masacre en la población civil con una falta de justificación militar semejante al caso anterior, y en un momento en el que la guerra estaba ya decantada casi de manera definitiva a favor de los norteamericanos.

También hubiera sido posible imputar como crimen de guerra la ejecución por parte de las tropas rusas, sin ningún tipo de juicio previo, de unos 22.000 militares y oficiales polacos en el bosque de Katyn, próximo a la localidad de Smolensk (Rusia), lo que se conoce como “masacre de Katyn”.¹¹⁸ Durante el juicio de Núremberg, la acusación rusa pretendió atribuir a los alemanes la autoría de tal hecho. Sin embargo, conforme a un informe de mayo de 1943, forenses de países neutrales y de la Cruz Roja Internacional concluyeron, tras numerosos análisis, la imposibilidad de atribuir esa masacre a Alemania, simplemente por la fecha en que se dató el asesinato de los polacos, abril de 1940. En 1990, tras la apertura política de la Unión Soviética motivada por el proceso de la *Perestroika*, las autoridades rusas reconocieron que fueron las tropas rusas las autoras de dicha masacre.

- Como crimen contra la paz igualmente podrían haberse imputado actuaciones de la Unión Soviética, tales como la invasión de Finlandia en otoño de 1939 o la ocupación parcial de Polonia tras su reparto con Alemania, establecido en el Pacto de no agresión firmado entre los dos países, el llamado Pacto Ribbentrop-Molotov, en honor a los dos ministros de asuntos exteriores de los respectivos países. Dicho pacto era desconocido por los otros países del bando aliado hasta el mismo proceso de Núremberg, en cuyo transcurso fue revelado por las defensas alemanas.

118- ETKIND, A./FINNIN, R. (Coord.), *Remembering Katyn*, Cambridge: Polity Press, 2012

- Y reconocibles como crímenes contra la humanidad también pudieron entenderse las violaciones masivas de mujeres alemanas en el transcurso del avance de las tropas aliadas hacia Berlín. Atribuidas en su mayoría a las tropas soviéticas, en señal de venganza ante las tropelías realizadas por la Alemania nazi años antes contra su pueblo, los ejércitos francés y norteamericano también fueron partícipes de tales actuaciones criminales.¹¹⁹

Es decir, hechos imputables en las categorías criminales que se presentaron en las acusaciones de Núremberg existieron en ambos bandos durante la contienda. Si bien es cierto que los atribuidos al régimen nazi, como los relativos a la llamada “solución final de la población judía”, presentaban una magnitud y sistematicidad que empujaban los que realizaron las potencias vencedoras, no evita que los elementos que conformaban estos últimos fueran perfectamente asumibles en los crímenes imputados al bando alemán durante el proceso de Núremberg. El tribunal se justificó amparándose en que carecía de la jurisdicción necesaria para ello conforme a lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar acordado en Londres. En ese sentido, la decisión del tribunal podía reconocerse como ajustada a Derecho, ya que ciertamente el Estatuto sólo aludía al enjuiciamiento de los crímenes cometidos por las potencias del Eje. Pero precisamente es ahí, en el basamento normativo del tribunal y no en la decisión final de éste, donde cabe sustentar la acusación de juicio de vencedores a Núremberg, de forma que los hechos cometidos por las potencias vencedoras quedaban a salvo de un cualquier enjuiciamiento.

SEGUNDA. - Creemos que resulta igualmente asumible otra de las objeciones a Núremberg: la ausencia de imparcialidad del proceso. Dicha postura se sustenta, por un lado, en que no resulta aceptable desde un punto de vista de equidad jurídica procesal que la nacionalidad de los miembros del tribunal fuera la misma que la de las potencias que formaban la acusación, y por otro, en la propia configuración procesal del juicio, con tintes discriminatorios hacia las defensas que propiciaban una posible vulneración del principio de igualdad de parte que debe regir todo proceso judicial.

119- BIDDISCOMBE, P., *Dangerous liaisons: the anti-fraternization movement in the U.S. occupation zones of Germany and Austria, 1945-1948*, Journal of Social History, Oxford University Press, 2001, Vol. 34, Núm. 3, págs. 611-647

Bajo las pautas de la *realpolitik*, la perspectiva de que se pudiera llegar a absolver a los acusados si les enjuiciaba un tribunal formado por países neutrales en el conflicto bélico, suponía una posibilidad inaceptable para las potencias vencedoras, lo que claramente influyó en la configuración final del proceso celebrado en Núremberg. Si se hubiera adoptado exclusivamente un punto de vista jurídico, lo más apropiado es que, tanto en la redacción de la legislación aplicable como en la formación del tribunal, deberían haber participado miembros de naciones neutrales durante la contienda mundial, posibilitando incluso la presencia de jueces alemanes exentos de responsabilidad por las políticas del régimen nazi. Ello hubiera permitido presentar el proceso con el aura de neutralidad y legitimidad exigible a todo procedimiento judicial.

Tal apariencia de imparcialidad se veía reflejada igualmente en la estructura procesal del juicio, configurada de tal manera que propiciaba que la posición de las defensas quedaba en clara desventaja frente a la de las acusaciones, en detrimento así del principio procesal de igualdad de partes (*audiatur et altera pars*). Por ejemplo, la fase de instrucción previa al juicio, constituida por la labor de investigación, búsqueda de pruebas e interrogatorios de los acusados fue llevada a cabo exclusivamente por personal civil y militar del bando vencedor. Ello se vio favorecido por la atribución al proceso de los rasgos propios del sistema anglosajón del *Common law*, en el que la posición del Ministerio Fiscal se decantaba totalmente favorable a la parte acusadora, no teniendo en cuenta la posición de la defensa.

En concreto, en el interrogatorio de los acusados en tal fase preliminar fueron obviados derechos elementales del detenido, asentados y reconocidos en las normas procesales de los países vencedores. Así, se omitió la presencia en dichos interrogatorios de un abogado que asistiera o pudiera asesorar al detenido respecto de la conveniencia de responder a determinadas preguntas que perseguían respuestas claramente incriminatorias, o sobre la necesidad de guardar silencio ante determinadas cuestiones ajenas a la acusación formal de la que serían objeto algunos meses después¹²⁰.

En la misma línea, se podría añadir que no existió una instancia superior al Tribunal de Núremberg a la que apelar y obtener la revisión del juicio. Tal como establecía el artículo 26 ETMI: (...) *la sentencia del tribunal respecto de la culpabilidad o inocencia de un acusado (...) será firme y no podrá ser recurrida*. Sí se establecía que las condenas se

120- OVERY, R., *Interrogatorios ... op.cit.*, pág 83.

ejecutaran de conformidad con las órdenes del Consejo de Control para Alemania, el cual podría reducir o modificar las condenas (artículo 29 ETMI). Pero teniendo en cuenta que dicho Consejo se encontraba representado por las autoridades militares de los cuatro países de ocupación de Alemania, es legítimo presuponer una sombra de duda acerca de la imparcialidad de sus decisiones.

TERCERA. - Rechazando una postura positivista estricta o voluntarista del Derecho, consideramos que la legislación bajo la que se rigió el proceso establecida en el Estatuto de Londres no supuso una vulneración del principio de legalidad de los delitos y las penas, recogido en la fórmula *nullum crimen nulla poena sine lege*.

Respecto a la acusación de la inexistencia de un texto legal que recogía los crímenes imputados en el momento en que estos fueron cometidos (*nullum crimen sine lege*), imputando así al tribunal una creación *ex post facto* de tales crímenes, es cierto que, a excepción de los crímenes de guerra, los otros dos presentes en la acusación, los crímenes contra la paz y los crímenes contra la humanidad, no existían configurados como tales delitos en ningún código penal ni en ninguno de los tratados internacionales de la época, es decir, no existía una tipicidad penal reconocible internacionalmente para los hechos en que se basaban tales imputaciones. Pero no lo es menos, refiriéndonos concretamente al crimen contra la humanidad, que, aunque en aquel momento no tenían asignados los hechos incluidos en la imputación de la figura creada *ex novo* una calificación jurídica concreta en ningún texto legal, objetivamente atacaban de manera tan evidente bienes jurídicos inherentes a la vida humana y en una dimensión tal, que la ausencia de castigo de tales actos hubiera ido en contra del más mínimo sentido de justicia.

El argumento de las defensas basado en el desconocimiento por parte de los acusados de la existencia de tales crímenes contra la humanidad por no estar tipificados en ningún texto legal, podría haberse admitido desde un punto de vista positivista estricto o voluntarista del Derecho. Pero el tribunal, correctamente en aras de un espíritu de justicia necesario ante la dimensión de las atrocidades cometidas, se acogió a una interpretación iusnaturalista del Derecho, por el que los acusados no podían justificarse de ningún modo en un desconocimiento de la ilegalidad de dichos actos ya que eran conscientes de la

vulneración de bienes jurídicos inseparables de la condición humana que se provocaba con su comisión.

En cuanto a la otra vertiente del principio de legalidad, la prohibición de aplicar una pena en ausencia de un norma legal que tipifique los hechos en el momento en que fueron cometidos (*nulla poena sine lege*), es cierto que la penalidad impuesta a los condenados se estableció con posterioridad al momento de comisión de los hechos, a través del Estatuto de Londres, en su artículo 27: *En caso de dictar una sentencia condenatoria, el Tribunal podrá imponer la pena de muerte o la que estime conveniente y justa*. Y que, conforme a dicha redacción, se otorgaba al tribunal una discrecionalidad que chocaba con los principios de taxatividad y seguridad jurídica que rigen la norma penal. Pero, por otro lado, en conexión con la línea argumental anteriormente referida a la primera de las variantes de principio de legalidad, los acusados difícilmente podían alegar que eran desconocedores de la posibilidad de una penalidad semejante ante la comisión de tales hechos si éstos hubieran sido enjuiciados por tribunales ordinarios de la época, ya fueran de su misma nacionalidad o de aquella en cuyo territorio fueron cometidos.

CUARTA. - Consideramos que la verdadera valía del proceso de Núremberg radica, al introducirse por primera vez en la Historia como delito tipificado el crimen contra la humanidad, en que provocó el despertar de una conciencia de la comunidad internacional, hasta ese momento prácticamente inexistente, dirigida a la protección de toda una serie de bienes jurídicos indisociables a la dignidad de la vida humana. De esta manera, el proceso se convirtió en el germen de toda una normativa y jurisprudencia internacional posterior sobre la regulación de los derechos humanos.

Además de la incorporación del crimen contra la humanidad como nueva figura criminal, cabe en el haber del proceso de Núremberg el reconocimiento posterior como delito con entidad propia a una figura delictiva con elementos afines, y surgida en paralelo, al crimen contra la humanidad: el genocidio. A pesar de que no se le atribuyó en las acusaciones la consideración de crimen independiente, se dio a conocer ante la comunidad internacional en el proceso al ser referido dentro de algunas de las alegaciones de la acusación de crímenes de guerra.

Además de esa función creadora de nuevas figuras criminales, también es en Núremberg donde se establecen unas nuevas pautas en relación a la responsabilidad penal internacional de los individuos. Así, por un lado, el establecimiento de la responsabilidad penal individual por actos de Estado, personificada tanto en los dirigentes de los órganos que lo conforman como en los propios autores materiales, de manera que ya no cabe la justificación del acto amparándose en que fue realizado en el ámbito de una actuación estatal. Y por otro, la limitación de la soberanía estatal cuando bajo el amparo de ésta se realizan lesiones graves de los derechos humanos, es decir, no cabría alegar la soberanía del Estado como escudo ante la comisión de hechos atentatorios contra los derechos humanos, por lo que se responsabilizaría de éstos ya fuera a los autores materiales o a sus inspiradores.

QUINTA. - El proceso de Núremberg interpretó de manera *sui generis* principios de Derecho penal, tanto sustantivos como procesales, asentados en los ordenamientos jurídicos de la época. Pero no se pueden olvidar las circunstancias históricas que lo rodearon. Se trató de un tribunal militar excepcional, encargado de juzgar unos hechos de una dimensión no vista hasta ese momento por la humanidad, además de ser la primera vez que se creó un tribunal internacional penal destinado a juzgar a los mandatarios de un Estado soberano.

Así, entendemos que estamos ante un juicio que fue necesario, con el objeto de que no quedaran impunes las atrocidades cometidas por los dirigentes políticos y militares del régimen nazi, pero sin olvidar al mismo tiempo sus irregularidades jurídicas. Éstas venían propiciadas por el derecho que se arrogaron las potencias vencedoras de juzgar a los vencidos, omitiendo cualquier examen de sus propios actos durante la guerra, justificados ante la Historia por la necesidad de vencer a las potencias del Eje, por su ausencia de responsabilidad en el inicio de las hostilidades y por una actitud de superioridad moral derivada de su posición de vencedor. Ello igualmente estaba motivado porque en la mentalidad de las potencias vencedoras posiblemente se encontraba la premisa de que si el proceso se ceñía conforme a convencionales y estrictos criterios penales propios de un ordenamiento jurídico interno, difícilmente se podría enjuiciar con garantías de éxito a los principales responsables de dichos crímenes.

Visto desde los parámetros jurídicos actuales, es innegable que Núremberg no fue perfecto, y que si se hubiera celebrado hoy con los mismos mimbres con que se presentó en aquel entonces, difícilmente habría alcanzado el objetivo que se propusieron sus creadores. Pero, principalmente en atención a su carácter germinal para el desarrollo posterior de toda una conciencia internacional en defensa de los derechos humanos, entendemos que dicha imperfección no es un escollo insalvable a la hora de manifestar, al menos parcialmente, una valoración positiva del proceso.

NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA CITADAS (cronológicamente)

NORMATIVA

- II Convenio de la Haya, relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (1899).
- IV Convenio de la Haya, relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (1907).
- Tratado de Paz de Versalles (28 de junio de 1919).
- Tratado de Renuncia a la Guerra, o Pacto Briand-Kellog (27 de agosto de 1928)
- Estatuto del Tribunal Internacional Militar (8 de agosto de 1945).
- Ley del Control Aliado n.º 10 (20 de diciembre de 1945).
- *Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg and in the Judgement of the Tribunal. Report of the ILC. Coreing second session (5 junio-29 julio). U.N. Doc. A/1316.YBILC (segunda sesión. 1950). Vol. II, págs. 374-377.*
- Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia (*International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991*). U.N Doc. S/RES/827 (1993), 25 de mayo de 1993.
- Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda (*International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwanda Citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States between 1 January and 31 December 1994*). U.N Doc. S/Res/955 (1994), 8 de noviembre de 1994.
- Estatuto de la Corte Penal Internacional. U.N Doc. A/CONF/.183/2/Add.1, de 14 de abril de 1998.

JURISPRUDENCIA

- *International Military Tribunal (IMT), The Trial of German Major War Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany.*
- *Trials of the Major War Criminals before International Military Tribunal.* Washington 1952.
- *Caso USA v. Karl Brandt et. al., Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals.* Washington 1952, Vol. I y II.
- *Caso USA v. Joseph Altstötter et.al. Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals.* Washington 1952, Vol. III.
- *Caso USA v. Ohlendorf (Einsatzgruppen Prozess). Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals.* Washington 1952, Vol. IV.
- *Caso USA v. Flick et. al., Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals.* Washington 1952, Vol. VI.
- *International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991, Prosecutor v. Tadic, Jurisdiction, Case n. IT-94-1-T, Trial Chamber, 10 August 1995.*
- *International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991, Prosecutor v. Kunarac, Jurisdiction, Case n. IT-96-23 & 23/1, Trial Chamber, 22 february 2001.*
- *Tribunal Penal Internacional para Ruanda Caso Nº ICTR-96-4-T Fiscal vs. Jean Paul Akayesu Sentencia del 2 de septiembre de 1998.*

BIBLIOGRAFÍA

- BASSIOUNI, Ch., *Crimes Against Humanity Historical Evolution and Contemporary Application*. Cambridge 2011.
- BASSIOUNI, M.C., MANIKAS, P., *The Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, Transnational Publishers, Nueva York, 1996.
- BENTON, W.E. y GRIMM, G., *El juicio de Nuremberg desde el punto de vista alemán*, Tr. J.M. Ochoa, Editorial Constanza, México D.F.
- BIDDISCOMBE, P., *Dangerous liaisons: the anti-fraternization movement in the U.S. occupation zones of Germany and Austria, 1945-1948*, Journal of Social History, Oxford University Press, 2001, Vol. 34, Núm. 3, págs. 611–647
- BIX, Herbert.P., *Hirohito and the Making of Modern Japan*, Harper Perennial 2001.
- BULLOCK, A., *Hitler y Stalin*. Editorial Plaza y Janes 2001.
- CASSESE, A./RÖLING, B.V.A. *The Tokio Trial an Beyond*. Cambridge: Polity Press. 1993.
- CLARK, R., "Crimes against humanity and the Rome Statute", en Clark, Feldbrugge, Pomorski (eds.). *Essays in Honour of George Ginsburgs*, 2001.
- COBO DEL ROSAL, M./VIVES ANTÓN, T.S, *Derecho Penal. Parte General*. Tirant lo Blanch, 1990
- CONDORELLI, L, "La definition des infractions intenationales", en Ascensio, H., Decaux E, Pellet, A., *Droit Int.ernational Penal*, A.Pedone.
- DEMANDT, A., *Los grandes procesos de la historia*, Crítica, 2000.
- ERHARD, H., *The Nuremberg Trial against the Major War Criminals and International Law*, AJUL, 1949.
- ETKIND, A./FINNIN, R. (Coord.), *Remembering Katyn*. Cambridge: Polity Press, 2012.

- FERNÁNDEZ GARCÍA, A. y RODRÍGUEZ GIMÉNEZ, J.L., *El juicio de Nuremberg cincuenta años después*. Arco/Libros, S.L, Cuadernos de Historia 16, 1996.
- GARIBIAN, S., *Le crime contre l'humanité au regard des principes fondateurs de l'Etat moderne. Naissance et consécration d'un concept*, Schultless-Lgdj- Bruylant, Ginebra, París, Bruselas, 2009.
- GIL Y GIL, A., *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, N°. 10, abril – septiembre 2016.
- GÓMEZ ROBLEDO, A., *Los procesos de Nuremberg y Tokio. Precedentes de la Corte Penal Internacional*, Ars Iuris n.º 29, Universidad Panamericana. Facultad de Derecho.
- GÓMEZ ROBLEDO, A. "Los procesos de Nüremberg y Tokio: Precedentes de la Corte Penal Internacional". En *Derecho Internacional, Temas selectos* (5ª Edición). Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM. México 2008.
- HARRIS, Whitney R., *Tyranny on Trial. The Evidence at Nuremberg*, Dallas, 1954 Instituto de documentación e investigación jurídicas, enero 2003.
- IRIGOYEN, J., *El proceso de Nuremberg y el Derecho Internacional*, Lima: Villanueva, 1955.
- JACKSON, R. H. "Nuremberg in Retrospect: Legal Answer to International Lawlessness," en *American Bar Association Journal*, Vol. 35, 1949.
- JAEN VALLEJO, M., *Legalidad y extraterritorialidad en el Derecho Penal Internacional*. Atelier, Barcelona, 2006.
- KELSEN, H., *Peace through Law*, Garland Publishing Inc., Nueva York, 1973.
- KELSEN, H., "The Rule against Ex Post Facto Laws and the Prosecution of Axis War Criminals", *Judge Advocate Journal*, Núm. 2, 1945.
- LIÑÁN LAFUENTE, A., *El crimen contra la humanidad*, Dykinson 2015.
- OVERY, R., *Interrogatorios. El Tercer Reich en el banquillo*, Tusquets 2003.
- PALACIO SÁNCHEZ IZQUIERDO, J. R. *Del juicio de Nuremberg al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*, en *Estudios de Deusto: Revista de la Universidad de Deusto*, Vol. 47, N° 1, 1999.

- PASTOR RIDRUEJO, J.A., *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, Editorial Tecnos, 1989.
- QUINTANO RIPOLLÉS, A. *Tratado de Derecho Internacional e Internacional Penal*. Madrid: Instituto "Francisco de Vitoria", Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vol. II. 1957.
- QUINTANO RIPOLLÉS, A. *Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal*, Tomo I. Editorial Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Francisco Vitoria. Madrid. 1955
- RÖLING, B.V.A. / RÜTER, C.F, *The Tokio Judgement. The International Military Tribunal for the Far East*, University Press Amsterdam, 1977.
- SANDS, Ph., *Calle Este-Calle Oeste*, Anagrama, 2017.
- SCHMITT, C., *El crimen de guerra de agresión en el Derecho Internacional y el principio "nullum crimen, nulla poena sine lege"*, Hammurabi, Buenos Aires, 2006
- SCHWELB, E, *"Crimes Against Humanity,"* 23 The British Yearbook of International Law, 1946.
- WRIGHT, Q., *The Nuremberg Trial*. Annals of the American academy of Political and Social Science. Vol. 246, "Making the United Nations Work", 1946.

DOCUMENTOS (por orden en que se citan)

-<http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1851920>

[II_convenio_de_la_haya_de_1899.pdf](#)

-https://www.armenian-genocide.org/popup/affirmation_window.html?Affirmation=160

-[https://es.wikisource.org/wiki/Tratado_de_Versalles_\(1919\)](https://es.wikisource.org/wiki/Tratado_de_Versalles_(1919))

-<http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1851920/>

[Convenio_IV_de_la_Haya_de_1907.pdf/816306c0-6008-4959-972b-c07d84ea51b1](#)

- *Punishment for war crimes. A document issued by the Inter-Allied Information Committee London. The Inter-Allied declaration signed at St. James's Palace London on 13th january 1942, and relative documents.* <https://nla.obj-648522001/view?partId=nla.obj-648522082>

-<https://www.dipublico.org/8699/conferencia-de-moscu-octubre-de-1943-declaracion-conjunta-de-las-4-potencias>.

-<http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1852538/>

[estatuto_del_tribunal_de_nuremberg.pdf/20090fa2-e5bf-447a-aa96-612403df2a66](#)

-https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-II.pdf

-<https://www.dipublico.org/3584/tratado-de-renuncia-a-la-guerra-pacto-briand-kellog-1928/>

-https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_Vol-I.pdf

-http://nuremberg.law.harvard.edu/documents/2914-minutes-of-a-conference?q=*#p.4

- <https://avalon.law.yale.edu/imt/12-04-45.asp>

- <https://avalon.law.yale.edu/imt/imt10.asp>

- <https://www.dipublico.org/109514/formulación-de-los-principios-de-nuremberg/>

-<http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1851920/>

[II_convenio_de_la_haya_de_1899.pdf](#)

-[https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute\(s\).pdf](https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)

- <http://hrlibrary.umn.edu/instree/S-iccelementsofcrime.html>

- <https://www.legal-tools.org/doc/ffda62/pdf/>

- ICC, PTC II, “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya”, cit., § 93; PTC III, “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d'Ivoire”, 3.10.2011, § 46; *Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang*, PTC II, “Decision on the confirmation of charges” (ICC-01/09-01/11 1/139), 23.01.2012, § 185.

- *Punishment for war crimes. A document issued by the Inter-Allied Information Committee London. The Inter-Allied declaration signed at St. James's Palace London on 13th January 1942, and relative documents.*

<https://nla.obj-648522001/view?partId=nla.obj-648522082>.

- *Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals. Washington 1952, Vol. I, II, III, IV, VI.*

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT